



Universidad Nacional
de General Sarmiento

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 2012-2016

Acreditación de la CONEAU (224/11)

Tesis para Obtener el grado de
Magister en Ciencias Sociales

**La salida de la crisis de 2001.
Economía y política en el gobierno de Eduardo Duhalde.**

Ariel Emilio Fidanza
Director: Guido Starosta

Julio de 2016

- j. Colaboradores con el trabajo de Tesis: (sin colaboradores)
- k. Descripción física del trabajo de Tesis (cantidad total de páginas, imágenes, planos, videos, archivos digitales, etc.): **97 páginas**
- l. Alcance geográfico y/o temporal de la Tesis: **Argentina, 2001-2003**
- m. Temas tratados en la Tesis (palabras claves): **La salida de la crisis económica y política de 2001, la recomposición de la acumulación de capital a nivel nacional.**
- n. Resumen en español (hasta 1000 caracteres):


Esta tesis analiza el proceso de superación de la profunda crisis económica y política argentina de fines de 2001, centrándose en la que se postula como su primera y fundamental fase, llevada a cabo por el gobierno de Eduardo Duhalde (del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003). Para ello, se detallan sus principales claves económicas y políticas, y se las analiza a la luz de una discusión entre algunas hipótesis de la literatura especializada, proponiendo entenderlas como dos dimensiones de una unidad por la cual se recompuso la acumulación de capital modificando sus formas pero manteniendo la especificidad de su contenido.

- o. Resumen en portugués (hasta 1000 caracteres):
- p. Resumen en inglés (hasta 1000 caracteres):

This thesis analyses the processes of overcoming the profound economic and political Argentinian crisis at the end of 2001, with focus on what we claim was its first and fundamental fase, undergone by Eduardo Duhalde Administration (from January 2 of 2002 to May 25 of 2003). To do this, we look into its main economic and political key points and we analyse them in the light of a debate among some hypothesis of the academic bibliography, with the purpose of understand them as the two faces of a unitivity by which the accumulation of capital was recomposed, changing its forms but keeping the specificity of its content.

- q. Aprobado por (Apellidos y Nombres del Jurado):

Firma y aclaración de la firma del Presidente del Jurado:


Juan Carlos Cornejo

Firma del autor de la tesis:

 Ariel FIDANZA

Resumen:

Esta tesis analiza el proceso de superación de la profunda crisis económica y política argentina de fines de 2001, centrándose en la que se postula como su primera y fundamental fase, llevada a cabo por el gobierno de Eduardo Duhalde (del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003). Para ello, se detallan sus principales claves económicas y políticas, y se las analiza a la luz de una discusión entre algunas hipótesis de la literatura especializada, proponiendo entenderlas como dos dimensiones de una unidad por la cual se recompuso la acumulación de capital modificando sus formas pero manteniendo la especificidad de su contenido.

Palabras clave: Economía, Política, Acumulación de capital, Crisis

Abstract:

This thesis analyses the processes of overcoming the profound economic and political Argentinian crisis at the end of 2001, with focus on what we claim was its first and fundamental fase, undergone by Eduardo Duhalde Administration (from January 2 of 2002 to May 25 of 2003). To do this, we look into its main economic and political key points and we analyse them in the light of a debate among some hypothesis of the academic bibliography, with the purpose of understand them as the two faces of a unitivity by which the accumulation of capital was recomposed, changing its forms but keeping the specificity of its content.

Key words: Economy, Politics, Accumulation of capital, Crisis.

Índice

Capítulo I. ¿Qué salida de qué crisis? Un marco conceptual e histórico de “la crisis argentina de 2001”

Presentación.....	4
<i>Objetivos e hipótesis</i>	
<i>Justificación</i>	
<i>Método de trabajo</i>	
Perspectiva teórica	6
<i>Economía, política y acumulación de capital</i>	
<i>La crisis como parte intrínseca del capitalismo</i>	
La crisis argentina de 2001, su alcance y su salida	10
<i>La crisis como clave política y económica de su propia superación</i>	
<i>Sobre algunos conceptos y periodizaciones</i>	
Interpretaciones de la salida de la crisis	15
<i>La fractura interburguesa: sobre devaluadores y dolarizadores</i>	
<i>La lucha de clases como insurrección</i>	
<i>La especificidad de la acumulación en Argentina y sus formas políticas</i>	
Un cierre teórico para abrir la investigación	23
Corolario	25

Capítulo II. La salida económica

La salida económica: una clave, un marco complejo y un repunte final	27
La nueva estructura de precios relativos	29
<i>Los salarios</i>	
<i>Las retenciones</i>	
La pesificación	32
<i>Realineamiento de la banca</i>	
<i>Balance de la pesificación</i>	
Una negociación de Fondo	38
<i>Argentina y el FMI</i>	
<i>Breve repaso de la deuda</i>	
<i>La negociación imposible</i>	
Del “goteo” a la “crisis de abril”	41

Fortaleciendo el rumbo: la gestión Lavagna	43
<i>Un cierre al corralón</i>	
<i>El plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados</i>	
<i>El (mini)acuerdo con el FMI</i>	
Una mirada de conjunto	46
<i>Las dos caras de 2002: en la profundización de la crisis está su salida</i>	
<i>La continuidad (kirchnerista) de la recuperación</i>	
<i>Una mirada al nuevo ciclo económico (kirchnerista)</i>	

Capítulo III. La salida política

La salida “por arriba” y la salida “por abajo”	51
Dos puntos de inflexión: la “crisis de abril” y la “masacre de Avellaneda”	53
La crisis en su contexto: de la recesión hasta la asunción de Duhalde	54
<i>La “crisis de representación” política</i>	
<i>El naufragio de la Alianza</i>	
<i>El estallido</i>	
<i>El paréntesis de Rodríguez Saá</i>	
El gobierno de Duhalde y sus apoyos	57
<i>El apoyo económico-corporativo: el Grupo Productivo</i>	
<i>El apoyo político-corporativo</i>	
La oposición a Duhalde: competidores políticos y resistencia social	62
<i>La oposición política</i>	
<i>La oposición judicial</i>	
<i>La oposición social: una potencia desarticulada</i>	
<i>El movimiento piquetero</i>	
La “crisis de abril”: el consenso “por arriba”	66
La “Masacre de Avellaneda” y el comienzo de la transición	69
<i>La “Masacre de Avellaneda” del 26 de junio: los hechos en contexto</i>	
<i>El 26 de junio como bisagra: de la protesta a la institucionalización</i>	
<i>El rol de los planes sociales</i>	
<i>La “Masacre de Avellaneda” como inicio de la transición</i>	
La transición negociada: el acuerdo con Néstor Kirchner	74
<i>El peronista rebelde</i>	
<i>El adelanto de las elecciones</i>	
<i>Hacia el acuerdo</i>	
Un balance del gobierno de Duhalde y una hipótesis sobre el gobierno de Kirchner	78
<i>Las tres claves de Duhalde</i>	
<i>La salida de Kirchner</i>	

Capítulo IV. Conclusiones. La crisis como la separación de una continuidad

Recapitulando la salida de la crisis	81
<i>La salida económica</i>	
<i>La salida política</i>	
La caracterización de la crisis y su salida	84
<i>¿Crisis de hegemonía o crisis orgánica? ¿Bloque histórico o bloque de poder?</i>	
<i>Cambios (en la continuidad) y continuidades (en el cambio)</i>	
<i>El rol del Estado</i>	
<i>Los tiempos de la crisis</i>	
La crisis como forma ideológica	88

Bibliografía y Fuentes

Bibliografía	91
Fuentes	96
<i>Artículos periodísticos firmados</i>	
<i>Fuentes estadísticas y jurídicas</i>	
<i>Fuentes filmográficas</i>	
<i>Memorias Políticas</i>	
<i>Notas sin firma en diarios nacionales</i>	
<i>Fuentes periodísticas de investigación</i>	

Capítulo I.

¿Qué salida de qué crisis? Un marco conceptual e histórico de “la crisis argentina de 2001”.

Presentación

Objetivos e hipótesis

El objetivo central de la presente tesis consiste en analizar el proceso de superación de la profunda crisis política y económica que atravesó la Argentina entre fines de 2001 y principios de 2002. Para ello, nos centraremos en la que entendemos fue la primera y fundamental fase, llevada a cabo por el interregno de Eduardo Duhalde (del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003)¹, analizando sus principales claves económicas y políticas, entendidas como dos caras de una unidad por la cual se recompuso la acumulación de capital modificando sus formas pero manteniendo la especificidad de su contenido. Sostenemos que la salida de la crisis fue completada en una segunda fase por el gobierno de Néstor Kirchner innovando desde lo político-ideológico pero sobre la base y continuidad de la salida económica².

Justificación

Existe una creciente producción académica acerca del período de la *posconvertibilidad*, pero que se centra en los gobiernos kirchneristas, relegando el interregno duhaldista en una reducción cuantitativa y cualitativa. En sus versiones más agudas, aparece prácticamente elidido, expresando que la recuperación comenzó en 2003. Aunque minoritarias en la

¹ Tras la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa el 20 de diciembre de 2001 en medio de un estallido de protesta social de alcance nacional que dio fin al gobierno de la Alianza en su conjunto, se inicia una breve pero turbulenta sucesión presidencial dentro de los marcos constitucionales que concluye, luego de tres efímeros presidentes del Partido Justicialista, con la designación el 2 de enero de 2002, por medio de una Asamblea Legislativa, de quien fuera el más importante líder de ese partido, ex gobernador de la mayor provincia del país (Buenos Aires, entre 1991 y 1999) y ex candidato presidencial en 1999, habiendo obtenido el segundo lugar con el 39% frente al 48,5% del candidato de la Alianza, y cuyo mandato de gobierno ahora debía completar. Sin embargo, finalmente adelantó las elecciones y la sucesión presidencial, que debía ocurrir el 10 de diciembre de 2003, se realizó el 25 de mayo del mismo año.

² Hipótesis similares sostienen Cantamutto y Wainer (2013), Bonnet (2015) y Piva (2015).

producción académica, estas expresiones suponen una clara intencionalidad política de diferenciar al kirchnerismo del duhaldismo, y mostrar al primero como el que “rescató” al país de la crisis [observación crítica que advierten Dagatti (2013) y Sarlo (2011)]. Pero incluso cuando se reconoce que el gobierno de Duhalde cimentó las bases de la recuperación económica, aun así no se detalla su desarrollo ni se le reconoce un carácter específico. Es el caso de Alberto Bonnet, quien aun cuando le reconoce una diferencia y sobre todo una importancia clave, subsume el interregno duhaldista al período kirchnerista (Bonnet, 2015). Si bien dicha caracterización es perfectamente válida, y compartimos parte de su razonamiento, antepone en un primer momento un desarrollo que vino después, que entonces no era ni previsible ni necesario, vaciándolo de sus especificidades.

Por otro lado, al tomar un criterio “institucionalista” de seleccionar un mandato gubernamental, no por ello estamos proponiendo este criterio como periodización, sino como simple “recorte” operativo a los fines del período a analizar. Más bien, siguiendo a Grigera y Eskenazi, sostenemos que la *salida de la crisis* se puede ampliar hasta el último trimestre de 2005, cuando la recuperación económica dio paso a un período de “crecimiento genuino” (Grigera y Eskenazi, 2013); a lo que nosotros agregamos la complementación de la salida política, pues fue también entonces que el *kirchnerismo* se consolidó como fuerza política, al enfrentarse con el duhaldismo y vencerlo en las elecciones legislativas de octubre de ese año³.

Método de trabajo

Nuestra investigación consiste en una revisión crítica de las investigaciones contemporáneas para proponer una relectura de lo que constituye ya un campo de debate y un corpus de material que nos habilita a un balance. Nos referimos a trabajos e investigaciones de Sociología Económica, de Sociología Política, de Economía Política (sobre todo de Economía Política Crítica) y de Crítica de la Economía Política sobre la Argentina de las últimas décadas⁴.

Nos enfocamos en un momento determinado (básicamente el año 2002) para el cual, si bien es analizado como parte de un período histórico más amplio, hemos relevado un seguimiento más

³ Enfrentamiento que se condensó en las candidaturas bonaerenses para el Senado Nacional que encabezaron Cristina Fernández de Kirchner e Hilda “Chiche” González de Duhalde, sendas esposas de los entonces presidente y ex presidente, pero con trayectorias políticas propias.

⁴ La Sociología Económica se centra en las dinámicas de relaciones sociales de grupos, corporaciones empresarias, de los actores concretos. La Economía Política es la tradición que se centra en los procesos económicos desde una mirada de las clases sociales y las políticas estatales. La Economía Política Crítica es la de las tradiciones marxistas o heterodoxas, mientras que la Crítica de la Economía Política es el enfoque propio de Karl Marx desarrollado en su obra magna, *El Capital*.

detallado. Para ello, además de las fuentes secundarias mencionadas, hicimos uso de fuentes primarias como diarios de la época, memorias políticas, trabajos de investigación periodística y organismos gubernamentales.

Por último, cabe destacar que los primeros trabajos mencionados funcionan a la vez como bibliografía teórica e histórica, incluso como fuentes, desde una lectura cruzada y comparada. Particularmente para los datos económicos, se complementó cuando fuese necesario con fuentes primarias gubernamentales, además de utilizar otras fuentes secundarias que se basan en ellas.

Perspectiva teórica

Nos proponemos abordar la trama social compleja de las transformaciones en el proceso de acumulación de capital, apuntando principalmente a los cambios económicos y políticos que ello implica. Dicho en términos llanos, nos interesa la economía y la política del gobierno duhaldista porque entendemos que conforman dos caras de una unidad que se explica como un proceso de recuperación de la acumulación de capital.

Economía, política y acumulación de capital

La mirada más común en las ciencias sociales es la de distinguir economía y política como dos campos separados aunque relacionados. Esto se refuerza con la propia distinción de las disciplinas, y sobre todo con la “matematización” y “des-socialización” de la Economía como ciencia desde fines del siglo XIX. Pero incluso las perspectivas “heterodoxas” que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, como las keynesianas, estructuralistas y dependentistas, entre otras, que subrayan el carácter político y social de los procesos económicos, no dejan de marcar cierto margen de autonomía a partir del cual se imbrican las fuerzas económicas y políticas. dentro del marxismo también existe algo similar, con la clásica distinción entre *base* y *superestructura* y la *determinación económica*, así como con los vaivenes de la

sobredeterminación de Louis Althusser y la reivindicación de la *autonomía relativa* de la política y del Estado desde Antonio Gramsci hasta Nicos Poulantzas y el Regulacionismo⁵.

Nuestra perspectiva abreva en otra vertiente marxista que apunta a comprender la unidad de un proceso complejo en el cual lo que normalmente se llama economía y política son aspectos específicos pero insolubles de un solo curso. Lo mismo cabe si ampliamos o subdividimos a las dimensiones jurídicas, ideológicas y demás aspectos de lo social. *Entendemos a la economía y la política como formas históricas institucionalizadas del desarrollo de la acumulación del capital*⁶. Como tales, van siendo transformadas con el devenir histórico. Como aproximación, sin pretender una definición exhaustiva, entendemos por “economía” a las formas fetichizadas⁷ que adopta el crecientemente complejo intercambio de mercancías, que en el modo de producción capitalista es el modo en que se rigen las relaciones sociales indirectas entre sus productores (Marx, 2008). Por “política”, nos referimos a la organización de las relaciones directas entre las personas, principalmente a las distintas formas de la lucha de clases y al Estado, con todas sus formas institucionales, como mediación constitutiva (y no externa) de esas formas de lucha, incluyendo la regulación del marco institucional de los procesos económicos. Claro que no por ser directas están menos atravesadas por la relación social general (indirecta) que constituye a los miembros de la sociedad capitalista, y que se estructuran en torno a ella. En una simplificación por demás esquemática, economía y política se refieren a las esferas del Mercado y del Estado, cada una con una lógica específica y superficialmente enfrentadas entre sí, pero que lejos de ser contradictorias u opuestas son más bien complementarias y se suponen recíprocamente (Bonnet, 2011). El siguiente extracto lo explica bien:

“En resumen, las relaciones sociales capitalistas existen de manera diferenciada en formas económicas (el movimiento autonomizado de las mercancías del capital en el mercado) y formas políticas (la lucha de clases y el Estado). Estas últimas, lejos de disfrutar de «autonomía» (relativa o de otro tipo), son el modo necesario de realización del contenido contradictorio del modo económico de existencia de las relaciones sociales capitalistas. En otras palabras, la lucha de clases y las políticas estatales no deben considerarse como independientes, factores autónomos que externamente modifican o influyen el funcionamiento de la ley del valor. Más bien, deben

⁵ Existe una extensa literatura sobre estos temas, que son verdaderos nudos de debates dentro del marxismo y sobre el marxismo. Ver, por ejemplo, Williams (1980), Cohen (1989), Althusser (2004), Gramsci (2003), Poulantzas (1990), Boyer (1989), entre muchos otros.

⁶ Nos inspiramos en la propuesta de Juan Iñigo Carrera (en sus textos y sus clases, ver bibliografía y www.cicpint.org).

⁷ Por ello no entendemos que sean ni ilusorias ni falsas, sino propias de la contradicción inherente al modo de producción capitalista en el cual los trabajos privados se equiparan socialmente en el igualmente privado intercambio de los productos entre sus poseedores (Marx, 2008).

comprenderse como los modos necesarios del movimiento a través de los cuales la ley del valor se va desarrollando más allá de las formas estrictamente económicas que surgen inmediatamente a partir de la naturaleza indirecta de las relaciones sociales de producción capitalistas” (Grinberg y Starosta, 2014: s/p. Traducción propia del inglés).

En el marxismo, esta perspectiva se puede rastrear en el *derivacionismo* alemán de las décadas de 1960 y 1970, en su *reformulación* por Joachim Hirsch y su continuación en los autores anglosajones del denominado *marxismo abierto*⁸. Retomamos las tradiciones que plantean que la separación entre economía y política es propia del desarrollo histórico capitalista⁹, pero que como tal contiene la unidad de la que ambas son expresión. No se trata entonces sólo de las relaciones entre economía y política, sino de la relación de cada una –y entre ambas– con la acumulación de capital.

“Lo económico no debe verse como la base que determina la superestructura política, sino que más bien lo económico y lo político son ambas formas de relaciones sociales, formas asumidas por la relación básica del conflicto de clase en la sociedad capitalista, la relación capital; formas cuya existencia separada emerge, a la vez lógica e históricamente, de la naturaleza de esta relación” (Holloway y Picciotto citado en Bonnet, 2007: 287).

Pero dentro de esta vertiente marxista, existe a su vez una diferenciación entre dos enfoques según cómo se entienda la unidad que da contenido al proceso. Por un lado, la “relación capital” da prioridad a la lucha de clases que va configurando la marcha de la acumulación, por otro lado, la lucha de clases es el proceso concreto por el cual la acumulación se desenvuelve. En otras palabras, esta última postura entiende al capital como sujeto enajenado del proceso histórico natural de reproducción de la vida humana por el cual “la conciencia y voluntad del obrero no tiene otra determinación que el ser la forma concreta necesaria de la enajenación de las potencias del trabajo humano como potencias del capital” (Iñigo Carrera, 2003: 14); mientras la otra postura entiende que “el capital *es* lucha de clases” (Holloway, 1993: 170), priorizando así el enfrentamiento entre clases como motor del proceso de acumulación, dando importancia al fenómeno de *dominación* junto al de la *explotación*, en vez de ser el primero una forma del segundo.

La diferencia puede parecer simplemente retórica, pero su contraste se comprende y adquiere importancia en la medida que se aplica a la interpretación de procesos históricos concretos

⁸ Para una muestra del marxismo abierto y de la reformulación de Hirsch, ver la compilación de Bonefeld y Holloway (ed.) (1993); para estudios de dicha posición y sus vínculos con el derivacionismo, el estudio de Bonnet (2007). En Altamira (2006), se analiza comparativamente al marxismo abierto con el obrerismo italiano.

⁹ “En su propio proceso de constitución y reproducción, la sociedad capitalista escinde el campo de lo «económico» y de lo «político» como elementos absolutamente diferenciados, y los escinde no sólo en el plano de la teoría sino fundamentalmente en el plano de la realidad” (Aricó, 2011: 9).

como el que nos compete. Nuestra posición con respecto a este debate es una postura “intermedia”, que pretende estar reflejada en la interpretación del apartado siguiente y, en definitiva, en la totalidad de la presente investigación. En pocas palabras, reconocemos que es en el proceso de acumulación de capital donde se encuentran las determinaciones más importantes de los procesos de subjetivación, pero entendemos que estas determinaciones son lo suficientemente complejas como para implicar un entramado de formas sociales (económicas, políticas, jurídicas, ideológicas, etc.) que conforman un proceso irreductible a una necesidad unívoca y previa. Es decir, creemos que existe un abanico de posibilidades en las relaciones entre e intra clases dentro de las determinaciones de la acumulación en un momento dado. Se trata entonces de evaluar en cada caso, en la medida de lo posible, qué responde a la necesidad de las determinaciones del capital y qué se halla entre las *posibilidades abiertas dentro de dicha necesidad*. Sintetizando nuestra postura al máximo, sostenemos que la salida de la crisis del gobierno de Duhalde expresó las necesidades del capital, pero que constituyó una forma de hacerlo y no la única; una forma en gran medida necesaria, pero justamente de lo que se trata es de *precisar cómo fue esa forma para evaluar a qué determinaciones respondió, en qué medida y aspectos fue necesaria y en cuáles no*. En la medida de lo posible, es lo que nos proponemos en la presente tesis.

Por lo pronto, nuestro planteo no apunta a encontrar en las políticas de los gobiernos la causa suficiente del devenir nacional, sino más bien colegir esas manifestaciones como expresiones de un momento de la acumulación de capital que excede a la voluntad de cualquier actor en particular, incluso del gobierno y de representantes corporativos de fracciones burguesas. Precisamente, el Estado es la expresión política del capital global o capital social total (Iñigo Carrera, 2004; Grinberg y Starosta, 2014); y dicha expresión no está exenta de contradicciones (las propias del capital social que expresa y las propias de su forma histórica institucional e ideológica). El fondo o el contenido que siempre está operando “a espaldas” de los actores son las determinaciones de la producción y circulación de mercancías a nivel mundial y los mecanismos por los cuales el capital canaliza su valorización, lo que genera efectos y obliga a los sujetos a tomar decisiones, todo lo cual se expresa en la “economía” así como en la “política”.

Nuestra propuesta apunta entonces a leer las políticas gubernamentales y sus posicionamientos ideológicos como las formas de desenvolvimiento de un proceso de acumulación sobre el que sin duda intervienen en tanto lo constituyen políticamente con sus prácticas, pero al que no le imponen el rumbo de manera arbitraria, sino que lo comandan respondiendo a sus propias necesidades, no necesariamente de manera consciente, y hasta de manera anárquica y

contradictoria. Y esto último es particularmente cierto para las crisis y los momentos de superación de las mismas.

La crisis como parte intrínseca del capitalismo

Lejos de ser anomalías, las crisis son parte constitutiva del capitalismo y constituyen momentos clave de reestructuración. Para Marx, no se trata de factores externos al proceso, sino que la propia dinámica de acumulación de capital lleva necesariamente a contracciones que serán moderadas, retardadas o superadas de distintas formas. “El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital” (Marx, 2013: 321). La superación de la crisis no elimina las contradicciones que son su base, sino que las reproduce (Shaikh, 2006; Iñigo Carrera, 2004; Clarke, 1988)¹⁰. Y lo hace, generalmente, de manera acrecentada, posponiendo la contradicción “hacia adelante” (típicamente con el crédito) y/o “hacia afuera” (incorporando nuevos mercados); o bien, destruye parte de la sobreproducción que no logra realizarse como ganancia.

La crisis argentina de 2001, su alcance y su salida

Entendemos que la crisis argentina de 2001 se inscribe en una *crisis de sobreproducción*¹¹ mundial, pero en nuestra investigación lo importante es ver cómo se resolvió a nivel local una crisis económica puntual que si bien es genéricamente de acumulación, se caracteriza por un ahogo financiero (como veremos, expresión del límite de una forma de procurar realizar parte de la sobreproducción mundial) y del límite de competitividad productiva, característica de

¹⁰ “El proceso de acumulación ahonda las contradicciones internas en que se basa hasta que estallan en una crisis: los límites del capitalismo son inherentes a él” (Shaikh, 2006: 312). “La superación de la crisis de sobreproducción general no elimina esta contradicción, sólo la resuelve reproduciendo su desarrollo sobre una nueva base” (Iñigo Carrera, 2004: 181). “La sobreproducción no es simplemente el reverso del subconsumo, a ser aliviado expandiendo la demanda. La expansión de la demanda aliviaría la presión del mercado, pero sólo para estimular una renovada sobreacumulación. La sobreacumulación no es una patología del mercado, es la forma necesaria de la acumulación de capital” (Clarke, 1988: 105. Traducción propia del inglés).

¹¹ Es decir, una producción creciente que no logra ser validada con una compra que realice el plusvalor. Según distintos autores, esto puede responder a su vez a la *ley de la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia*, debido al avance en la productividad que disminuye los tiempos de trabajo socialmente necesarios, o bien pueden ser dos tendencias distinguibles. De todas maneras, y más allá de las distintas formas que puede adquirir esta contradicción, lo esencial es que no se trata de la teoría del subconsumo ni de la “presión salarial”, ambas teorías marxistas alternativas (Shaikh, 2006).

nuestra historia nacional, y en un contexto de baja afluencia de renta (Iñigo Carrera, 2003). Todo lo cual implicó una crisis social profunda (con desempleo, pobreza, etc.).

La crisis como clave política y económica de su propia superación

“la crisis económica (...) en ningún caso [es] una avería en el proceso social. La crisis ya es, al contrario, una reparación de averías anteriores, un modo de reabsorber los desequilibrios acumulados durante el precedente período de crecimiento, sin la cual el modo de producción vigente no podría mantenerse. (...) Dicho de otro modo, la crisis tiene una función social y económica muy precisa en la dinámica de la mercancía. (...) Más allá de la simple depresión, la crisis es el lugar de instauración de un orden” (Attali, 1979: 164-5).

Siguiendo la idea de la cita, no se trata tanto de cómo se enfrenta la crisis, sino de que la crisis ya es en sí misma una respuesta a los problemas de acumulación capitalista. Pero incluso esos “problemas” no son “averías” sino contradicciones propias del mismo desarrollo capitalista. La crisis tiene una doble función: “la crisis es, en principio, lo que revela, libera y hace estallar las contradicciones” (Gaudibert, 1979: 220), pero a la vez, es “un mecanismo por el cual el modo de producción capitalista supera los obstáculos que él mismo crea y recrea sin cesar” (Gaudibert, 1979: 225).

La crisis es la forma económica y política de salir de un ciclo de acumulación estancado tanto económica como políticamente. La crisis supone, en su superación, una transformación de algunas de las formas económicas institucionalizadas en ese momento, y dichas transformaciones son (mayormente) operadas políticamente desde el Estado, pero respondiendo a la necesidad del capital. Más concretamente, la superación de la crisis es la forma que habilita descargar el peso económico sobre la clase trabajadora en general y sobre fracciones de la burguesía (a la vez que otras fracciones se benefician) y comenzar un nuevo ciclo económico con renovadas formas económicas y políticas.

Las propias características de la crisis determinan en gran medida cómo será la salida de esa crisis¹². La salida de la crisis implica un cambio en aspectos de la acumulación de capital que conlleva modificaciones en relaciones sociales (económicas y políticas) para hacerlos posibles. La crisis expresa la dificultad o insuficiencia de los procedimientos “normales” (para ese período) para efectuar ese cambio o “ajuste”. La salida de la crisis, entonces, supone

¹² Todo esto vale, desde luego, para las crisis capitalistas que son superadas en el marco capitalista, incluyendo un amplio rango de procesos de transformación, que por otro lado no excluyen cambios sociales de todo tipo, sea culturales, instituciones, identitarios, etc.

procedimientos extraordinarios que violentan, en mayor o menor medida, las formas económicas y políticas que se mostraron impotentes para realizar los ajustes requeridos.

Así, por ejemplo, la Convertibilidad fue una acción política que impuso de manera jurídica nuevas normas económicas que dieron una forma monetaria (estable y sobrevaluada), que facilitó la circulación (entrada y salida) masiva de capitales (con las privatizaciones y el endeudamiento). Pero esta y otras transformaciones institucionales, económicas, políticas e ideológicas, fueron la forma de la valorización de capitales que permitió superar la crisis de 1989.

La crisis de 2001, por su parte, expresó un límite a dicha valorización, con el agotamiento del crédito externo, la baja afluencia de renta y la insuficiencia y el límite del “ajuste deflacionario” (Bonnet, 2015; Piva, 2015), es decir, de baja del salario de manera nominal, por la resistencia operada desde la protesta social. Ante la impotencia del gobierno de la Alianza, la salida de la crisis supuso un cambio de gobierno que anunció el default, y luego otro cambio de gobierno que derogó la Convertibilidad, modificando el equilibrio interno al capital y sobre todo con respecto a los trabajadores, con un “ajuste inflacionario” (Bonnet, 2015; Piva, 2015) mediante la devaluación de la moneda que la Convertibilidad impedía. De esta manera, se recuperó en primer lugar la acumulación de los capitales internos, y con ello el equilibrio fiscal del Estado que permitió más adelante (reestructuración de deuda mediante) la recuperación de la valorización de los capitales acreedores externos e internos (parcial en el caso de los privados, pero total en el caso de los organismos internacionales).

En nuestra mirada, entonces, si bien la salida de la crisis implica una modificación más o menos drástica en las formas económicas (y políticas) de la acumulación de capital, el cambio de fondo lo determina la propia necesidad de la acumulación, y no una imposición política, que es más bien su expresión ejecutiva. En este sentido interpretamos con resguardo la siguiente afirmación:

“Es en las crisis capitalistas precisamente cuando la separación entre economía y política, que adquieren una aparente inmutabilidad en los períodos de crecimiento «normal», tiende a debilitarse y ser puesta en cuestión, de modo que toda crisis –y tanto más cuanto más profunda sea– se dirime políticamente” (Eskenazi, 2009: 153, nota 9).

Si bien la crisis es un momento en que la confrontación política toma cierta preeminencia, no creemos que la “política” se “emancipe” de la economía, que se separe, y adquiera una fuerza autónoma que imponga por la fuerza un rumbo nuevo. Siguen operando las determinaciones de las relaciones sociales de producción, que no son “la economía”, pero eran expresadas en

buena medida por las formas de “la economía”, y ahora empiezan a necesitar de otra forma de expresión económica que debe crearse políticamente. La instancia política más explícita durante la crisis, entonces, no se explica en sí misma, sino como forma de dirimir lo que no puede hacerse con las formas económicas normales del período anterior.

Todo esto no ocurre de manera “funcionalista” [(como parece en la escuela de la Regulación (Clarke, 1993)], sino atravesado por la lucha de clases que la política (y la economía) siempre contiene, de manera más o menos oculta, y que no deja de responder a las determinaciones en las relaciones sociales de producción en un momento y espacio geográfico determinado, y en definitiva en el espacio mundial. Muchas veces ocurre (como veremos) con idas y vueltas, errores y rectificaciones, pues, como ya dijimos, las relaciones sociales en el modo de producción capitalista son anárquicas y contradictorias, y no se excluyen componentes singulares (personales e históricos, naturales y azarosos) pero que no operan de manera separada de las determinaciones sociales, sino que las encarnan.

Sobre algunos conceptos y periodizaciones

Ahora bien, la crisis evidencia la necesidad de un cambio, pero que puede implicar distintos alcances. En términos esquemáticos, puede abarcar desde una modificación en las propias bases de la acumulación, o bien requerir un cambio en las formas de reproducir la acumulación sobre las mismas bases. Sostenemos, y lo justificaremos a lo largo del trabajo, que este último fue el caso en la superación de la crisis de 2001.

Las crisis muchas veces son señaladas como clivajes entre distintos *modelos de acumulación*. El concepto es un tanto ambiguo –de “indefinición sistemática y polivalencia notorias” (Varesi, 2013: 195)–, proviene de la tradición regulacionista, y en nuestro medio se impuso fuertemente a partir de la obra de Eduardo Basualdo y otros autores de FLACSO¹³. Compartimos la crítica que consiste en lo esencial en señalar el carácter cerrado y “politicista” de estos supuestos modelos, que se confunden con proyectos políticos y políticas económicas (Bonnet, 2015). Preferimos, en todo caso, la conceptualización alternativa de “*modo de acumulación*” (Bonnet, 2015; Piva, 2015), que mantiene la idea de configuraciones particulares en momentos

¹³ Ver apartado siguiente. Una crítica más detallada se halla en Bonnet (2015), pp. 161-164.

históricos de la acumulación, pero no cargan el peso de la consistencia y coherencia que implica un *modelo*¹⁴.

El concepto de *hegemonía* también abarca un debate muy amplio. Si bien es indiscutible la crisis de legitimidad política hacia fines de 2001 en Argentina, el concepto de hegemonía contiene múltiples cuestiones a considerar, que van desde aspectos económicos a aspectos culturales. De todas formas, dado que su discusión con respecto a nuestro tema se centra en caracterizar a la etapa propiamente kirchnerista¹⁵, solo nos referiremos parcialmente a ella. Una discusión más acotada pasa por caracterizar la *hegemonía interna al “bloque de poder”*¹⁶. Es decir, qué fracciones de clase asumen una posición dominante dentro del bloque dominante, lo cual sí retomaremos a partir de la bibliografía especializada.

También, en estrecha relación, se encuentra el debate sobre la caracterización de la crisis en los términos conceptuales de la tradición gramsciana (crisis de hegemonía, crisis orgánica, transformismo, bloque histórico, etc.). Si bien no compartimos dicho marco teórico, nos pronunciaremos al respecto en las Conclusiones por tratarse de términos muy arraigados en la literatura especializada local¹⁷.

Estos conceptos implican además un debate en torno a la *periodización* de nuestro objeto de estudio. Por un lado, con la crisis de 2001 habría concluido “un modelo de acumulación de valorización financiera” iniciado con el gobierno dictatorial de 1976 (Basualdo, 2001). En esta línea, por solo mencionar un ejemplo, Castellani y Pucciarelli inscriben la “crisis de 2001” en una larga decadencia “vinculado a la conformación de un nuevo régimen social de acumulación instaurado en la última dictadura” (Castellani y Pucciarelli, 2014: 13). Pero existe menos acuerdo, incluso dentro de esta postura, al caracterizar al ciclo posterior, que por ello suele denominarse en forma genérica como la *Posconvertibilidad*¹⁸. Por otro lado, algunos

¹⁴ Por no hablar de su carga funcionalista que es en lo esencial la crítica de Simon Clarke al regulacionismo iniciado por Michel Aglietta (Aglietta, 1986), y por lo que propone que las formas institucionales que estudia el regulacionismo son valiosas pero deben ser básicamente entendidas como *formas institucionales de la lucha de clases*, más que de la simple reproducción del capitalismo como esquema económico (Clarke, 1993).

¹⁵ Para un relevamiento crítico de los múltiples usos del concepto sobre el kirchnerismo, Rocca y Waiman (2012).

¹⁶ Concepto de Poulantzas (1990), de raigambre gramsciana. En su uso, con matices, coinciden aquí las dos primeras posturas que se relevan en el apartado siguiente.

¹⁷ La tesis de Basualdo sobre el transformismo argentino luego de la dictadura militar (Basualdo, 2001), no hizo sino renovar una tradición de debate en términos gramscianos presente desde la tesis de Juan Carlos Portantiero sobre el empate hegemónico para el período 1958-1973 (Portantiero, 1977).

¹⁸ Existe al respecto un debate sobre la caracterización del kirchnerismo como un *neodesarrollismo*. Una lectura crítica en Piva (2015) pp. 52-56. En menor medida, y en sentido contrario, se plantea un modelo *extractivista de reprimarización*, basado en la megaminería y la *sojización*, pero como sostiene Bonnet, el primero no llega ser significativo en el producto total y el segundo no es propiamente una actividad primaria, sino fundamentalmente agroindustrial (Bonnet, 2015).

autores (Bonnet, 2008; 2015; Piva, 2012; 2015), resaltan el quiebre sucedido en 1989 que habría modificado el *modo de acumulación*, cambiando *la forma Estado*, pero que habría continuado luego de la crisis de 2001, con algunas modificaciones, en el período kirchnerista¹⁹. Retomaremos esta posición y discutiremos asimismo la hipótesis de “considerar el ciclo iniciado en 2002-2003 como una sub etapa dentro de la más general abierta con el proceso hiperinflacionario de 1989” (Piva, 2015: 48).

Interpretaciones de la salida de la crisis

En un trabajo de Martín Schorr y Ana Castellani se plantean cuatro interpretaciones sobre la crisis de la Convertibilidad. Una propia del “neoliberalismo”, que plantea las insuficiencias en mantener dicho esquema, básicamente, insuficientes reformas estructurales y excesivos gastos públicos (es decir, la línea “economicista” liberal o neoliberal). Una segunda visión, propia de la Unión Industrial Argentina, plantea la rigidez del modelo que atentaba contra los intereses de los sectores productivos (que fuera de su expresión más corporativa de la UIA se puede encontrar en trabajos también económicos pero de corte más “heterodoxo”). Una tercera encuentra que fueron las luchas populares contra los aspectos regresivos del modelo los que dieron fin con el “Argentinazo”, que los autores ejemplifican con trabajos de Alberto Bonnet. Y una cuarta interpretación, que los autores asumen como propia, junto a investigadores de FLACSO como Eduardo Basualdo, que “vincula la crisis del modelo neoliberal con un proceso de fractura dentro de la gran burguesía argentina” (Castellani y Schorr, 2004: 57). Son estas dos últimas interpretaciones las que analizaremos y agregaremos la desarrollada por Juan Iñigo Carrera. Comencemos por la interpretación de la fractura interburguesa.²⁰

¹⁹ “La hiperinflación de 1989 representó el final de un modo de acumulación de capital, de una lógica de enfrentamiento entre clases y de una determinada forma de Estado” (Piva, 2015: 20).

²⁰ En un trabajo de la línea regulacionista local, Luis Miotti y Carlos Quenan proponen otra partición en cuatro interpretaciones. Dos son similares a las dos primeras, mientras que una tercera enfatizaría la “corrupción generalizada” y “las transferencias de patrimonio en provecho de los grandes grupos privados”, en el cual incluyen a Azpiazu y Basualdo. Y una cuarta se centra en la “sucesión de shocks” externos que sacudieron la economía entre 1997 y 2001 (crisis del sudeste asiático, devaluación brasileña). Por su parte, los autores concluyen que la crisis se debió a “una inadaptación del modo de regulación, que devino incompatible con las reglas de ajuste inducidas por la configuración internacional vigente a fines de los años noventa”, y que “la supremacía del régimen monetario y de la inserción internacional se traduce en una disminución de los márgenes de maniobra de las autoridades para hacer frente a los shocks externos desfavorables” (Miotti y Quenan, 2004: 99-100). Lo cual no deja de ser una combinación de las cuatro interpretaciones en el marco regulacionista.

La fractura interburguesa: sobre devaluadores y dolarizadores

Tal como los autores marcan en el texto citado, esta línea de interpretación surge con el ya mencionado texto de Eduardo Basualdo que incluso es previo al estallido de diciembre de 2001 (Basualdo, 2001), y puede resumirse como ellos lo hacen:

“la crisis de 2001 es la forma en que se expresa un agudo enfrentamiento entre las distintas fracciones que integran el bloque dominante, conflicto que encuentra sus raíces en los cambios estructurales ocurridos al interior de los grandes agentes económicos que se desenvuelven en el país. Se trata de un enfoque analítico que propone estudiar a la gran burguesía como actor político tomando en cuenta tres dimensiones fundamentales: la económico-estructural, la organizacional y la político-ideológica” (Castellani y Schorr, 2004: 57, el destacado es nuestro).

Nuestra mirada es más bien al revés. El enfrentamiento interburgués es la forma de expresarse la crisis, o bien, “lejos de explicarse la crisis por las disputas entre sectores de la burguesía, éstas se explican por aquellas” (Eskenazi, 2011: 154). Otro punto de disidencia es específicamente con respecto a la propuesta dolarizadora, la cual entendemos no constituía una opción real de salida de la crisis (Eskenazi, 2011), y que incluso no fue una postura de una fracción significativa de la burguesía local (Salvia, 2014), sino apenas una propuesta política y académica, por lo demás relativamente marginal.

De todas formas, sí entendemos que existió una separación de intereses en la gran burguesía local (sea nacional, extranjera o mixta). Al respecto, Cantamutto y Wainer distinguen tres grupos: 1) los sectores de mercancías no transables (de servicios y finanzas); 2) los de mercancías transables con alta productividad (sector agropecuario y agroindustrial, y algunos de *commodities* industriales); y por último, 3) el resto del sector manufacturero de producción transable con menor productividad (Cantamutto y Wainer, 2013). Pero estas posiciones económicas disímiles no explicaron el surgimiento de la crisis, sino que en el desarrollo de la misma fueron adoptando posiciones distintas. La salida de la crisis que finalmente tuvo lugar, la devaluación durante el gobierno de Duhalde, *benefició sobre todo a uno de estos sectores, pero no se debió a un triunfo político de este sector, sino que expresaba la única salida posible para la recomposición de la acumulación de capital en su conjunto.*

Esta visión, además, centra el desenvolvimiento de la crisis en las disputas interburguesas y subestima el rol de los sectores subalternos, resultando en lo que Bonnet denominó una “sociología fraccionalista” (Eskenazi, 2009). “Se atribuye a las fracciones continuidad y homogeneidad en el tiempo, casi plena conciencia de sus intereses de conjunto y racionalidad

política para fijarse programas y actuar en pos de ellos” (Eskenazi, 2009: 151), lo que resulta una visión “politicista” y subjetivista de la crisis.

En resumen, se trataría de una disputa socio-política entre dos sectores burgueses para imponer un modelo de acumulación (o una modalidad de un modelo). No negamos la existencia de disputas entre dos o más grupos económicos sobre distintas formas económicas y políticas como el tipo de cambio, los subsidios, los salarios, las alianzas de clase y facciones de clase, entre otras. Pero no se explica por qué se impone uno y no otro de los sectores, más que como puro resultado de una relación de fuerzas abstractamente política. Así, se afirma que triunfaron porque lograron imponer su visión o conquistaron el Estado. Esto fue parcialmente así, pero a su vez necesita explicación. Si “los devaluadores” lograron imponer su visión no se debió a que fueran muy convincentes con sus argumentos sino porque su posición tenía una fuerza objetiva que los demás actores tuvieron que aceptar, aunque sea de manera resignada. La aceptación de la justificación de una medida no explica su aplicación, sino que es una forma de aplicarla. Pero incluso “los devaluadores” tampoco alcanzaron un gran consenso sino hasta después de haber logrado cierto éxito económico, y ni siquiera entonces lograron legitimidad social.

Además, siguiendo una investigación de Sebastián Salvia, creemos que la tesis de devaluadores y dolarizadores resulta inadecuada empíricamente además de teóricamente (Salvia, 2009). La dolarización no constituía una verdadera opción, sino que representaba la continuación de la convertibilidad cuando en verdad ya era insostenible. La devaluación era la única alternativa real de una salida a la crisis que existió en ese momento. Tal como puede apreciarse en el propio texto de Castellani y Schorr, la propuesta dolarizadora se redujo a una iniciativa política del menemismo y del grupo CEMA en 1999 y que se reflató más adelante durante el gobierno de la Alianza, pero que nunca alcanzó un apoyo empresario mínimamente significativo. Además, desde el gobierno estadounidense afirmaron que no apoyarían con préstamos, lo mismo que el FMI. Los autores señalan que “esta propuesta no logró articularse con la de otros actores colectivos, e incluso, al interior de las propias fracciones de la gran burguesía que la sostenían, se presentaron algunas discrepancias que impidieron conformar un discurso unívoco a favor del proyecto dolarizador” (Castellani y Schorr, 2004: 71). Pero, como se ve, los autores señalan que fracasó una imposición política, que faltó un acuerdo, un discurso compacto, en vez de advertir la falta de sustento de la propuesta, aun cuando advierten sobre el profundo ajuste que hubiese significado llevar adelante tal medida. Por otro lado, también admiten que si se comenzó a plantear el tema de la devaluación a partir de la que impuso Brasil en 1999, “recién fue impulsada abiertamente durante el año 2001” (Castellani y Schorr, 2004: 73), es decir, como reacción a la crisis y no su causante.

En conclusión, “el conflicto empresarial no se dio en torno a la devaluación o la dolarización, sino en torno a dos alternativas de gestión de la crisis dentro de la convertibilidad” (Salvia, 2014: 182). Pero a partir del 20 de diciembre, comienza la disputa por la gestión de la devaluación, es decir cómo devaluar. En otros términos: “la disputa interburguesa se reconfigura y desplaza, centrándose en las condiciones de la devaluación y pesificación de la economía” (Eskenazi, 2009: 155).

La lucha de clases como insurrección

Mientras que retomamos los aportes de Alberto Bonnet (y otros que abonan en los suyos) para la crítica del enfrentamiento entre las fracciones burguesas como explicación de la crisis, nos alejamos de su aproximación a la explicación de la crisis en términos de una insurrección como resultado de la lucha de clases. Esto no quita que efectivamente se trató de un momento en que la protesta social –entendida como lucha de clases– adquirió una mayor radicalización ante el escenario de crisis, potenciándolo así políticamente, ni que, de manera manifiesta, el fin del gobierno de la alianza se precipitó con una masiva movilización popular de protesta. Los conflictos acompañaron a la crisis y le dieron su forma, es decir, fueron parte de la crisis, pero la propia protesta social no explica la crisis ni se explica por sí misma, sino que responde ella misma a la crisis. Fueron el desempleo y la creciente pauperización social la que empujó a sectores sociales a una acción de creciente movilización e insurrección. Esto, obviamente, acompañado de transformaciones en la conciencia de estos sujetos, retomando y renovando tradiciones populares de identificación, organización, lucha y demás cuestiones.

Entendemos que se pueden distinguir dos versiones en el propio Bonnet respecto de su hipótesis con respecto a la insurrección, una más fuerte y otra más matizada. Efectivamente, en sus análisis, Bonnet no reduce el quiebre de la Convertibilidad a la protesta social, sino que lo señala como el último eslabón en un proceso de estancamiento. La convertibilidad implicaba “una presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo” (Bonnet, 2002: 2) para mantener la competitividad en un marco de productividad reducida de manera estructural y la imposibilidad de generar competitividad vía una devaluación de la moneda. Mientras que en los momentos de auge del ciclo, se avanzaba en la racionalización productiva, incorporación de tecnología y precarización laboral, en los momentos recesivos se apelaba a la baja nominal del salario con aumento del desempleo (que ya era considerable incluso en el momento de auge). Aquí es donde entra el papel de resistencia de la clase obrera a la maximización de esa presión directa. (Bonnet, 2002).

Pero luego (en el mismo texto) avanza brindando un papel desmesurado a la insurrección. Tras un detallado relevamiento de la escalada de protestas a nivel nacional, con una intensificación entre octubre de 2000 y marzo de 2001 que marca el paso del interior al Conurbano y a la propia Ciudad de Buenos Aires, y que van confluyendo los desocupados “piqueteros” con la CTA, trabajadores y movimientos sociales durante la segunda mitad de 2001 para finalmente coincidir con sectores medios tras el congelamiento de los depósitos bancarios (el “corralito”), Bonnet señala:

“la confluencia de todos estos sujetos sociales y sus modalidades de lucha puso en escena así, durante la insurrección de diciembre, una nueva fuerza social. Me refiero a la constitución, en la lucha misma, de una nueva alianza entre los trabajadores empleados y desempleados y los sectores medios. Difícilmente pueda exagerarse la importancia de esta alianza” (Bonnet, 2002: 26).

La confluencia (que no creemos que haya alcanzado el nivel de “alianza”) de sectores trabajadores desempleados, empleados y sectores medios, mostró toda su potencia para efectuar la caída del gobierno de la Alianza, pero luego se mostró impotente frente a un nuevo gobierno que durante los primeros meses profundizó la pauperización.

En un texto reciente Bonnet relativiza esta potencia (adviértase que el texto anterior es prácticamente contemporáneo a los hechos y no esconde un posicionamiento político con respecto a la rebelión), al aclarar que si bien “la insurrección acabó con la hegemonía política que el neoliberalismo había logrado articular”, ello “no significa, por supuesto, que la insurrección haya revertido mágicamente todas las transformaciones que había introducido en la sociedad argentina el proceso de reestructuración capitalista impulsado por la gran burguesía a lo largo de la década previa” (Bonnet, 2015b: s/p). Pero entonces, tenemos que la insurrección no fue más que la confirmación social y política del quiebre económico, y que no logró influir en la recomposición posterior. Se dio término a un proceso de explotación para dar inicio a otro que en lo inmediato incluso resultó más perjudicial, y que tampoco resultaría estructuralmente superador a mediano plazo. Como afirmara Iñigo Carrera hacia 2003, “el movimiento piquetero muestra que su potencialidad transformadora no pasa de la de ser la forma necesaria de subsistencia cotidiana de la población obrera crecientemente sobrante para el capital” (Iñigo Carrera, 2003: 2). Así es como se pasó de una confrontación fuertemente contestataria en lo ideológico en los momentos de mayor falta de recursos, a la administración de planes sociales y organización de cooperativas de trabajo. Aclaramos que no se trata en absoluto aquí de juzgar ninguno de estos comportamientos colectivos, sino de interpretarlos

como estrategias de supervivencia que se adaptan, conciente e inconcientemente, a las distintas circunstancias²¹.

Por otro lado, en su último libro Bonnet plantea que la fuerza de la clase obrera en la insurrección comprometió en parte a la fase kirchnerista, desde su arbitraje estatal, en la recomposición de la dominación, con un bloque de poder burgués menos sólido que durante la Convertibilidad (Bonnet, 2015). ¿Pero por qué esta supuesta fuerza no jugó un papel en lo inmediato, durante la salida de la crisis? (El logro tangible de la clase obrera en 2002 se redujo a los planes sociales, una cuestión puramente defensiva, incluso de supervivencia.) Sostenemos que la influencia posterior de la clase obrera en su conjunto [sobre todo en su “salida por izquierda” (Bonnet, 2015) tras la crisis de 2008-2009] se debió a la fuerza que adquirió durante los años de fuerte recomposición económica posterior (2003-2007) más que a su fuerza “insurreccional” de diciembre de 2001²².

La especificidad de la acumulación en Argentina y sus formas políticas

Para apuntar la interpretación sobre la salida de la crisis de Juan Iñigo Carrera, haremos una breve síntesis de su perspectiva general del desarrollo de la acumulación en Argentina.

Los capitales industriales concentrados (casi en su totalidad extranjeros) que producen en el ámbito local lo hacen históricamente con una productividad muy baja comparada a los estándares mundiales [y tanto más si se trata de los múltiples capitales pequeños de las llamadas Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)]. Además solo parcialmente logran exportar (y sólo al mercado regional y no al mercado mundial). Sin embargo, existieron históricamente una serie de compensaciones por la baja productividad y los límites del reducido mercado interno: un salario real por debajo del valor de la fuerza de trabajo, que se torna crónico desde mediados de la década de 1970; la reutilización de tecnologías ya obsoletas para el mercado mundial; la elusión y evasión impositiva; la absorción de ganancia de los pequeños capitales; y la más importante, la apropiación de una porción de plusvalía bajo la forma de renta agraria, en gran medida proveniente de exportaciones (Iñigo Carrera, 2011).

²¹ En un texto de 2004, Almeyra consideraba que “los piqueteros «duros» (...) buscan golpear para negociar y dependen del Estado aunque ataquen al gobierno” (Almeyra, 2004: 141).

²² “No se trata de esperanzarse con que el grado alcanzado por la conciencia política del pueblo va a engendrar por sí el cambio en el proceso nacional de acumulación de capital sino, por el contrario, de descubrir qué cambios en este proceso son los que han tomado forma concreta necesaria en el auge de la acción popular directa y, de ahí, conocer su potencialidad histórica” (Iñigo Carrera, 2003: 2).

A su vez, las formas de dicha apropiación son múltiples. Se destacan las retenciones a las exportaciones, las restricciones a las mismas y la sobrevaluación de la moneda (es decir, “un dólar barato”), opción ésta que resulta menos visible por operar de manera indirecta (Iñigo Carrera, 2011). La sobrevaluación, además, al reducir las ganancias de los exportadores en su valuación a la moneda local, hace reducir también el precio de las mercancías agrarias en el mercado interno. Pero el ingreso que el Estado obtiene, por la diferencia de valor de la moneda, sobre los ingresos de las exportaciones, debe ser usado, al menos en parte, para sostener dicho tipo de cambio (ofreciendo dólares para la compra).

Durante lo que se conoció como las dos fases de la Industrialización en Sustitución de Importaciones (la de industria “liviana” e industria “pesada”), el Estado transfería recursos de la renta de la tierra, por medio de retenciones y del monopolio comercial estatal, hacia la industria, por medio de subsidios, reducciones de tarifas a servicios públicos, y otras modalidades como promociones industriales y tasa de interés negativa (tasa menor a la inflación). De esta manera, la economía funcionaba con una estructura comercial y financiera semi-cerrada y dependiente del sector agrario. Cuando este último fallaba (por sequías, baja de precios internacionales, u otro motivo), se producían las recesiones típicas de los ciclos *stop and go* (Iñigo Carrera, 2011). Esto es, escaseaban las divisas, bajaban las reservas del Banco Central, aumentaba el déficit comercial y fiscal y podía llegar a impactar en el mercado interno con desempleo. Entones normalmente se operaba una devaluación como forma de recuperar las ganancias por medio de una inflación de precios con salarios atrasados con respecto a ella.

A partir de mediados de la década de 1970, los mecanismos se complementaron con la baja del salario real y el endeudamiento externo. Durante buena parte de la década de 1980, ante la falta de ingresos externos, se vivió un período de bajo crecimiento económico (que se conoció como “década perdida”). En la década de 1990, si bien continúa una fase de relativa contracción de la renta de la tierra que se profundizará hacia fines de la década, la disponibilidad de créditos e inversiones externas, favoreció una renovación cualitativa de la producción industrial, con las privatizaciones, se consolidó la caída estructural del salario real mediante la expansión de la población obrera sobrante, y se operó la liquidación masiva de pequeños capitales nacionales junto con la relativa actualización técnica de los capitales más concentrados (Iñigo Carrera, 2011).

La sobrevaluación de la moneda durante la Convertibilidad, en un tipo de cambio fijo, permitió al Estado transferir parte de la renta de la tierra de manera indirecta, sin confrontar con el sector agropecuario, habilitó a estos y a los industriales la renovación de maquinarias y

equipos, dio estabilidad para mantener el nivel de salarios, aunque hacia el final del ciclo comenzaron a bajar nominalmente y con flexibilización y precarización laboral, a la par del desempleo.

La sobrevaluación de la moneda se sostuvo con las privatizaciones pero sobre todo y crecientemente, con el endeudamiento estatal (al principio externo pero luego también interno). Pero al mismo tiempo operaba un estímulo al flujo de divisas hacia el exterior por parte del sector privado, con lo cual “tan pronto como el estado nacional engrosaba las reservas mediante el aumento real de su endeudamiento externo, el sector privado las drenaba hacia el exterior” (Iñigo Carrera, 2003: 6), renovando así la necesidad de ampliar dicho endeudamiento sólo para mantener la sobrevaluación del peso²³.

“Este círculo vicioso de apropiación privada de riqueza social a través de la política activa del estado nacional neoliberal, se sostenía sobre dos ficciones, una externa y la otra interna (y cuando digo ficciones no me refiero a una abstracta ilusión, sino a una forma concreta necesaria de realizarse la acumulación de capital a través de la aceptación consciente por los interesados de una apariencia cuyo contenido es el opuesto a ella). La ficción externa brotaba del avance de la superproducción general de capital en la economía mundial. El capital producido en exceso pasa a circular como capital ficticio, o sea, como un capital colocado en títulos de crédito que aparenta conservar su capacidad de valorización por la mera adición de unos intereses tan irrealizables como él mismo. (...) Pero en el año 2001 la superproducción general de capital se tornó crítica, interrumpiéndose la ampliación efectiva del capital ficticio mundial. Por su parte, el acceso ampliado al capital ficticio mundial tiene como condición la capacidad aparente de la economía nacional para afrontar los servicios correspondientes. (Iñigo Carrera, 2003: 6-7)”

Pero entonces la “ficción interna” también se volvió insostenible. La productividad, aunque había mejorado en términos relativos, no alcanzaba para sostener la acumulación, menos aún tras la devaluación de Brasil, principal socio comercial, y entonces se presionaba sobre los salarios en un contexto de alta desocupación. El valor del producto interno se estancó y hasta retrocedió, llevando el desempleo a niveles inéditos (cerca del 20%). El Estado necesitaba dólares de manera creciente que solo podía conseguir, prácticamente agotados los bienes públicos a privatizar, con préstamos con tasas de interés cada vez más altas. De hecho, hacia 1999 “los acreedores públicos externos directos comenzaron un discreto retiro efectivo de parte de los intereses vencidos” (Iñigo Carrera, 2003: 7), que empezaron a ser cubiertos por capitales nacionales (en particular las AFJP) por medio del sistema financiero local, que suscribieron nueva deuda operada desde el exterior. Pero la entrada de divisas no hacía más que fomentar su

²³ En este aspecto existe coincidencia de todas las posturas.

fuga, sin modificar el estado crítico de la economía (recesión, falta de competitividad, desempleo, déficit fiscal).

Así y todo, “la expansión efectiva de la deuda para reponer las reservas de divisas drenadas por el sector privado” (Iñigo Carrera, 2003: 7) tuvo dos experiencias más: el “blindaje” y el “megacanje”, que no hicieron más que magnificar la dimensión de la deuda y acelerar la corrida bancaria que terminó en el “corralito” (la restricción al retiro de depósitos bancarios, incluyendo salarios y jubilaciones) como medida de emergencia anunciada el 1 de diciembre de 2001, lo cual a nivel político significó la pérdida sin retorno de las bases electorales de los sectores medios, agudizó la crisis y prenunció el final de la Convertibilidad y del propio gobierno.

La crisis económica explotó por todos lados: se cortó todo tipo de crédito, cayó violentamente la recaudación impositiva, se multiplicaron las quiebras y cierres de empresas, la desocupación no paró de crecer, etc. La inminencia de la devaluación anunciaba más caída del salario real, aumento de costos y pérdidas incontrolables en una economía nacional que tenía la generalidad de sus contratos internos nominados en moneda extranjera. ¿Qué forma política iba a tomar este proceso que conjugaba una caída substancial del salario real, una violenta contracción en la actividad económica y el default internacional? (Iñigo Carrera, 2003: 7).

De alguna manera, la presente tesis intenta dar una respuesta amplia y compleja a esta pregunta, así como a la del subsiguiente período de recuperación. En el texto en cuestión, el autor se limita a unos aspectos claves. Ante la fragilidad de la clase obrera y de la pequeña burguesía, no se necesitaba de un gobierno marcadamente autoritario y represivo (como fueron las pasadas dictaduras militares); el peronismo, con su mayor afinidad con el sindicalismo, contaba con margen suficiente para controlar la resistencia obrera. En este sentido, el autor señala que en 2002 “se convocaron tres huelgas generales, una por la CGT (Moyano) y dos por la CTA; ninguna por la CGT (Daer) que había participado en tres de las seis de 2001” (Iñigo Carrera, 2011: 55). Finalmente, hacia el 2003, lo que parecía ser solo una *recuperación* económica se convirtió en un *auge de crecimiento* a partir de la suba del precio y demanda de las materias primas a nivel mundial.

Un cierre teórico para abrir la investigación

La limitación que encontramos en la postura de Iñigo Carrera es que si bien aclara el contenido o fundamento de la cuestión, subsume a ello rápidamente todo el desarrollo de las formas de su

evolución. Creemos que vale la pena detenerse en las formas concretas porque a veces adquieren una importancia específica, no siendo lo mismo una u otra forma, ni explicándose siempre como las únicas y necesarias según el propio contenido; pero además porque siempre las formas son inseparables del contenido.

Entonces, ¿el contenido preexiste o no a su forma de desarrollo? Sí y no. Preexiste sólo como potencia, como determinaciones fuertes que deben sintetizarse con otras múltiples determinaciones para concretar su existencia plena. Con antelación a los hechos uno puede proyectar posibles desarrollos de acuerdo a distinguir las determinaciones del momento, pero con posterioridad a los hechos, uno puede reconstruir lo sucedido como esa *síntesis de múltiples determinaciones*, y evaluar, en la medida de lo posible, la importancia que tuvo cada determinación.

En los dos capítulos siguientes detallaremos los pormenores de la gestión del gobierno duhaldista no porque nos parezca que constituyeron una salida económica particularmente original, ni porque consideremos que impusieron políticamente un rumbo frente a otros igualmente posibles. Más bien al contrario, sostenemos que el sentido de la salida era básicamente unívoco para la racionalidad capitalista. Nos interesa detallar la forma que adquiere en sus dimensiones económicas y políticas dicho proceso, reconociendo las dificultades, los vaivenes y los múltiples intereses en juego, para justamente señalar *cómo* sobre todo ello se impuso la recomposición de la acumulación del capital, con un alto costo para la mayoría de la población y sin quebrar el orden constitucional.

La salida de la crisis, tal como se dio, no fue lo único y necesario que podía o debía ocurrir, pero sí respondió a una necesidad matriz que impuso los andariveles principales de su curso. Y si bien era posible que, sobre esa dirección general, se adoptaran formas alternativas de desarrollo, también es cierto que la forma efectivamente adoptada tampoco respondió a arbitrariedades ni azares, sino a una historicidad, es decir, a un pasado y un presente determinados. En otras palabras, la forma que adquiere un proceso depende en primer lugar de su contenido pero también, dentro del margen impuesto por éste, de las formas anteriores que fueron moldeando los contenidos anteriores²⁴.

Entonces, si bien podría haber ocurrido de otras formas, lo cierto es que lo único que ocurrió fue una forma concreta y ninguna otra. La cuestión no pasa por elucubrar formas contra-

²⁴ Así, por ejemplo, desde su forma inicial como nacionalismo industrializador en la década de 1940, el peronismo fue retomado y reconvertido en la radicalización obrera en los años sesenta y setenta, en las políticas neoliberales en la década de 1990, y un nuevo estatismo con los últimos gobiernos kirchneristas.

fácticas, sino por precisar *cómo* fue esa forma y en todo caso preguntar *por qué* tomó esa forma *en ese momento*. Incluso se puede ver cómo de hecho hubo posibilidades alternativas que fueron intentadas, ensayadas, y hasta iniciadas pero finalmente luego revocadas, modificadas o simplemente transformadas con el paso del tiempo. Es decir, lo que pasó no siguió una estrategia ni plan, más allá de que algunos actores los tuvieran, sino que resultó de la confluencia y confrontación de múltiples acciones e intenciones, pero regidas, enmarcadas y atravesadas por determinaciones estructurales propias del modo de producción capitalista en un momento y lugar histórico de su desarrollo²⁵.

Corolario

El contenido de la crisis, el movimiento real que es su causa, fue el agotamiento de una forma específica de reproducir las bases de la acumulación de capital. Concretamente, la insostenibilidad de la ampliación del endeudamiento, la baja afluencia de renta y que el ajuste deflacionario se encontraba prácticamente agotado por su bloqueo por la protesta popular. Aquí nos referimos no solo ni principalmente a los grupos de trabajadores desocupados (piqueteros) como a empleados de sectores medios e incluso de la pequeña burguesía que, por ejemplo, resistieron de forma efectiva el ajuste propuesto por el efímero Ministro de Economía Ricardo López Murphy en marzo de 2001. Sectores (medios) que eran la propia base electoral y de legitimidad del gobierno.

En este sentido, afirmar que “la crisis de 2001 es eminentemente política [puesto que] en términos puramente económicos, es pensable una salida de la crisis compatible con el régimen de convertibilidad mediante una deflación suficiente” (Piva, 2015: 26), significa un ejercicio de separación analítica extrema entre economía y política que cae, si no en un error, sí en un peligro teórico. Esta separación artificial entre economía y política termina por distorsionar la unidad que conforman, vaciándola de contenido. En términos “puramente económicos” o “puramente políticos” casi nada es imposible y casi todo es posible, pero se trata de términos puramente imaginarios.

La salida de la crisis, entonces, consistió básicamente en el ajuste inflacionario vía la devaluación impuesta como única alternativa, impulsada por un nuevo gobierno dispuesto a

²⁵ “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmiten el pasado” (Marx, 1972: 15).

encarar esas medidas impopulares que el propio Eduardo Duhalde luego denominó “trabajo sucio”²⁶. Ciertamente, la protesta popular fue un bastión de peso en la caída del gobierno, pero en su precipitación final no fue tanto expresión del “bloqueo del ajuste por deflación” (Bonnet, 2015; Piva, 2015), sino más puntualmente de las restricciones bancarias (el “corralito”) producidas por el ahogo financiero, que sinceraban y potenciaban el agotamiento de la continuidad económica en su conjunto, y a partir del cual el sistema político avizoró un recambio gubernamental²⁷.

²⁶ Ver capítulo 3.

²⁷ Como se verá en el capítulo 3, no pregonamos una lectura de golpe institucional, pero es innegable que elementos de estructuras estatales a nivel municipal si no impulsaron, al menos facilitaron parte de las movilizaciones y saqueos producidos en las jornadas previas a la renuncia del presidente De la Rúa.

Capítulo II

La salida económica

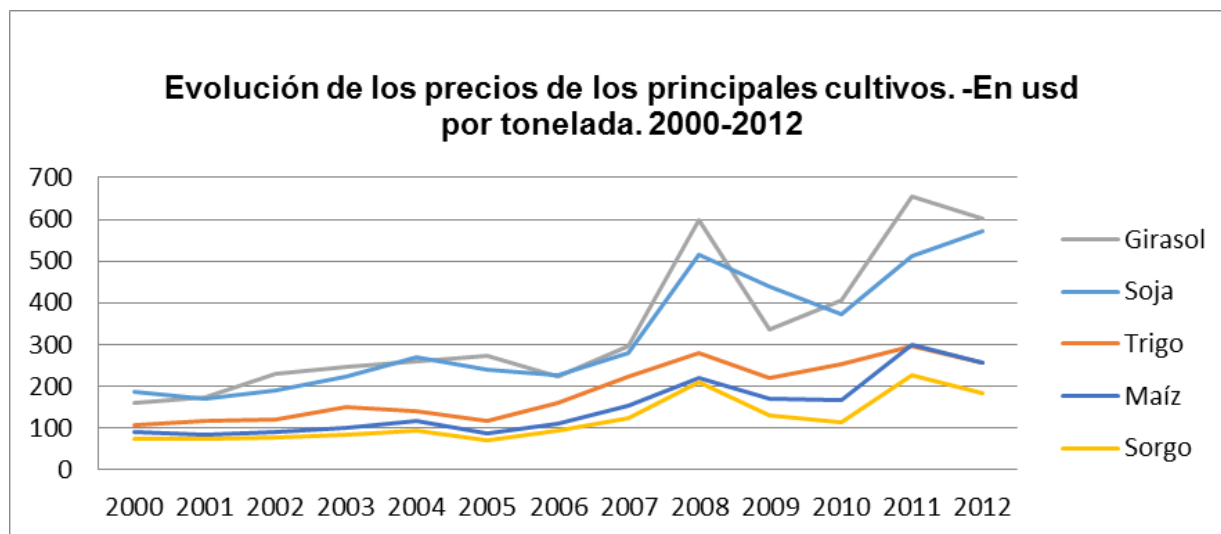
La salida económica: una clave, un marco complejo y un repunte final

La salida económica de la crisis presentó dos grandes aspectos que revistieron distinta importancia. El principal fue el netamente económico-productivo, que consistió básicamente en una salida contra-cíclica por medio de una devaluación, bajando el salario real y alterando los precios relativos, como vivió varias veces el país, aunque en una dimensión muy significativa. El segundo fue el aspecto financiero, con el *default* de casi la mitad de la enorme deuda pública²⁸ (Cantamutto y Wainer, 2013), las restricciones bancarias y el proceso de pesificación y reestructuración de deudas y depósitos. Si bien este aspecto fue el más novedoso no fue el que resultó decisivo en la recuperación. En su costado “externo”, es decir, el de la *deuda externa*, actuó como un “paréntesis” a la entrada y salida masiva de divisas, logrando postergar la urgencia del problema del endeudamiento público con una negociación (principalmente con el FMI) que estuvo prácticamente estancada por un año. En su costado “interno”, es decir, la *pesificación*, fue más que nada *la forma financiera y monetaria de la devaluación*. Significó una negociación sobre los términos de las valuaciones de los depósitos y deudas en dólares, dándole forma a un aspecto de la devaluación.

Pero desde mediados de 2002 se agregó una variable que de manera creciente tuvo un peso muy importante en la posterior evolución económica (y política). Nos referimos al aumento del precio a nivel mundial de los productos agrarios o *commodities*, tales como la soja, el maíz y el trigo entre otros. Ello permitió un nuevo cariz a la iniciada recuperación en el segundo semestre de 2002. No solo el gobierno de Néstor Kirchner se montará luego sobre una recuperación económica incipiente pero en marcha, sino que lo hará en un contexto internacional de creciente demanda de productos (de China, principalmente), y suba de precios. Si bien la mayor alza se efectuó hacia 2007 –cuando se dio una verdadera disparada de los precios, que se retomó luego de una baja (ver Gráfico)–, el crecimiento fue sostenido y

²⁸ El 48,3%, pues no incluía la deuda con los organismos internacionales ni la reestructurada con tenedores locales en noviembre de 2001 (Cantamutto y Wainer, 2013: 102).

significativo desde el 2002, sobre todo de la soja que entre abril y diciembre de ese año subió un 23%.



Fuente: Caligaris (2015) sobre la base del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2014). Precios FOB puertos argentinos. Se computa el promedio de los precios de los meses de cosecha para cada cultivo.

La devaluación, que alcanzó un promedio anual muy superior al 200% [el tipo de cambio tuvo su pico en abril/mayo, con un dólar a casi 4 pesos, para luego bajar y mantener una cotización promedio en el segundo semestre de 3,60, y seguir bajando alcanzando una cotización de 2,90 promedio durante el primer trimestre de 2003 (Ministerio de Economía, 2003)], fue la medida clave en la salida de la crisis, acompañada de otras medidas que implicaron de conjunto una redistribución de pérdidas (y ganancias), permitiendo así un nuevo comienzo de ciclo. Básicamente, fue la forma de bajar el costo de las empresas y los gastos del Estado a expensas de los salarios reales. Es decir, la desvalorización de los ingresos de los trabajadores por la inflación. Además, aumentó el valor interno de los ingresos de los exportadores, que de forma mayoritaria se trataba de los agropecuarios, y de manera lenta incentivó a los industriales. Y redujo la cantidad de las ahora encarecidas importaciones, favoreciendo el saldo de la balanza comercial. Estos ingresos, además, fueron en parte para el Estado a través de las distintas retenciones, las más cuantiosas de las cuales comenzaron a aplicarse en abril a los productores agropecuarios (además en el marco del aumento de los precios internacionales entre finales de 2002 y comienzos de 2003). Y significó un nuevo equilibrio dentro del capital, relegando relativamente al sector financiero, y más claramente al sector de servicios públicos con el congelamiento de las tarifas.

El default de la deuda pública también tuvo un rol preponderante, pero distinto. Básicamente, quitó la presión de efectuar pagos en el corto plazo, aunque no fue tanto un factor en la salida de la crisis, sino sobre todo el detonador de la crisis, su expresión más cabal, sobre todo internacional, y el marco en el cual se atravesó la salida de la crisis. Con el default comenzó una larga negociación, principalmente con el FMI, que no redundó en préstamos (incluso hubo unos pequeños pagos), sino que más bien operó como una forma de presión sobre las medidas gubernamentales, es decir, sobre el propio proceso de salida de la crisis. Es decir, alivió por un tiempo la presión fiscal del Estado, pero ejerció presión en las políticas económicas del gobierno.

La nueva estructura de precios relativos

La clave de la recuperación económica, más allá de sus intrincadas mediaciones financieras, monetarias, jurídicas y políticas, fue lo que Cantamutto y Wainer llaman “una nueva estructura de precios relativos”, y su componente principal fue la baja del salario real por medio de las modificaciones inflacionarias de precios que desencadenó la devaluación. Pero para sostener dicha modificación, también fue importante controlar algunos precios, de manera parcial en el caso de algunos alimentos y combustible, por medio de las retenciones, y de manera total con los servicios públicos (privatizados), cuyos precios se congelaron de manera jurídica.

Efectivamente, para normalizar la economía y evitar la compra de dólares, se debía “recrear condiciones de rentabilidad en el sector productivo de modo de impulsar la aplicación de los recursos a la inversión” (Cantamutto y Wainer, 2013: 112) y para ello “era necesario consolidar una nueva estructura de precios relativos” (ídem: 113). Para esta tarea, señalan el congelamiento de las tarifas, el cuasi congelamiento de salarios y las retenciones. Los dos primeros puntos, sumados a la capacidad ociosa, calculada en un 50% promedio del sector (Cantamutto y Wainer, 2013: 116), incrementaron notablemente la tasa de ganancia del sector transable, especialmente de la cúpula empresarial. El tercer punto, permitió ingresos al Estado a la vez que limitó los aumentos de precios internos de los alimentos, productos exportables, que presionan sobre los salarios. Estos, de todas formas, sufrieron una baja muy considerable que solo se explica por la debilidad que la desocupación implicaba al movimiento obrero, además de su dispersión sindical.

El congelamiento de las tarifas y las primeras retenciones fueron aplicados en la ley del 6 de enero, pero siguieron siendo revisados a lo largo del tiempo. Pese a las presiones, las tarifas se mantuvieron prácticamente inalteradas hasta el 2003 (Grigera y Eskenazi, 2013), mientras que las retenciones más importantes (las agropecuarias) fueron anunciadas en marzo y abril. Mientras que estas últimas se vieron más que compensadas por la devaluación, el congelamiento de las tarifas sin dudas significó una erosión neta en las ganancias de las empresas. Esto se explica en el marco del default que generaba un marco de negociación tensa con los capitales extranjeros financieros y de servicios, por el cual aceptaron una pérdida (relativa), luego de casi una década de ganancias extraordinarias.

La hiperinflación, si bien fue temida, no era probable, principalmente por la profunda recesión, pero también por el bloqueo financiero de una parte de los ahorros, y porque el gobierno mantuvo la emisión monetaria en niveles que acompañaron la inflación pero evitó su descontrol, a pesar de las cuasi monedas²⁹.

“La inflación que siguió al shock posdevaluatorio llegó al 41% durante 2002, sin embargo este impacto fue diferencial, mientras los bienes transable y de consumo básico aumentaron incluso por encima de aquel promedio, el aumento fue sensiblemente menor para los bienes no transables, los precios de salud, vivienda y educación aumentaron un 10% en promedio, las tarifas de los servicios públicos quedaron congelados provisoriamente (se renegociarían entre 2003 y 2004 cierto ajuste de tarifas que sancionaría a cambio de la desdolarización de las mismas)” (Grigera y Eskenazi, 2013: 175).

Los salarios

En perspectiva, la devaluación fue “exitosa” tanto por haber evitado una “disparada” de la inflación, como por haber generado una inflación considerable con salarios prácticamente estancados. Los salarios privados recién tuvieron un aumento por decreto de 100 pesos (no remunerativos) en julio, las jubilaciones uno igualmente bajo recién en agosto, y los salarios públicos no tuvieron aumento alguno hasta 2003. En general, los salarios cayeron un 35%, alcanzando los niveles de 1989, el más bajo de la historia reciente (Cantamutto y Wainer, 2013). Para Graña fue aún peor: “En promedio, en 2003, las remuneraciones tenían un poder adquisitivo un 8% menor que durante 1989” (Graña, 2013: 70). Otros cálculos similares plantean que “la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los

²⁹ Se trató de bonos provinciales y uno nacional que usaron 15 gobiernos provinciales y el gobierno nacional para pagar parte de sus salarios y que funcionaron como cuasi monedas.

trabajadores en un tercio en el período 2001-2003” (Costa, Kicillof y Nahón, 2004: 83). Según datos del INDEC, entre 2002 y 2003 el salario real se contrajo casi un 30% (Wainer 2013: 70, nota 11). En cuanto al costo laboral, según el Ministerio de Trabajo, en el primer trimestre de 2003 era un 61,7% inferior que en 1993 (Varesi, 2013: 200).

En definitiva, como señala un autor que estudió el impacto del salario como compensación por la baja productividad local, “esa protección del mercado interno que el consenso entre economistas otorga al TCR [tipo de cambio real] alto es justamente producto de la caída del poder adquisitivo de los salarios y no es un instrumento mágico que crea riqueza, sino uno que la redistribuye” (Graña, 2013: 79). O más bien, un esquema de producción de riqueza basada en esa redistribución regresiva del ingreso. El siguiente extracto de una entrevista al entonces flamante ministro de Economía Roberto Lavagna es muy claro al respecto de la política salarial.

[RL] –Es obvio que la devaluación provoca caída del salario real, pero era la salida ineludible a un modelo de desocupación.

[P] –¿A qué nivel de inflación piensa que se deberá discutir salarios?

[RL] –Yo lo plantearía de otro modo: *a qué nivel de reactivación económica se producirá naturalmente la recomposición salarial*. Hoy los salarios se pueden discutir libremente, no hay ninguna restricción de carácter estatal. Simplemente no hay discusión de salarios porque cuando la desocupación está llegando a niveles del 24 por ciento y otro tanto el subempleo no hay posibilidad de pensar en aumentos. Si se logra frenar la caída del nivel de actividad económica, naturalmente se producirá una mejora salarial. (*Página/12*, 5/5/02, el destacado está agregado)³⁰.

Efectivamente, los salarios solo comenzaron a recomponerse una vez consolidada la recuperación económica hacia 2003, y sobre todo a partir de 2004.

Las retenciones

Las retenciones tuvieron un papel importante, en su doble rol de recaudación estatal y de bajar los precios internos de productos exportables que conforman, directa o indirectamente parte sensible de la canasta familiar (panes, aceites, carnes, combustible, etc.). Su aplicación, en el sector agropecuario, si bien era lógica y esperable dada la devaluación, se hizo esperar unos meses.

³⁰ David Cufre y Alfredo Zaiat “Trabajamos para sacar a la economía del riesgo de híper”, entrevista a Roberto Lavagna, *Página/12*, 5/5/02.

Con la ley del 6 de enero de 2002 se sancionaron las retenciones a los hidrocarburos, y se preparó el terreno a medidas similares. El 13 de febrero se anunciaron retenciones del 25% a la exportación de petróleo, y hacia fines del mes, previendo la inminencia de la medida para el sector terrateniente, desde la Sociedad Rural se ofreció un único aporte voluntario de 1.500 millones de pesos poniendo como condición que no les aplicaran retenciones. La iniciativa no prosperó y el 4 de marzo se anunció la aplicación de un 10 por ciento de retenciones para los productos primarios y 5 por ciento para las manufacturas agropecuarias. La medida motivó un inmediato y amplio rechazo en el sector. “Representan una real confiscación y una causa de desaliento que pone en peligro la rentabilidad de las explotaciones”, sostuvo entonces el ex titular de la Sociedad Rural Guillermo Alchouron (*Clarín*, 30/03/02). El Gobierno desestimó las protestas y el 4 de abril el presidente elevó de 10 a 20 por ciento las retenciones³¹ con la intención de recaudar 3.000 millones de dólares por año. Contra presagios de una presión agobiante que limitaría la cosecha, en febrero de 2003 la Secretaría de Agricultura confirmó una cosecha record de 71 millones de toneladas, que permitió exportar granos por más de 10.000 millones de dólares. Es que para entonces, ya había subido el precio de la soja a un nivel record hasta entonces. Pese a ello, las protestas siguieron durante todo 2003.

En los años posteriores su precio seguiría subiendo, consolidándose como una fuente clave de divisas para el país y parte del “modelo” económico kirchnerista, que lograría así mantener un superávit comercial y fiscal, pagar parte importante de la deuda externa y al mismo tiempo subvencionar al sector industrial, entre otras cuestiones manteniendo las tarifas eléctricas bajas por medio de subsidios a las empresas.³²

La pesificación

La devaluación implicó salir de la Convertibilidad, tanto de hecho como de derecho, es decir, derogar la ley de Convertibilidad que impedía devaluar, y asumir el costo político de dicha

³¹ Fueron del 20% para la soja, el maíz y el girasol, y las manufacturas tributarían un 10%, mientras otras materias primas entre el 5 y el 10%.

³² El gobierno de Kirchner, a pesar de la continuación de la suba de los precios durante su mandato, no subió los porcentajes sino hasta 2007. En dicho año la suba de precios internacionales fue más pronunciada, y al año siguiente, ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionaron las fatídicas retenciones móviles que no llegaron a aplicarse tras su rechazo en el Senado en julio de 2008. Parte de la renta comenzó entonces a captarse con un tipo de cambio gradual pero crecientemente sobrevaluado, pasando de prácticamente la paridad en 2007 a cerca del 70% en 2013 (Iñigo Carrera, 2014).

medida que era mayoritariamente resistida por la población³³ y que tendría efectos regresivos e incontrolables.

La salida de la convertibilidad, a su vez, se mezcló con el *corralito* (la limitación a los retiros de depósitos efectuada el 1 de diciembre de 2001) y con el *corralón* (el congelamiento de los depósitos en dólares que efectuada el 10 de enero de 2002), que resultaron sumamente complejos de desarticular, y en general estuvo atravesada por fuertes disputas entre los actores más poderosos, y con la presión popular de fondo. Efectivamente, los ahorristas hicieron mucho “ruido” y se los tuvo en cuenta como fuente de descontento social, pero no llegaron a constituirse en un actor de peso en la negociación, como interlocutor a la altura de los bancos y los grandes deudores industriales.

Existían en los bancos una gran cantidad de depósitos y sobre todo de préstamos en dólares, frente a lo cual se adicionó como dificultad la “promesa política” del flamante presidente durante su discurso de asunción de mantener la moneda de origen (“el que depositó dólares, recibirá dólares”³⁴). Se inició entonces un complejo proceso de pesificación de la economía bancaria, que atravesó modificaciones con fuertes presiones, a la vez que un intento de devolución postergado de los depósitos con bonos manteniendo la moneda de origen (el llamado “corralón”) que también fue resistido y renegociado. Veamos con mayor detenimiento este proceso.

En su pormenorizado estudio, Lorena Cobe plantea tres etapas de la “pesificación” (Cobe, 2009). En primer lugar, la “pesificación acotada”, con el cambio “1 a 1” de los préstamos de hasta 100.000 dólares, sancionada el 6 de enero con la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561), y el anuncio del 10 de enero de un cronograma de devolución de los depósitos en la moneda de origen, la “reprogramación de los depósitos” o “corralón”; pero ambas medidas fueron resistidas y modificadas.

Con esta Ley de Emergencia Económica (como se la denominó de manera abreviada), que delegaba facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, se devaluó el peso en un doble sistema

³³ Una encuesta comentada el domingo 23 de diciembre en *La Nación* señala que “el 79% [de la población] rechaza una eventual devaluación” (*La Nación*, 23/12/01).

³⁴ Duhalde mismo admite en sus memorias que fue un error. “Comencé la presidencia con el pie izquierdo. Cometí un error serio que puso en jaque desde el inicio mi credibilidad (...) Había afirmado categóricamente un compromiso de imposible cumplimiento porque no había dólares” (Duhalde 140-1). En un libro periodístico, se muestra el entretelón del equipo de economía al enterarse del anuncio. Desde el Ministerio de Economía habrían redactado esa parte del discurso de manera distinta [“los depósitos a los ahorristas les serán restituidos respetando su poder adquisitivo en los tiempos y en los modos compatibles con la reorganización del sistema financiero” (Burgo, 2011: 263)], y se llevaron un disgusto al escuchar en vivo las cambiadas palabras en boca del presidente (“el que depositó pesos, recibirá pesos; el que depositó dólares, recibirá dólares”). Se entiende que Duhalde privilegió llevar tranquilidad a los ahorristas de sectores medios (Burgo, 2011).

de tipo de cambio: el oficial, que se fijó en 1,40, y el libre. Este esquema, fuertemente cuestionado por el FMI que abogaba por un sistema de flotación libre, se mantuvo sólo durante enero, para entonces dar lugar a la “flotación sucia”, es decir, un esquema de dólar libre pero con sistemática intervención del Banco Central para controlar su oscilación. Con la misma ley se pesificaron las tarifas de servicios públicos que manejaban empresas privatizadas hasta entonces con contratos dolarizados e indexados a la inflación norteamericana, que entonces pasaron a desdolarizarse y desindexarse. La ley incluía títulos del Estado nacional garantizados por la recaudación de nuevas retenciones de un 5% a la exportación de hidrocarburos, como un criterio de compensación a las entidades financieras, y supeditaba la devolución de los depósitos bancarios al principio de solvencia del sistema financiero. Por ello se puede afirmar que con esta ley “quedó establecido el criterio de estatizar las pérdidas del sector financiero” (Cobe, 2009: 59), aunque su forma definitiva se seguiría negociando.

La reprogramación de los depósitos, por su parte, implicaba diferir sus devoluciones manteniendo la moneda de origen pero en un largo plazo y en cuotas, o bien, una pesificación a 1,40 más un ajuste según la evolución de la inflación (el Coeficiente de Estabilización de Referencia o CER)³⁵. La medida no contó con ninguna simpatía por parte de los ahorristas que querían sus dólares de forma inmediata y que no confiaban en una eventual devolución a futuro, pero tampoco convenció a los bancos, sobre todo a los privados, que verían pesificados los dólares que se les debían pero mantendrían sus propias deudas en dólares. Sin embargo, como veremos, los bancos terminaron aceptando la medida.

Por otro lado, la presión de las grandes empresas y de la Unión Industrial Argentina (UIA) en particular llevó a la segunda etapa, la “pesificación ampliada”, que en el mismo mes de enero incluyó la pesificación de todas las deudas (incluidas las superiores a los 100.000 dólares) al tipo de cambio de 1,40 pesos por dólar. El argumento era que de lo contrario quebrarían muchas empresas y la recuperación económica se haría imposible³⁶.

³⁵ En rigor estas opciones aplicaban a “los plazos fijos, las cuentas corrientes superiores a los U\$S 10.000 y los saldos de las cajas de ahorro mayores a U\$S 5.000 (...), mientras que los depósitos inferiores a los montos mencionados se pesificaban automáticamente al tipo de cambio oficial de 1,40 pesos por dólar” (Cantamutto y Wainer, 2013: 101).

³⁶ Dicha medida no careció de posiciones encontradas. El 14 de enero una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dictó que las deudas no pesificadas debían cancelarse al dólar libre (que entonces oscilaba en torno a los 2 pesos), lo cual obviamente beneficiaba a los bancos en detrimento de los deudores, que eran sobre todo empresas. Pero al día siguiente, el gobierno obligó al BCRA a que las deudas no pesificadas, es decir, las superiores a los 100.000 dólares se pudieran saldar con el “dólar oficial” de 1,40. Y además desplazó a su presidente, Roque MacCarone, quien fue reemplazado por el vicepresidente del organismo, Mario Blejer, aunque él también era un representante de los sectores financieros.

Esta ampliación de la pesificación fue coronada con la tercera etapa, la “pesificación universal” o “asimétrica”. La misma fue anunciada en la propuesta del ministro de Economía Jorge Remes Lenicov el 3 de febrero, y consistía en la pesificación asimétrica y en la liberación del dólar. La medida contó con un cimbronazo previo que dificultó su aplicación: un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 1 de febrero³⁷. Pero antes, vale detenerse en el sector financiero y en su aceptación de esta medida que lo perjudicaba, aunque como veremos, de forma relativa.

Realineamiento de la banca

La pesificación fue aceptada por los bancos principalmente debido a la compensación del Estado con bonos, pero además por cuestiones del contexto. Nos referimos a la “judicialización” del corralito que significaba un “drenaje” de fondos por medio de recursos de amparos. Mientras tanto, crecían el desprestigio y las investigaciones a entidades bancarias sobre fuga con irregularidades, y algunos banqueros comenzaron a ser investigados bajo la ley de Subversión Económica (Cobe, 2009; Amadeo, 2007)³⁸. Los bancos preferían “negociar con el aparato estatal, en lugar de hacerlo con un sinnúmero de personas, familias y empresas, cuya capacidad de pago (en referencia a los deudores) era más imprevisible e incierta que la de un Estado que había caído en default” (Cobe, 2009: 76).

Además, por esos días comenzaba a vislumbrarse que el gobierno impulsaba la pesificación (voluntaria) de los depósitos. Especialmente desde la cartera económica se buscaba dar a entender la imposibilidad o inviabilidad del mantenimiento de la moneda de origen. Y el propio Duhalde efectuó un sinceramiento al respecto en un discurso del 19 de enero, admitiendo que los dólares “ya no están”, pero prometiendo mantener el mismo “valor adquisitivo” (*La Nación* 19/01/02).

En ese contexto, comienza a perfilarse el principio de acuerdo entre la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nucleaba a los privados, y el Grupo Productivo (GP) acerca de la pesificación, donde los bancos discutían el monto y los modos de la medida pero ya no la

³⁷ Las primeras medidas de la Corte fueron respetando la ley de Emergencia Económica y el corralito. El 28 de diciembre y el 10 de enero, dictaminaron que los ahorristas que habían conseguido un amparo para recuperar sus depósitos, los devolvieran a los bancos. Sin embargo, el 1 de febrero, declararon la inconstitucionalidad del corralito, en el caso Smith, un ahorrista argentino, con 6 votos a favor y 3 abstenciones.

³⁸ El 24 de enero la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas en la Argentina. También a fines de enero se reforma la ley de Quiebras. La ley 25.563 disponía la suspensión de las quiebras y ejecuciones hipotecarias por 180 días. La ley fue fuertemente resistida por la banca y el FMI. Se promulgó parcialmente el 14 de febrero y se derogó en gran parte el 16 de mayo. Se sancionó con la eliminación del artículo sobre capitalización compulsiva de deudas (que era la promovida por la UIA). Sin embargo, el FMI continuó presionando fuertemente por su derogación completa.

medida en sí (Cobe, 2009). La banca privada nucleada en ABA no logró imponer sus intereses, pero sí se mantuvo como interlocutor del gobierno, pudiendo negociar parte de las medidas. La banca privada nacional comenzó a diferenciarse de la banca privada extranjera, que se mostraba más crítica del gobierno, y se terminó incorporando al GP. Los bancos públicos y cooperativos, por su parte, nucleados en la Asociación de Bancos públicos y privados de la República de Argentina (ABAPRA) también se acercaron al GP y sobre todo al gobierno para procurar un trato preferencial en el desarrollo de la crisis. Fundamentalmente, propusieron que la recuperada atribución del Banco Central de funcionar como *prestamista de última instancia*³⁹ se aplicara sólo a la banca nacional, y que la banca extranjera recurriera a sus casas matrices. Pero estas no se hicieron cargo, y el gobierno habilitó los redescuentos a todos los bancos que los pidieron.

Balance de la pesificación

La pesificación, finalmente, consistió básicamente en:

- Pesificación a 1,40 de todos los depósitos, con la alternativa de un bono en dólares del Tesoro, en los casos de hasta 30.000 dólares.
- Pesificación 1 a 1 de todas las deudas
- Indexación de todos los depósitos y deuda según un coeficiente (el CER) que responde a la evolución de la inflación (más adelante se cambió por la evolución del salario para los créditos de menor monto, que era menor a la inflación, aunque eventualmente fueron confluyendo).
- Compensación a los bancos (básicamente por la brecha de la pesificación asimétrica)

Para afrontar las compensaciones, el Estado eventualmente aplicó un canje voluntario de pesificación de la deuda pública en dólares que había sido operada en noviembre de 2001 a tenedores locales (un 41% a las AFIP, un 31% a bancos nacionales y un 28% a particulares). Se trataba de préstamos garantizados por un total de 42.258 millones de dólares que no estaban incluidos en el default.

Además de la posición de los bancos, dentro del gobierno existía una resistencia a la propuesta del GP, sobre todo desde el Ministerio de Economía, debido al alto costo fiscal, aunque terminaron por aceptarla. Existió la propuesta de realizar una diferenciación entre los distintos

³⁹ “Es decir, operar como auxilio último de los bancos con problemas de liquidez transitoria, brindándoles asistencia financiera. En lo fundamental esta asistencia consiste en redescuentos (préstamos) que la autoridad monetaria otorga a las entidades” (Cobe, 2009: 61).

deudores para discriminar entre las grandes empresas que podrían hacer frente a sus deudas en dólares, y quienes no. ABAPRA, por caso, proponía un tratamiento diferenciado de los ahorristas y deudores. Dicha propuesta (llamada un “hospital de empresas”), sin embargo, fue rechazada por el ministro Remes con el argumento de su complejidad y ser proclive a la discrecionalidad y corrupción (Burgo, 2011).

De todas formas, como veremos en el siguiente apartado, la salida encausada encontró dificultades y recién se logró instalar superado su mayor momento de inestabilidad hacia fines de abril. Pero más allá de los vaivenes, el resultado fue que el capital sufrió una reestructuración que benefició al sector industrial concentrado (de manera doble si habían tomado deuda en dólares), y perjudicó a los bancos, aunque estos fueron compensados y además irían recuperando posiciones (en 2005 comenzaron a obtener nuevamente beneficios) hasta llegar incluso a superar sus niveles de rentabilidad durante los años 90⁴⁰. En el caso de los ahorristas ocurrió algo similar, de una pérdida relativa, aunque más compleja debido a su masivo número que plantea casos variados (distintos tipos de devoluciones en distintos momentos). Pero de forma genérica, operó un verdadero “mecanismo de desposesión” de los activos de los ahorristas y un innegable “salvataje al capital” (Grigera y Eskenazi, 2013), convirtiendo deuda privada en deuda pública.

De Mendiguren, referente de la UIA y entonces Ministro de Industria, planteó que la pesificación no era meramente una política monetaria, sino “el pilar económico de la recuperación” (Cobe, 2009). Por otro lado, con respecto a la proporción concreta que tomó la pesificación asimétrica, tanto el propio Duhalde como funcionarios suyos admitieron cierta arbitrariedad, y que se trató de “una decisión contingente”⁴¹. Por su parte, Cobe concluye en su investigación que “la propuesta finalmente adoptada fue el resultado de una articulación entre actores que expresaban los intereses de sectores económicamente dominantes” (Cobe, 2009: 89), y que se trató de “una resolución regresiva [puesto que] la igualdad de tratamiento de derecho implicó en la práctica profundizar la desigualdad y la regresividad en la distribución de la riqueza” (Cobe, 2009: 94).

⁴⁰ “La participación de las ganancias de los bancos, como porcentaje del PBI, se elevó de 0,33% en 2005 a 1,08% en 2013. Es decir, un aumento del 221%” (Bondarovsky, 2014: s/p). “Así, los banqueros que habían resistido la ira popular en la crisis de 2002 tuvieron como premio el rebote hacia un rápido crecimiento” (Chorny, 2015: s/p).

⁴¹ Duhalde admite que “la pesificación asimétrica fue, en efecto una decisión contingente”, pero que operaba sobre una decisión estratégica de fondo de cambiar el modelo económico, reencauzando la producción (Duhalde, 2007: 326). El entonces viceministro de Economía, Jorge Todesca, al ser cuestionado posteriormente sobre el motivo del inicial doble tipo de cambio lanzado en enero de 2002, uno a 1,40 y otro libre, respondió: “Para testear el mercado. No sabíamos bien qué podía pasar tras once años de un dólar fijo. Había que ver sobre la marcha” (Burgo, 2011: 265).

Entendemos que las tres apreciaciones contienen aspectos ciertos. El desbloqueo de las trabas financieras y la licuación de las deudas, sin dudas ayudaron a reencauzar la producción (más allá de las consideraciones sobre “la justicia” de la medida, o sobre la posibilidad de algunas empresas de haber sostenido sus deudas en dólares). Por otro lado, ciertamente el nivel de pesificación de 1,40 fue relativamente arbitrario, pero justamente por ello, fue siendo corregido, como vimos, mediante otros indicadores (el CER y el CVS) y con distintas compensaciones y alcances. Con lo cual, finalmente, *el resultado real fue menos efecto de decisiones unilaterales que de un proceso dinámico que fue encausando su curso entre muchas medidas puntuales*. Por último, *el resultado indudablemente significó una regresiva distribución de recursos, pero dicha redistribución fue precisamente la forma que tuvo la salida de la crisis*.

Una negociación de Fondo

Argentina y el FMI

La relación del país con el FMI había adquirido un cariz particular en la década de los 90, que empezó a cambiar con el gobierno de la Alianza, y fue ya muy distinta con el gobierno de Duhalde (y seguiría cambiando con el de Kirchner). Además de ser distintos momentos locales, el propio organismo estaba atravesando una etapa de transformación.

Bajo la presidencia de George W. Bush iniciada en 2000, cambió la estrategia del gobierno norteamericano para con el organismo. Los neoconservadores republicanos eran críticos de los “salvatajes” que el organismo había efectuado a países en default, como México, los del sudeste asiático, Rusia y Brasil. En su argumentación, se fomentaba así el endeudamiento irresponsable y por esto planteaban la teoría del “riesgo moral” (*moral hazard*). Esta visión se plasmó en el Reporte Meltzer, un informe del Congreso estadounidense que proponía reformas en las instituciones financieras internacionales. Sintéticamente, el FMI pasaría de ser “un banquero que otorgaba grandes créditos cuando estallaban crisis, a consultor y auditor de las políticas económicas” (Bembi y Nemiña, 2007: 40); el papel que jugó, en resumidas cuentas, durante el gobierno de Duhalde.

En consonancia general con este enfoque, en mayo de 2000, asumió la nueva dirección del FMI el alemán Horst Köhler, quien sin embargo no descartaba la necesidad de grandes créditos para países en desarrollo. “La propuesta del organismo busca entonces el doble objetivo de

reducir y endurecer las condiciones incluidas en sus acuerdos” (Bembi y Nemiña, 2007: 42). Hasta entonces, se imponían numerosas condiciones que los países normalmente no cumplían pero de todas formas obtenían *waivers*, es decir, dispensas o exenciones por el incumplimiento de dichas metas. Pero el cambio fundamental fue que a partir de entonces las condiciones debían ser demostradas por el país *previamente* a la firma de un acuerdo (Bembi y Nemiña, 2007). Por último, en septiembre de 2001, a la par del reordenamiento de las prioridades del gobierno de EE.UU. tras el atentado terrorista en su territorio, ingresó Anne Krueger al directorio del FMI, representante de la línea más dura.

Breve repaso de la deuda

Durante el gobierno de la Alianza, la conjunción de un enorme endeudamiento⁴² y la persistente recesión empujaron al gobierno a poner sus esperanzas en refinanciamientos con el organismo multilateral. Los acuerdos que finalmente se realizaron fueron tres, o más bien, “dos y medio”, pues a los conocidos “blindaje” y “megacanje”, hay que sumar un intento de reestructuración del cual se efectuó sólo una primera parte en noviembre de 2001. El *blindaje*⁴³ consistió en préstamos importantes de dinero en noviembre del año 2000 y el *megacanje*⁴⁴ en un cambio de bonos que significó una multiplicación enorme del endeudamiento en junio de 2001. Pero el gobierno todavía consiguió en noviembre de 2001 un “último crédito” de 5.000 millones de dólares, que a esa altura sólo posponía lo inevitable. Lo novedoso fue que incluyó el compromiso de una reestructuración de deuda que implicara una quita, incluyendo así al sector privado. Pero el intento de reestructurar la deuda quedó trunco, con el advenimiento del corralito y la crisis interna, y sólo se completó la primera parte que contemplaba a los tenedores locales. Se canjearon bonos por 41.000 millones de dólares, pero con la opción de recuperar el bono original, y bajo el concepto de “préstamos garantizados”, es decir,

⁴² “El aumento de los intereses de la deuda se originó en la suba de la tasa de interés de la deuda pública, que de un promedio de 5,8 por ciento en 1996 pasó a 9,4 por ciento en 2001, junto con el crecimiento en el stock de deuda” (Bembi y Nemiña, 2007: 45).

⁴³ Un paquete de asistencia financiera con participación de entidades oficiales y privadas que ascendían a un fondo de casi 20.000 millones de dólares, más la inclusión de compromisos inciertos del sector financiero local e internacional para continuar suscribiendo bonos por otros 20.000 millones, lo cual permitió al gobierno presentar el acuerdo con la cifra de 40.000 millones. Las condiciones para Argentina eran un tope del déficit fiscal de 6.500 millones de dólares para el 2001, para lo cual se fijaron nuevas medidas de ajuste en el gasto público. Principalmente, la reestructuración de los subsidios previsionales familiares, un nuevo pacto fiscal con las provincias y una reforma del sistema de seguridad social para eliminar el déficit del PAMI.

⁴⁴ Un canje voluntario de bonos, frente a los vencimientos de 2001 a 2005, incrementando sustancialmente el endeudamiento a 25 años. Se cambió deuda nominal de 30.000 millones de dólares y una reducción en los pagos de intereses entre 2001 y 2005 a costa de llevar los pagos de capital más intereses a 66.000 millones. El FMI apoyó el canje, pero comenzó a endurecer su postura.

manteniendo su valor nominal. Estos bonos, además, quedaron fuera del *default* que anunció el efímero gobierno de Rodríguez Saá en la última semana del año 2001.

La negociación imposible

El gobierno de Duhalde desde un comienzo buscó un acuerdo con el FMI. La magnitud de la crisis le brindaba al gobierno un margen de negociación desde un lugar de exposición mundial de emergencia, y hasta llegó a insinuar una ruptura, pero en todo momento privilegió llegar a un acuerdo. El mismo posibilitaría fondos para paliar la crisis, y abrir la posibilidad de otros créditos con el resto de los organismos, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Concretamente, esperaban un paquete de ayuda de 15 a 20 mil millones de dólares, la refinanciación de deudas por un año, y créditos con el BM y BID para planes sociales.

Pero ese acuerdo nunca llegó, aunque el gobierno fue cumpliendo casi todos los puntos requeridos. La falta de acuerdo se explica por la intransigencia del propio organismo para el caso argentino. De manera contemporánea, Turquía y Brasil recibieron importantes desembolsos, pero mientras Turquía era un importante aliado estratégico de EE.UU., y Brasil asumía un rol clave en la región, Argentina podía ser usada como “caso aleccionador”. Así, el FMI pasó de señalar a la Argentina como “buen alumno” en los noventa a hacerlo ejemplo de “mal alumno” en 2002 (Bembi y Nemiña, 2007).

El gobierno de EE.UU. jugó un papel conciliador y llegó a ser decisivo en una etapa de la negociación en la cual se logró un acuerdo de corto plazo (en enero de 2003, como veremos más adelante). Los países que se mostraron más duros fueron Italia y Japón, ya que ambos poseían una cantidad significativa de bonos en manos de particulares. En segundo lugar, los gobiernos de España, Alemania y Francia abogaban por sus empresas de servicios públicos privatizados en la década de 1990, que se veían perjudicadas con la devaluación y congelamiento de tarifas. Algunas de ellas, además, realizarían juicios en el CIADI (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), organismo del BM con participación voluntaria, al que Argentina había suscripto en la década anterior.

Las exigencias del FMI eran: unificación cambiaria y libre flotación cambiaria (se cumplió lo primero pero no lo segundo del todo, con una flotación intervenida); “salvataje” del sistema financiero (se cumplió en buena medida); ajuste fiscal (se cumplió, aunque no exactamente como lo esperaba el FMI, sino de manera indirecta por medio de la inflación); política monetaria restrictiva para mantener baja la inflación (se cumplió parcialmente, aunque se

emitieron las cuasi monedas provinciales; la inflación fue alta pero no se “disparó”); inicio de negociaciones con privados para reestructurar la deuda en default (recién se avanzó hacia fines de 2002) (Bembi y Nemiña, 2007). Cuando se avanzaba en cumplir unos requisitos, el organismo planteaba otros, alejando la posibilidad de un acuerdo. Como lo plantean Bembi y Nemiña:

“el FMI comenzaría a plantear nuevas exigencias a medida que las anteriores eran cumplidas total o parcialmente, con el objetivo evidente de retrasar la suscripción del acuerdo, y así, el otorgamiento de financiamiento al país” (Bembi y Nemiña, 2007: 65).

Esta lista “ampliada” incluía: la derogación de la ley de subversión económica y modificación de la ley de quiebras, la reestructuración de la banca pública, un fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos en manos de empresas privatizadas, un compromiso de superávit primario para 2003, control de gasto público provincial y una negociación de buena fe con los acreedores (Bembi y Nemiña, 2007).

Del “goteo” a la “crisis de abril”

Si en febrero ya estaba delineado a grandes rasgos el plan económico del gobierno (la pesificación asimétrica y la búsqueda de un acuerdo con el FMI, manteniendo el equilibrio fiscal, evitando la disparada de la inflación y esperando la reactivación económica), otra cosa muy distinta era que el plan estuviera funcionando (y muchos de hecho acusaban al gobierno de improvisado).

El problema más urgente era la doble presión sobre el tipo de cambio y las reservas del Banco Central (BCRA). Efectivamente, el plan económico se vio perjudicado por los constantes fallos judiciales que exigían el retiro en moneda original o en el cambio libre. Para hacer frente a estos compromisos, los bancos pedían redescuentos al BCRA, lo cual ponía presión al dólar, pues los pesos que eran “liberados” iban a la compra de dólares (Amadeo, 2003). Durante el 2002, mediante las medidas cautelares se retiraron 4.336 millones de dólares, de 185.099 casos (ahorristas), monto que era solo el 6% del total del dinero acorralado, pero que resultó una carga importante (Cobe, 2009).

Además existieron “grietas” en el *corralito* y *corralón* que permitieron aumentar el drenaje con distintos mecanismos que evitaban las restricciones bancarias (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). También esos pesos retirados muchas veces iban hacia la compra de dólares, haciendo

subir su precio, y obligando al BCRA a gastar más reservas en redescuentos a los bancos que aducían no tener el respaldo suficiente, y evitar una escasez que acelerara aún más la suba del dólar y por lo tanto la inflación. Esto, además, en un marco en el cual los exportadores se mostraban reticentes a liquidar sus divisas, especulando con la oscilación del dólar. Una opción era “dejar caer a algunos bancos”, pero el gobierno lo evaluó muy riesgoso en términos económicos y políticos, además de las fuertes presiones de *lobby* (Cobe, 2009; Levy Yeyati y Valenzuela, 2007).

Tras el fracaso del canje optativo de depósitos por bonos, el equipo económico planeó un canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo en dólares por bonos públicos (Plan Bonex II, por el Bonex original de 1989) y un proyecto de decreto que pusiera fin al drenaje por medio de fallos judiciales. El ministro Remes también instó a que el Poder Legislativo modificara la ley de Quiebras y derogara la de Subversión Económica, lo cual era demandado por los bancos y el FMI. Pero la nueva ofensiva de Economía resultó en un nuevo fracaso. El martes 23 de abril, ya con feriado bancario, el Congreso rechazó el plan económico y Duhalde nunca firmó el decreto, con lo cual al día siguiente renunciaron el ministro de Economía, el de Industria y el de Jefatura de Gabinete.

Cuando las especulaciones no descartaban la caída del gobierno, el jueves 25 de abril el presidente y la gran mayoría de los gobernadores firmaron un acuerdo de 14 puntos, en el cual, básicamente, asumían el plan económico que había sido rechazado hasta entonces. El acuerdo era notoriamente ortodoxo, y su primer punto sintetizaba todos los demás: “Se cumplirá con los compromisos con los organismos internacionales”, decía, con lo que se trataba de cumplir las metas que le imponía entonces el FMI (equilibrio fiscal, estabilidad de precios, derogación de Ley de Subversión Económica, reformar la Ley de Quiebras, entre otras). Al día siguiente, el Congreso aprobó la ley “antigoteo” o “tapón”, poniendo un freno al problema macroeconómico más urgente. Fue entonces que casi toda la dirigencia política aceptó el rumbo económico, y todo avanzó aún con muchas dificultades, pero con menos incertidumbres y una base de apoyo político-institucional más sólida para el gobierno (lo cual será retomado en el próximo capítulo).

Fortaleciendo el rumbo: la gestión Lavagna

Tras la renuncia de Remes Lenicov, asume el Ministerio de Economía Roberto Lavagna, un economista heterodoxo del peronismo pero respetado por el establishment. Su gestión se caracterizó por evitar grandes anuncios, y en buena medida mantener el rumbo iniciado por su antecesor. Mayo fue todavía un mes difícil, pero hacia junio pudo mostrar como logro un canje voluntario de bonos que en forma parcial terminó con el “corralón” (que se completaría en marzo de 2003). A partir de entonces las variables económicas comenzaron a mejorar, coronando en enero de 2003 la firma de un modesto, pero largamente esperado, acuerdo con el FMI.

Con la crisis de abril, entonces, se modificó el equipo económico pero en general se confirmó el rumbo económico. Este recambio sirvió en parte como forma de renovación de una gestión deslegitimada por los altos costos de sus políticas, permitiendo que la gestión entrante se beneficie de sus efectos “positivos” sin tener que asumir sus “culpas” por los efectos “negativos”⁴⁵.

“Jorge Remes tuvo que afrontar la devaluación y los efectos de la ruptura de los contratos; pagó los costos de dar las malas noticias y ya no estaba cuando la economía comenzó a reaccionar (...). Roberto Lavagna llegó cuando los grandes costos se habían pagado y los mayores problemas estaban en vías de solución” (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007: 213-214).

Claro que esto no se percibió así entonces, ni mucho menos quiere decir que Lavagna haya asumida en buenas condiciones económicas. El rumbo ya estaba delineado, pero todavía hacía falta atravesarlo con firmeza. Efectivamente:

“si Remes tuvo que enfrentar el incendio, Lavagna tuvo que lidiar con sus consecuencias. Resistió presiones distributivas (de los bancos y las empresas, de los ahorristas, del exterior) y defendió las medidas implantadas en los primeros tres meses, como las retenciones, la regulación de tarifas y la priorización del superávit fiscal” (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007: 214).

Un cierre al corralón

Lavagna dejó de lado la opción de anclar el dólar y en un principio retomó el Plan Bonex II, aunque con modificaciones, buscando su aceptación por parte de la coalición de gobierno. Propuso que un 30% de los bonos fueran emitidos y garantizados por los mismos bancos y que

⁴⁵ Vale dejar constancia aquí, para retomar en las conclusiones, que la misma lógica aplicamos a la sucesión de gestiones presidenciales de Duhalde y Kirchner.

además devolvieran una parte en efectivo. Los bancos, sobre todo ABA, rechazaban esta propuesta, y comenzaron a reclamar nuevas compensaciones, como la *indexación asimétrica*. (Mientras tanto, algunos bancos privados nacionales pasaron de ABA a ABAPRA. Aunque en abril de 2003, los privados nacionales volvieron a nuclearse en ADEBA.) En un inicio, depósitos y deudas se indexarían por igual con el índice de precios (el CER), pero esto fue insostenible para los pequeños y medianos deudores, lo que llevó a que en abril se modificase la pauta de ajuste para los créditos de menor monto, que pasaron a seguir el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que era mucho menor. La banca también reclamaba que se los compensara por lo perdido con los fallos judiciales.

Pero la falta de acuerdo entre los bancos y el gobierno llevó a abandonar el plan de bonos obligatorios. Oficialmente, el gobierno habló de un alto costo fiscal, pero primó la falta de consenso a nivel político, y la falta de apoyo de la Corte Suprema. La estrategia pasó entonces a ofrecer un bono voluntario en dólares (o bien, la aceptación de la reprogramación de la devolución pesificada del depósito), y se privilegió el contacto con unos bancos sobre otros.

Aun con reticencias, en junio de 2002, a través del decreto 905, se alcanzó la adopción del plan de canje voluntario con bonos, y se definió el monto compensatorio por la pesificación asimétrica. La aceptación fue del 23% (Burgo, 2011), lo cual no fue considerado un fracaso, pero hacía falta más. Para entonces, el drenaje de fondos sólo en junio fue de 1.008 millones de dólares y el acumulado del año hasta junio de 4.836 millones. Sin embargo, mientras que hasta julio se registró una permanente baja en las arcas bancarias, hacia agosto comenzó a ser mayor la constitución de nuevos depósitos. Existieron dos ofertas más de bonos (los Boden), en pesos y dólares, para los ahorristas, que se sumaron a la de junio, una en septiembre de 2002 y la última en marzo de 2003, que dio por terminado el “corralón”.⁴⁶

Con un alto costo fiscal, los bonos frenaron en buena medida el drenaje. A diciembre de 2004, solo por este concepto, la deuda del Estado ascendía a 6.556 millones de dólares; y en total, en el período 2002-2003, el Estado se endeudó en compensaciones, principalmente a los bancos, por 14.359 millones de dólares, la mitad del endeudamiento público total (Ministerio de Economía y Producción, 2004 y 2005 en Cobe, 2009: 108)⁴⁷. Con respecto a las nuevas

⁴⁶ En marzo de 2003 un nuevo decreto liberaba los plazos fijos de hasta 42.000 dólares, mientras que los mayores a ese número recibían un bono en dólares con vencimiento en 2013. En marzo de 2003 la CSJN todavía avaló la redolarización de los depósitos del gobierno de la provincia de San Luis, pero en octubre de 2004, ya con modificaciones de sus integrantes, la Corte convalidó la medida.

⁴⁷ Los 14.359 millones de dólares se componen de: 5.946 millones “para cubrir pérdidas de los bancos asociadas a la pesificación asimétrica de créditos y depósitos”; 2.358, “para cubrir el descalce en moneda extranjera de los bancos”; y 6.055, “para entregar a ahorristas en los canjes de depósitos por bonos” (Cobe, 2009: 108).

compensaciones reclamadas por los bancos, prosiguieron en el marco del curso de las negociaciones que entraron en el proceso de reestructuración de la deuda, que concluyó en 2005 (y en el caso particular de la *indexación asimétrica* fue perdiendo relevancia debido a la confluencia entre inflación y salarios).

El plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados

La necesidad de ampliar los subsidios para una gran parte de la población empobrecida fue asumida desde un primer momento por el gobierno. Su ejecución, sin embargo, recién comenzó en mayo. Podemos plantear tres grandes efectos de la medida: uno de necesidad social, rayana en la supervivencia, para sus destinatarios; otro económico, al hacer crecer la demanda de consumo interno; y por último, y ciertamente no menos importante, un efecto político, de apaciguar la protesta social, o al menos de impedir su recrudecimiento.

Discutida desde el comienzo del mandato de Duhalde (reformulando la proclama de Saá de crear un millón de empleos en la de crear un millón de planes sociales) desde la Mesa de Diálogo, con participación de sindicatos y organizaciones sociales, la medida fue anunciada por Duhalde el 3 de abril de manera conjunta a la aplicación de las retenciones que justificó para solventar los planes (Burgo, 2011). Los beneficiarios, jefes de hogar desocupados con hijos menores a cargo, debieron inscribirse hasta el 17 de mayo, y comenzaron a cobrar a fines de ese mes (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007).

Durante el gobierno de la Alianza, los planes Trabajar alcanzaban unos 300.000 beneficiarios, y significaban 200 pesos mensuales. Durante el gobierno de Duhalde, con su reconversión a Planes de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados⁴⁸, se bajó el monto a \$150, pero en agosto se alcanzó a dos millones de beneficiarios (sumando todos los planes sociales⁴⁹). En el 2002 se

⁴⁸ El decreto 565/02 reglamentó el Programa de Jefes de Hogar para ser aplicado hasta el 31 de diciembre de 2002 en todo el territorio nacional, que luego sería prorrogado por un año más. Los orígenes de este programa se remontan al decreto 165 del 22 de enero de 2002, que había establecido una prestación de entre 100 y 200 pesos para los jefes y jefas de hogar desocupados por un lapso de tres meses. La cantidad de beneficios a otorgar se hallaba determinada por los fondos disponibles y los créditos que se asignaran en el Presupuesto Nacional (art. 5°). Esta limitación fue cuestionada por la Mesa de Diálogo Argentino y en los considerandos del decreto 565/02 se citaron sus recomendaciones, en el sentido de que resultaba urgente “universalizar” este plan, con el objetivo de asegurar un mínimo ingreso mensual a “todas las familias argentinas”. (CELS, 2003)

⁴⁹ Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en septiembre de 2002 el número total de beneficiarios era de 1.7 millones de personas y en abril del 2003, según datos oficiales publicados por el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEYC), subió a 1.987.875 personas (CELS, 2003). Por otra parte, de conformidad con el cuarto informe presentado por el CONAEYC al Poder Ejecutivo (período septiembre-octubre 2002), al mes de octubre de 2002, el Programa de Emergencia Laboral (PEL) incluyó a 280.777 beneficiarios, con igual monto; y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ejecutó el Programa

destinaron para ello 2.400 millones de pesos, aunque una parte importante se abonaron con bonos LECOP.

El (mini)acuerdo con el FMI

Hacia fines de 2002, la situación económica había indudablemente mejorado, pero el FMI seguía evitando un acuerdo. En noviembre, el gobierno plantea la imposibilidad de afrontar el vencimiento de 805 millones de dólares con el BM sin un préstamo del FMI. La amenaza alertó al G7 y a la comunidad financiera internacional, en un contexto de crisis en Turquía, Brasil y Uruguay. El resultado fue que el directorio ejecutivo del FMI, con el firme aval del gobierno norteamericano, presionó a la propia gerencia que se negaba hasta entonces al acuerdo (Bembi y Nemiña, 2007; Burgo, 2011; Levy Yeyati y Valenzuela, 2007).

El acuerdo se firmó en enero de 2003, por ocho meses, habilitando desembolsos menores del BM y del BID (principalmente, 600 millones dólares del BM destinados a los planes sociales). El FMI se limitaría a cubrir los vencimientos de capital, debiendo el Estado argentino cubrir los intereses con sus reservas. Irónicamente (pero no paradójicamente), el acuerdo finalmente se logró precisamente cuando la Argentina expresamente *no* cumplió con las metas pautadas. El gobierno de Néstor Kirchner asumió entonces con mayor margen de maniobra y se dispuso a acordar un arreglo de mediano plazo, pues todavía contaba con pocas reservas y debía afrontar fuertes vencimientos (del blindaje), que finalmente reprogramó en septiembre de 2003.

Haciendo un brevísimo balance sobre la deuda, lo sustancial fue suspender vencimientos de deuda, primero de manera unilateral con el default y luego de forma pautada con el acuerdo de enero de 2003; pero también la relación con el FMI resultó de hecho en un monitoreo de ortodoxia económica que en gran medida fue cumplida.

Una mirada de conjunto

Las dos caras de 2002: en la profundización de la crisis está su salida

Existe una baja de indicadores socio-económicos muy pronunciada en la primera mitad de 2002, tanto más grave cuanto se trata de una caída con respecto al ya muy malo año 2001 que

Familias por la Inclusión Social que a la fecha alcanza aproximadamente a 175 mil familias, con un monto similar (200 pesos de tope).

arrastraba tres años de recesión⁵⁰. Pero dicha caída es parte de la recuperación, ya que, entre otros motivos, debido a la baja de los ya bajos salarios⁵¹ es que se recupera la producción (por los bajos costos). Compartimos, así, la apreciación de Gastón Varesi sobre que la recuperación desde 2003 fue en gran medida sobre la pauperización efectuada en el propio 2002 (Varesi, 2013). Si en 2003 el PBI creció un 8,4% (más que cualquier otro país del mundo, incluido China), en 2002 el PBI había caído un 10,9%. En concreto, todo el crecimiento de 2003 no alcanzó a revertir la caída de 2002. Y si bien una parte de la caída de ese año se debe al arrastre del estallido de la crisis a fines del año anterior, también es cierto que la caída fue muy pronunciada a pesar de que su recuperación comenzó ese mismo año.

“A juzgar por los indicadores económicos, el segundo semestre de 2002 fue más benigno –y ciertamente más tranquilo– que el primero. En parte porque la «tarea sucia» ya había sido realizada en los primeros meses del año (devaluación, default, pesificación, corralón); en parte porque todo lo que podía caer ya había caído lo suficiente” (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007: 223).

Efectivamente, si en su conjunto 2002 fue un año económicamente peor que 2001 y que 2003, el cambio de tendencia, sin embargo, debe efectuarse hacia mediados de año. Mayo, en ese sentido, puede considerarse el mes de quiebre: los ingresos fiscales fueron de 4.827 millones de pesos, un 2,9% superiores a los del mismo mes de 2001, lo que permitió iniciar los pagos de los planes sociales en la segunda quincena del mes (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). Hacia julio, el dólar se había estabilizado en torno a los 3,5 pesos, y la cuestión macroeconómica pasó del temor a la suba inflacionaria a procurar que ese nivel de dólar sobrevaluado no cayera.

En este sentido, las ventajas para las arcas estatales de lo que luego se llamaría el “modelo de dólar alto” era la tendencia al superávit comercial que ayudaría (vía retenciones) a crear un superávit fiscal; pero también, y en ese momento de manera principal, la inflación hacía crecer la recaudación (con el IVA, el Impuesto a las Ganancias y el impuesto al cheque, en ese orden) pero no el gasto comprometido en el presupuesto, ya que se retrasaban pagos y prácticamente se congelaron los salarios estatales. En términos de Grigera y Eskenazi:

“El déficit crónico y el estrangulamiento de las cuentas fiscales que bajo la convertibilidad no encontraba resolución, se resolvió de golpe, mediante la combinación de la desvalorización de la moneda, la licuación de los salarios y asignaciones que paga el estado (comenzando por las jubilatorias) y la cesación de pagos de la deuda externa” (Grigera y Eskenazi, 2013: 175).

⁵⁰ El entonces funcionario Eduardo Amadeo menciona el mes de abril de 2002 como “el pico de la crisis económica” y brinda datos como una caída del producto del 13% a nivel anual, el desempleo en 22%, déficit, bajas reservas, desplome del salario real, etc. (Amadeo, 2003: 148).

⁵¹ Ya vimos como los salarios reales cayeron en 2002 aproximadamente un 35% (ver pág. 38). Para la evolución desde 2001 a 2010, ver CIFRA (2011).

La continuidad (kirchnerista) de la recuperación

Pero la relación entre 2002 y 2003 se puede ampliar aún más, pues la recuperación que comienza ya en la segunda mitad de 2002 y que continúa con fuerza los años siguientes es en relación a ese profundo “piso” de comienzos de 2002, pero desde una caída que comienza en 1998; y es recién en 2005 que el PBI superó los niveles de ese año (Grigera y Eskenazi, 2013), es decir, anteriores al comienzo de la recesión. Grigera y Eskenazi plantean por ello un ciclo de recuperación hasta el segundo trimestre de 2005 para marcar entonces el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento. La clave de la recuperación habría sido la reutilización de la capacidad instalada ociosa (que cuantifican con la industria manufacturera como variable *proxy*), mientras que a partir de 2005 se trataría de un “crecimiento genuino”, de “un nuevo ciclo de acumulación”, rechazando la hipótesis del crecimiento durante el gobierno de Kirchner como un mero rebote o de un viento pasajero (Grigera y Eskenazi, 2013)⁵².

Asimismo, en términos de *política económica*, si bien creemos que lo sustancial de la salida se efectuó durante el gobierno de Duhalde, algunas cuestiones se cerraron durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, y en general coinciden con la continuidad de Roberto Lavagna a cargo del Ministerio de Economía, que abandona el 27 de noviembre de 2005, y a la vez con este “período de recuperación”. Y también con la consolidación política del “kirchnerismo”, tras su enfrentamiento y triunfo sobre el “duhaldismo” en las elecciones legislativas de octubre de 2005.

El ejemplo más notorio a este respecto fue la reestructuración de la deuda externa que se efectivizó con una quita del 75%⁵³. La oferta fue ofrecida en septiembre de 2003 y finalmente cerrada entre enero y febrero de 2005, con la aceptación del 76,1% de los tenedores de bonos (reduciendo la deuda de 191.296 a 126.567 millones de dólares). La otra cara de la cuestión de la deuda fue la negociación y el pago al FMI. A este respecto, en septiembre de 2003 se firmó un programa en el cual el organismo aceptó postergar vencimientos por 20.091 millones de dólares con los organismos y Argentina se comprometía a un superávit fiscal primario de 2,5 en 2003 y de 3% en 2004. Finalmente, dos semanas luego de la salida de Lavagna, Kirchner anunció en diciembre de 2005 el pago íntegro de la deuda al FMI por 9.530 millones de

⁵² Además, los autores identifican a sendos momentos como de “reproducción simple” y “reproducción ampliada”, pero aunque ilustrativa, no creemos que dicha caracterización se ajuste a la definición que Marx le da a dichos conceptos (Marx, 2008).

⁵³ Claro que habría que ampliar la situación hasta la actualidad, con el resurgimiento de la cuestión tras el fallo de noviembre de 2012 de la justicia estadounidense favorable a los *holdouts*, es decir, a los tenedores de bonos que no aceptaron el canje. Se abrió entonces un nuevo proceso de negociación, con fuerte mediación política, que influyó en una resolución de la ONU en septiembre de 2015, y el posterior pago ya con el nuevo gobierno de Cambiemos del presidente Mauricio Macri, que asumió el 10 de diciembre de 2015.

dólares. También, entre 2003 y 2005, se continuó la negociación con las empresas privatizadas por el aumento de tarifas (las estatizaciones fueron iniciadas recién durante el “nuevo ciclo” y la mayoría, incluso, luego de 2008).

Una mirada al nuevo ciclo económico (kirchnerista)

Sin pretender profundizar en la totalidad del ciclo económico kirchnerista (y menos aún en las dificultades que comenzó tener en 2008-2009 y sobre todo a partir de 2013), vale sí precisar algunas de sus cuestiones generales, que caracterizaron su desarrollo desde el inicio de la recuperación económica, ya desde el gobierno de Duhalde.

La fracción productivo-exportadora del capital fue la principal beneficiaria de los cambios posdevaluatorios. Incluye a la industria automotriz, las empresas de hidrocarburos, las mineras, un heterogéneo abanico de agentes vinculados a los circuitos agro-industriales, junto a empresas químicas y siderúrgicas. Todos ellos caracterizados por una fuerte y creciente concentración y extranjerización (Varesi, 2013). Por otro lado, también sirvió para reactivar el “amplio espectro de PyMEs, recuperándose las 47 mil que habían cerrado en el período recesivo anterior y creando otras 40 mil nuevas” (Varesi, 2013: 200). Este sector triplicó su rentabilidad con respecto a la década de los noventa, pero duplicó su brecha con respecto a las grandes empresas (ref. Kulfas, 2011 en Varesi, 2013).

Las firmas agroindustriales pasaron de exportar un tercio de su producción a fines de los años noventa, a dos tercios tras la devaluación; mientras que las empresas agrocomerciales (sobre todo de aceites y grasas que ya en los años 80 superaron a los frigoríficos como principal rubro exportador de Manufacturas de Origen Agropecuario) ya exportaban la mayoría de su facturación. Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial incrementaron sus exportaciones en menor medida, y de manera decreciente. En promedio pasaron del 20% a fines de los noventa, a un 32% para el período 2002-2007. El salto más notorio exportador lo vivió el sector del petróleo y de la minería. Este último inició durante la nueva década nuevos proyectos extractivos vinculados casi exclusivamente a la exportación. (Wainer, 2013)

Para sintetizar, coincidimos con Andrés Wainer en que “la salida de la Convertibilidad produjo un cambio en las relaciones de fuerza en el interior del bloque en el poder que incluyó el ascenso de una nueva fracción hegemónica” (Wainer, 2013: 63). Es decir, que no cambió la composición de las fracciones burguesas que ocupaban el bloque en el poder, sino que simplemente se reordenaron en su hegemonía interna. La nueva fracción hegemónica pasó a ser

la gran burguesía industrial, pues fue la que mayormente pudo ir orientando las políticas económicas del gobierno, a diferencia del sector productivo agrario, que aunque también se benefició enormemente, se mantuvo más enfrentado con el gobierno (Wainer, 2013: 91-92).

Como ya mencionamos, el inicial “modelo del dólar alto” tenía sus propios límites, pues la protección al mercado interno que generaba empleo se sostenía con inflación que presionaba sobre los salarios. Y éstos recién se recuperaron luego de una fuerte baja, para más adelante volver a sufrir una puja salarial, y en general sostenidos por una alta renta que subsidiaba al sector industrial y a la economía en general. El salario real recién a fines de 2006 alcanzó el nivel previo a la devaluación (Grigera y Eskenazi, 2013), y ya en 2007 comenzó la puja salarial, es decir, el traslado de los aumentos de los costos salariales a los precios (Graña, 2013). En general, además, se profundizó además el trabajo no registrado (“en negro”), que en 2004 alcanzó el 48%, para luego estancarse alrededor de un 40% (Grigera y Eskenazi, 2013).

Por estas cuestiones, coincidimos con Bonnet y con Piva en la caracterización del ciclo económico “kirchnerista” como una nueva continuidad, e incluso una “consolidación”, del ciclo “menemista” (Bonnet, 2015; Piva, 2015). No porque no haya habido algunas diferencias significativas, sino porque persistieron rasgos estructurales. Fue distinta la intervención estatal, la política cambiaria, la inflación y el desempleo, pero persistió la precarización del trabajo, ahora con baja desocupación pero con una heterogeneidad en su ocupación (que excede pero ilustra en buena medida la dualidad de empleo formal e informal). Asimismo, la posición de la industria, que supuestamente sería una diferenciación esencial entre “el menemismo” y el “kirchnerismo”, no cambió sustancialmente. La posición dominante la siguió ocupando un sector concentrado volcado crecientemente a la exportación y a la baja de los costos salariales. Es cierto que también creció una rama industrial volcada al consumo interno y trabajo-intensiva que mantuvo un protagonismo, en oposición a su decadencia durante la década de los noventa, pero la misma se sostuvo por los bajos costos de producción que suponen un límite al nivel salarial (Bonnet, 2015). Además, estas (y otras) diferencias respondían menos a características estructurales de la economía que a intervenciones de política económica, como la protección comercial y otros como los subsidios a servicios públicos, que muestran un límite en la capacidad fiscal del Estado, y por lo tanto, en definitiva, a su apropiación de renta (Iñigo Carrera, 2011).

Capítulo III

La salida política

La salida “por arriba” y la salida “por abajo”

En este capítulo abordaremos los aspectos políticos del proceso de salida durante el gobierno de Duhalde e indicaremos algunas hipótesis sobre el carácter inconcluso de tal aspecto, el cual completó, o más bien complementó, el gobierno de Néstor Kirchner.

En nuestra perspectiva, en términos económicos la salida de la crisis implicó modificaciones más o menos duraderas en las formas económicas de la acumulación (como el tipo de cambio), a la vez que un fuerte reajuste inicial en la aplicación de dichas modificaciones, que en sí significaron una abrupta redistribución regresiva de la riqueza (como la pesificación asimétrica o la propia megadevaluación). Ambas cuestiones, a su vez, implicaron cambios en las formas políticas e ideológicas; pero distinguimos las nuevas formas políticas propias de las nuevas formas económicas, por un lado, de las formas políticas que reviste el propio proceso de modificación de esas formas económicas. Dicho de manera clara y a modo de ejemplo: una cosa es un nuevo tipo de cambio (“alto”) y la configuración política, económica e ideológica que conlleva (por caso, un “proteccionismo nacional”), y otra cosa es el proceso de devaluación para alcanzar dicha modificación del tipo de cambio. El gobierno de Duhalde atravesó “el trabajo sucio” de dicha modificación, mientras que el de Kirchner representó ya un nuevo tipo de cambio que heredó (el llamado “modelo de dólar alto”).

Claro que ya durante el proceso de cambio a una nueva forma se va generando esa nueva forma, y Duhalde ciertamente pretendía encarnarla (desde el “productivismo”), pero no lo logró. En términos generales, sostenemos que el gobierno de Duhalde logró efectuar la salida económica de la crisis, y para ello, como no podía ser de otra manera, articuló una forma política de dicha transformación. Básicamente, logró un consenso “por arriba”, pero no pudo, y casi no intentó, articular un apoyo “por abajo”. Es decir, contó con el apoyo de la cúpula

empresarial⁵⁴ y política (aunque desde luego no de manera total), y desde allí se sostuvo contra el rechazo mayoritario de la población. El único pero indispensable apoyo “desde abajo”, fue el acompañamiento relativo de una parte significativa del sindicalismo. Nos referimos básicamente a la CGT oficial, y en cierta medida a la CGT “rebelde” de Hugo Moyano (mientras que la CTA fue abiertamente opositora). Evidentemente, dado el marco de una profunda crisis y agravamiento del salario real con la devaluación, en ningún caso se trató de un apoyo celebratorio, sino que la cuestión debe considerarse en términos de apañar y limitar la resistencia del movimiento obrero. En este sentido, vale la comparación de Iñigo Carrea entre los paros generales realizados al gobierno de la Alianza y al de Duhalde⁵⁵. Así y todo, aunque la gravitación que de un gobierno peronista era necesariamente distinta a la de un gobierno no peronista, la resistencia obrera estaba necesariamente limitada dado el altísimo nivel de desempleo, que subió todavía más en el primer semestre de 2002.

Esta salida política “por arriba” le alcanzó al gobierno de Duhalde para efectuar la salida de la crisis *económica*, al menos en su primera y crítica fase, pero no le bastó para alcanzar una salida de la crisis propiamente *política*. Si bien alcanzó cierta normalización institucional, logrando una sucesión de gobierno pacífica y negociada políticamente –aunque adelantada–, al término de su mandato existía aún una profunda crisis política, entendida como una mayoritaria y general falta de legitimidad.

La salida de esta crisis *política* la llevó adelante el gobierno de Kirchner, el cual articuló un consenso “por abajo”, le dio legitimidad a la continuación de esa salida económica, en un momento económico distinto, pasado ya el momento de “ajuste”, de plena recuperación en general y en particular de las posiciones de la clase obrera en su conjunto (con recuperación de los niveles de empleo y salarios), y con una creciente demanda internacional de commodities con precios en alza. Pero sobre todo, aplicó innovaciones ideológicas. Es decir, avanzó en algunos aspectos político-institucionales, jurídicos, culturales y simbólicos (principalmente, la cuestión de las violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar), que brindaron una legitimidad propia (sobre todo en sectores medios urbanos) pero que en su conjunto fueron perfilando otra forma político-ideológica a la salida económica, que en parte se montó sobre la esbozada por el duhaldismo (la retórica productivista), pero en buena medida modificó. Realizaba comparaciones contrastantes con la última dictadura militar y la “década de

⁵⁴ “La presidencia de Eduardo Duhalde consiguió la adhesión de la casi totalidad de los grandes sectores empresarios por su modo de encarar la salida de la crisis económica” (Sidicaro, 2010: 250).

⁵⁵ En 2002 “se convocaron tres huelgas generales, una por la CGT (Moyano) y dos por la CTA; ninguna por la CGT (Daer) que había participado en tres de las seis de 2001” (Iñigo Carrera, 2011: 55).

los 90”, a veces aunadas en un mismo bloque histórico “neoliberal”; e incluía un liderazgo propio y novedoso.⁵⁶

Por otro lado, compartimos la observación de Bonnet sobre que el fenómeno kirchnerista, como caso de gobierno regional contra el período neoliberal, fue impulsado “desde arriba”, por un político tradicional del mismo partido que había impuesto las políticas neoliberales, y no “desde abajo” como el caso boliviano con el liderazgo del sindicalista indigenista, Evo Morales, y su partido (el Movimiento al Socialismo) que se había movilizó contra la aplicación de políticas neoliberales (Bonnet, 2015). Por ello, podemos definirlo con más precisión como *una salida política que construyó legitimidad “por abajo” pero impulsada “desde arriba”*.

Dos puntos de inflexión: la “crisis de abril” y la “masacre de Avellaneda”

En cuanto a la salida política de Duhalde, resaltamos la importancia de dos momentos políticos críticos. El primero fue la llamada “crisis de abril”, en la cual el gobierno logró, tras una “crisis de gobierno” (O’Donnell, 1982) con recambio de parte del gabinete, la adhesión de la mayoría de la dirigencia política a su salida económica, permitiendo su propia continuidad en un momento de intensa inestabilidad y confirmando el rumbo. El segundo fue la llamada “masacre de Avellaneda”, en la cual una brutal represión al movimiento piquetero se cobró dos víctimas fatales. Esta segunda “crisis” el gobierno la atravesó con cierta ambigüedad. Por un lado significó el adelanto de las elecciones y de la sucesión de gobierno, y reforzó el rechazo popular a su gobierno (la posterior mejora económica apenas le granjearía el reconocimiento de una parte de los sectores medios y medios-altos); pero por otro lado, significó, un tanto paradójicamente, una disminución de la protesta social, una mayor integración del movimiento piquetero a la gestión de los planes sociales, y el corrimiento del eje político de su propio gobierno a la transición al siguiente gobierno, permitiendo la conclusión de su mandato en una *relativa paz social*.

Dos momentos críticos, entonces, en los cuales el gobierno enfrentaría y superaría la resistencia de dos grandes bloques sociales: la corporación política, que tras un momento de

⁵⁶ Es importante distinguir el gobierno de Néstor Kirchner, e incluso sus dos primeros años [“primer kirchnerismo”, según la denominación de Dagatti (2013)], con la continuación del ciclo kirchnerista en las dos presidencias posteriores. Hacia 2008 se dio un giro más clásicamente “populista”.

vacilación, en la crisis de abril resuelve volcar todo su apoyo al gobierno para que continúe en su rumbo económico “ortodoxo”; y el de un sector importante de movimientos populares y de izquierda, sobre todo organizaciones de desocupados o “piqueteros”, que tras la protesta del 26 de junio en que se alcanza un punto de máximo de enfrentamiento, pasa a una oposición no menos categórica, pero sí, en general, menos enérgica en sus movilizaciones.

La crisis en su contexto: de la recesión hasta la asunción de Duhalde

La “crisis de representación” política

Hacia 1989, el sistema político democrático parecía establecido tras la última dictadura en una normalización bipartidista. Sin embargo, pocos años después, el radicalismo perdió la fuerza que había ganado con el gobierno de Alfonsín (que además había terminado con la crisis hiperinflacionaria, adelantando la sucesión presidencial), y el peronismo menemista parecía imbatible. Al punto tal que logró reformar la Constitución para habilitar la reelección presidencial, que Menem obtuvo en 1995 con casi la mitad de los votos. La UCR, de forma inédita, quedó desplazada al tercer lugar, por debajo de la nueva fuerza de centro-izquierda, que incluía a peronistas disidentes, el FREPASO.

Ya para las elecciones legislativas de 1997 la UCR y el FREPASO se unieron en la Alianza que dos años después dio al radical Fernando de la Rúa un triunfo claro sobre Duhalde en las elecciones presidenciales de 1999. Esta nueva experiencia política, sin embargo, continuó y hasta profundizó la orientación económica del menemismo. El hartazgo sobre “la política” se hizo sentir fuertemente en las elecciones legislativas de octubre de 2001, en las que el denominado “voto bronca” (los votos en blanco más los anulados) resultó lo más notorio⁵⁷. Tanto fue así que eclipsó el triunfo del peronismo, el cual brindaría un apoyo legislativo clave en la presidencia de Duhalde.

⁵⁷ “El voto bronca se manifestó a lo largo y ancho del país, pero demostró una mayor presencia en la Capital Federal y Santa Fe, donde se impuso a todos los partidos políticos, sin excluir a los candidatos. En la provincia de Buenos Aires los votos blancos, nulos, recurridos e impugnados rondaban anoche el 24 por ciento y se colocaban por debajo del Partido Justicialista y por encima de la UCR” (*Clarín*, 15/10/2001, “Voto bronca: una protesta muy fuerte que triunfó en la Capital y Santa Fe”).

El naufragio de la Alianza

A la recesión económica comenzada en 1998 se le sumó un estrangulamiento fiscal que el nuevo gobierno de la Alianza buscó solventar con mayores ajustes. En una situación social cada vez más tensa, el gobierno se aislaba de los reclamos populares (e incluso de parte de la cúpula empresarial), y el presidente y su círculo íntimo se aislaban del resto de la dirigencia política, incluida buena parte de su alianza gubernamental (ya el 6 de octubre de 2000 había renunciado el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, del FREPASO).

En el año 2001, tras el alejamiento del Ministro de Economía José Luis Machinea, el entrante Ricardo López Murphy propuso un drástico ajuste que incluía el presupuesto educativo y que fue firmemente rechazado por la ciudadanía, alejando al gobierno de su bastión electoral, los sectores medios (Iñigo Carrera, 2011). Tras su gestión de quince días (del 5 al 20 de marzo de 2001), el gobierno acudió, para reemplazarlo, a Domingo Cavallo, quien fuera el ministro que implementó la Convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem. Aun contando con la benevolencia de sectores empresarios, de buena parte de la población en general, y de prerrogativas extraordinarias otorgadas por el Congreso (que le valieron el mote de “Superministro”), sus intentos por conseguir tiempo y préstamos del exterior resultaron insuficientes, cuando no contraproducentes. La fuga de dólares, que ya era importante, se aceleró. Cuando llegó diciembre, se recurrió a una medida de último recurso: limitar por decreto el retiro de dinero de las cuentas bancarias. El denominado “corralito” fue el empujón que faltaba para terminar con el gobierno.

El 14 de diciembre comenzaron a efectuarse saqueos a supermercados y otros locales en distintas ciudades del país (Adamovsky, 2012), ante lo cual el 19 por la noche, el presidente anunció el “estado de sitio” por cadena nacional. Inmediatamente, y de forma espontánea⁵⁸, miles de personas salieron a la calle a protestar en distintos puntos del país, en lo que se denominó popularmente como *cacerolazo*⁵⁹. La movilización continuó a la mañana siguiente, con la consigna mayoritaria “Que se vayan todos”, y el presidente presentó su renuncia.

⁵⁸ Javier Auyero advierte que “el estallido” de diciembre de 2001 no por sorpresivo es inexplicable. Fue el resultado de la acumulación de nuevas formas de protesta que se aceleraron desde 1997 a lo largo de todo el país. Aunque, al mismo tiempo, las organizaciones de desocupados no participaron de manera masiva en los saqueos. (Auyero, 2002)

⁵⁹ Debido a la práctica de golpear cacerolas. También se lo llamó, desde la izquierda, aunque con menos éxito, *Argentinazo*, retomando la tradición de puebladas de fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente, pero remarcando su carácter nacional.

El estallido

El 20 de diciembre de 2001 se vivió una protesta masiva con extensión en todo el país y epicentro en las principales áreas urbanas. En la Ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo y sus alrededores vivieron por momentos una revuelta popular, con manifestantes enfrentados a las fuerzas de seguridad, pero lo que primó fue la represión policial ante saqueos y protestas. Las jornadas concluyeron con un saldo de 39 muertos⁶⁰. Ante la renuncia del Presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, junto con todos sus ministros, el Poder Ejecutivo quedó a cargo del peronista Ramón Puerta, por su posición en la línea sucesoria constitucional.

Existen versiones que imputan a estructuras del partido peronista del Conurbano bonaerense de instigar los saqueos, detrás de los cuales estaría el aval del entonces principal líder del partido y de esa región en particular, el entonces senador nacional Eduardo Duhalde. No podemos constatar ni refutar tales versiones, pero de cualquier forma no consideramos que revistan importancia. Aun aceptando, como hacemos, que hubo connivencias entre jefaturas políticas y policiales para facilitar los saqueos, ello no permite hablar de ningún tipo de complot golpista⁶¹.

El paréntesis de Rodríguez Saá

Tras las elecciones de octubre de 2001, el Partido Justicialista había logrado nombrar en el puesto sucesorio de la presidencia de la Nación a un miembro de su partido. Se trataba del misionero Ramón Puerta que como Presidente del Senado, y con ausencia de Vicepresidente,

⁶⁰ Los saqueos emparentaron las jornadas a las de 1989, lo mismo que la reacción gubernamental de dictar el “estado de sitio”, previsto en el artículo 23 de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, sin embargo, el gobierno adelantó su salida, pero no llegó a producirse su inmediata caída. Por otro lado, con respecto al nivel de violencia, Bonnet señala que en 2001 es superior cuantitativa y cualitativamente. “Según datos recopilados en ambas coyunturas por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, entre el 16/5/89 y el 9/7/89 se habían registrado 678 saqueos, con 3021 detenidos y 198 heridos y 16 muertos civiles y entre el 13/12/01 y el 20/12/01 se registraron 864 saqueos, con 3787 detenidos y 553 heridos y 28 muertos civiles. Estos datos alcanzan para evidenciar que la violencia de las jornadas de fines de 2001 superó a aquellas de mediados de 1989. Pero además deben tenerse en cuenta el número de policías heridos (30 y 172, respectivamente) y el de civiles muertos en enfrentamientos (por lo menos los 8 asesinados en el centro porteño el 20 de diciembre). La represión en masa de 1989, en pocas palabras, fue reemplazada en 2001 por una insurrección de masas” (Bonnet 2011: 23, nota 9).

⁶¹ A propósito del final de la Alianza, dice Cavarozzi: “En ese proceso de aceleración caótica tuvo un peso significativo la postura del peronismo de la provincia de Buenos Aires que fue incrementando el nivel de sus exigencias al gobierno nacional a través de demandas del gobernador Carlos Ruckauf y de los intendentes adictos a Duhalde. Estas demandas resultaban imposibles de satisfacer desde la perspectiva de un gobierno totalmente desbordado por los acontecimientos económicos y políticos. En los días del derrumbe final resultó evidente que varios jefes territoriales peronistas del gran Buenos Aires fomentaron la presencia de activistas y sectores marginales en las movilizaciones que alimentaron el síndrome de caos y desgobierno. Pero más allá de los propósitos del duhaldismo y su contribución al “golpe blando” de diciembre de 2001, no cabe duda de que el intenso malestar de la ciudadanía también tomó como blanco a los políticos peronistas” (Cavarozzi, 2006: 166, nota 115).

asumió la Presidencia de la Nación el 20 de diciembre tras la renuncia de De la Rúa. Puerta, sin embargo, no contaba con el poder ni la voluntad de ejercer semejante gobierno de transición. Todo apuntaba al jefe mayoritario del partido, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a presidente en las elecciones anteriores, Eduardo Duhalde, quien, sin embargo, no aceptó el desafío. Quien asumió entonces, elegido por la Asamblea Legislativa (el conjunto de los diputados y senadores nacionales), fue el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá.

El político presentaba inconfundible voluntad de poder, y armó un gobierno de alta exposición y declaraciones mediáticas. En términos económicos no dio muestras claras, anunció una nueva moneda (el “Argentino”), pero en ningún momento planteó la salida de la Convertibilidad. Su principal medida fue el anuncio del default de la deuda externa, en medio de vítores de legisladores de su partido, como si se trata de una resolución nacionalista y no de la más rusa imposición de hecho que en verdad era.

Menos de una semana tras su asunción, convocó a una reunión de gobernadores para acordar el rumbo a seguir, en la cual obtuvo notorias ausencias por parte de varios de los mandatarios de las provincias. Esta falta de apoyo puede explicarse dado que se vislumbraba su ambición personal de proyectarse en el poder, pero no un rumbo claro de salida de la crisis. Entonces renunció y el Partido Justicialista no dudó en quién debía ser su sucesor, ni tampoco lo hizo el resto de la dirigencia política. Aunque no podemos elucubrar sobre los motivos en el “atraso” de la asunción de Duhalde, sí podemos afirmar que luego del fracaso de Saá se hizo más evidente la necesidad de un líder fuerte y con apoyos amplios. Y de hecho, mientras que Saá fue elegido por 169 votos contra 138 adversos de la Asamblea Legislativa, Duhalde contó con el apoyo de 262 votos positivos, 21 negativos y 18 abstenciones.

El gobierno de Duhalde y sus apoyos

El propio Duhalde da una pista sugestiva sobre su presidencia de transición.

“Nosotros resolvimos enfrentar las cosas a partir de la decisión de fondo, que era cambiar de raíz el modelo. Frente a esa decisión madre debíamos elegir y ejecutar –con la mayor responsabilidad que nos fuera posible– las medidas imprescindibles para enfrentar el derrumbe, aun a sabiendas de que nuestras decisiones no serían bien miradas en las encuestas. Nos habían pedido que asumiéramos los destinos del país para hacer el «trabajo sucio». Si hubiera sido posible en aquellas circunstancias tomar medidas del

agrado de todos, entre aplausos, en vez de estar rodeado de cacerolas e insultos, no me hubieran convocado a mí” (Duhalde, 2007: 268).

Duhalde asumió la presidencia con plena conciencia de la transformación que iba a realizar: terminar con la Convertibilidad y devaluar. El “trabajo sucio” al que se refiere Duhalde es sin dudas la devaluación, con el costo social que ello implicaba. Nosotros entendemos que la otra parte de ese “trabajo sucio” terminó siendo de hecho además la represión de la protesta social.

Ya en su discurso de asunción, Duhalde habló de un cambio en el funcionamiento de la economía nacional. De acuerdo a los parámetros clásicos del peronismo, y tal como ya lo había hecho con anterioridad, habló de la industrialización y el trabajo como los ejes de la nación, y criticó la “financiarización” de la economía. Al tercer día de asunción, le dijo a los empresarios: “se acaba la alianza con el sector financiero y comienza una nueva alianza con el sector de la producción” (Duhalde, 2007: 218).

El apoyo económico-corporativo: el Grupo Productivo

Más allá de los apoyos políticos, su sustento en términos de grupos económicos era el del denominado Grupo Productivo, es decir, el empresariado concentrado que buscaba comandar la salida de la Convertibilidad, liderado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Lo cierto es que Duhalde era el representante político de ese grupo liderado por los grandes sectores empresarios que bregaban por una devaluación que los beneficiaría en términos directos e indirectos. El propio Duhalde lo deja bastante claro:

“La experiencia del Movimiento Productivo tuvo una enorme importancia durante mi presidencia. Sabía que estaba acompañado en mis ideas centrales por un sector importante de la sociedad y estaba decidido a que no iba a calentar el sillón. Yo no me dispuse a administrar una crisis. Yo me planteaba un cambio de modelo en la Argentina” (Duhalde, 2007: 218).

Veamos entonces más de cerca a este agrupamiento. Grupos empresarios buscaban una alternativa hacia fines de los noventa desde el Movimiento Industrial Nacional de la Unión Industrial Argentina (UIA)⁶², y rompiendo el “menemista” Grupo de los 8, armaron el Grupo Productivo (GP) en agosto de 1999, liderado por la UIA, e inicialmente compuesto por las Confederaciones Rurales Argentinas y la Cámara Argentina de la Construcción. Más adelante mostraron su apoyo la Confederación General del Trabajo (CGT), sectores de la Iglesia

⁶² Tras la reapertura de la UIA en 1981, luego de su intervención militar en la dictadura, sobrevinieron dos corrientes que se fueron alternando en la conducción de la entidad: el Movimiento Industrial Argentino, de orientación liberal, y el Movimiento Industrial Nacional, de orientación desarrollista (Beltrán 2014).

Católica, y por último, hacia diciembre de 2001 se unirían los bancos nacionales de ABAPRA y rectores de universidades nacionales.

La UIA y el establishment productivo habían empezado a plantear que para salir de la recesión, iniciada en 1998, era necesaria la industrialización del país con eje en los mercados externos (Schorr y Wainer, 2004). En este sentido se destacó tempranamente José Ignacio de Mendiguren, un dirigente de la UIA quien ya en 1998 planteaba que “llegará un momento en que habrá que discutir la convertibilidad” (*Clarín*, 19/8/98 en Schorr y Wainer, 2004: 34). En el mismo sentido se expresaba el Grupo Techint. En agosto de 1999, dos meses antes de las elecciones presidenciales, su principal dirigente, Roberto Rocca, se pronunció públicamente a favor de la devaluación; y fue también entonces que se anunció la creación del Grupo Productivo (GP).

El GP resumía el diagnóstico de la UIA y realizó un doble giro: valorizar los “sectores productivos” frente a las finanzas y servicios, por un lado, y reivindicar “lo nacional” frente a lo extranjero, por el otro (Beltrán, 2014). En esa matriz, plantearon “dos proyectos económicos distintos de país” (*UIA, Conferencia Industrial, 2000* en Beltrán, 2014: 308). La UIA planteaba así sus intereses como la defensa de un interés general.

El GP mantuvo el diálogo tanto con el PJ como con la Alianza (Schorr y Wainer, 2004). En la campaña de 1999, Duhalde insinuó que la Convertibilidad debía reverse, pero tras las claras muestras de temor y baja en las encuestas, reforzó el discurso continuista⁶³. De hecho, el ministro aliancista, José Luis Machinea, era un hombre ligado a la UIA, pero mantuvo a rajatabla la Convertibilidad.

Hacia fines del año 2000, Duhalde inauguró el Movimiento Productivo Argentino, en alianza con el GP. Esta alianza se vio confirmada luego, cuando Duhalde nombró a de Mendiguren al frente del flamante Ministerio de Industria que creara al asumir la presidencia. De Mendiguren había al frente de la UIA en mayo de 2001, profundizando las críticas al calor de la situación económica. Frente a las propuestas dolarizadoras, este grupo logró un acercamiento a la CGT, con la cual sacaron un documento conjunto el 9 de diciembre (en el cual aún no planteaban abiertamente la devaluación). El 21 de diciembre de 2001, tras la asunción de Rodríguez Saá, el GP presentó en una conferencia de prensa un documento para pesificar la economía, flotar el tipo de cambio y declarar la moratoria de la deuda por un año. Saá declaró el default de la deuda, pero sería Duhalde quien llevaría adelante el resto del programa. E incluso, en su

⁶³ En el lanzamiento de su campaña, el 25 de julio de 1998, Duhalde afirmó “el modelo está agotado”. Tres semanas después afirmaba que “la Convertibilidad tendrá vida mucho tiempo”.

discurso de asunción presidencial del 2 de enero, pronunció una frase llamativa: “La comunidad productiva es la que debe gobernar el país”.

El apoyo político-corporativo

¿Cuál fue el sostén del gobierno en medio de semejante crisis? Básicamente, se trató de un acuerdo político, o un “pacto corporativo”, según Castellani y Pucciarelli:

“En ese contexto de disolución de casi todas las formas y criterios de legitimación, el elenco político e institucional todavía en funciones (uno de los grupos más profundamente cuestionados por la rebelión social) se abroqueló en la institución parlamentaria y, sin modificar las reglas del funcionamiento democrático, intentó con éxito conjurar la crisis mediante la articulación de *un pacto corporativo* que, ante la falta de un proyecto contrahegemónico consistente, actuó como gestor y soporte de un renovado gobierno provisional, capaz de reconstruir las bases fundamentales y los modos de funcionamiento de la estructura social, política e institucional preexistente” (Castellani y Pucciarelli, 2014: 16-17; el destacado es nuestro).

Pero si el gobierno de Duhalde logró esta reconstrucción político-institucional, fue porque al mismo tiempo garantizó la reestructuración de la acumulación de capital sobre las mismas bases por medio de formas distintas. Eso fue lo que desarrollamos en el capítulo anterior. Lo que falta precisar en este capítulo es cómo se alcanzó ese acuerdo político. Para ello recurrimos a Cavarozzi, quien menciona “una mesa de tres patas” (retomando la figura del historiador chileno Claudio Véliz). Se trata de “la liga de gobernadores” peronistas, el Congreso Nacional y un acuerdo con el alfonsinismo de la UCR (Cavarozzi, 2006). A ella podemos agregar la Mesa de Diálogo Argentino, donde el Episcopado de la Iglesia Católica argentina jugó el rol principal junto con directivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pero más que una “cuarta pata de la mesa”, se trató apenas de un “mantel”; es decir, no significaba un sostén político, sino apenas un apoyo simbólico. Se trató de un ámbito de discusión institucional pero casi sin ningún acuerdo. Su mayor logro fue el de articular algunas condiciones del Plan Jefes y Jefas de Hogar, pero principalmente consistió en un conjunto de reuniones donde cada sector presentaba sus demandas.⁶⁴

⁶⁴ Duhalde confiere una queja del entonces titular del PNUD, Carmelo Angulo Barturén: “Tuvimos quinientas entrevistas con distintos sectores y no conseguimos ponernos de acuerdo en nada, porque cada uno plantea lo suyo” (Duhalde 2007: 163).

Quizás el más decisivo de los tres fue el apoyo de los gobernadores peronistas, pues a través de ellos, en parte, se lograba el apoyo de los legisladores nacionales de sus provincias. Ello no significa que el apoyo fuera total ni incondicional. Ciertamente no fue total, pues dos gobernadores resultaron férreos críticos. Nos referimos al santacruceño Néstor Kirchner y a la puntana María Alicia Lemme, quien asumiera la primera magistratura de San Luis al asumir la presidencia Adolfo Rodríguez Saá. Y tampoco incondicional, pues hubo desacuerdos, pero por ello mismo motivo resultó clave ya que en esos momentos el gobierno tambaleó y pudo recomponerse precisamente al lograr su apoyo. Esto es lo que ocurrió especialmente con “la crisis de abril”.

Para contar con semejante apoyo, particularmente el peronista, resultó decisivo que el presidente insistiera en que no se presentaría en las siguientes elecciones, pero sobre todo, ya que dicha promesa en sí no era del todo creíble, que resultara convincente en su determinación de aplicar las medidas necesarias afrontando los costos que hicieran falta.

Resultó también clave el apoyo del radicalismo con el liderazgo de Raúl Alfonsín, y en general también el del FREPASO. Tras la debacle de la Alianza, el centenario partido se recostó en la línea alfonsinista que ya durante los últimos meses del gobierno de De la Rúa había comenzado a tener mayor visibilidad. Su aliado de centro-izquierda, por su parte, mostró algunos reparos pero en general también acompañó al gobierno nacional.

El Congreso constituyó una fuente de apoyo imprescindible. En principio en cuanto fuente de su legitimidad de origen, al designarlo presidente [el propio Duhalde llamó al suyo un “gobierno parlamentario” (Duhalde, 2007: 145)]; también en su primera semana de gobierno se aprobó, tras un maratónico debate pero sin modificaciones, la denominada Ley de Emergencia Económica⁶⁵, que básicamente ponía fin a la Convertibilidad y delegaba facultades excepcionales en el Poder Ejecutivo. Luego, si bien le mostró duras resistencias frente a leyes que el Ejecutivo deseaba aprobar por presión del FMI (como modificaciones en la Ley de Quiebras y la de Subversión Económica), casi siempre terminaron por aceptar el pedido del Ejecutivo Nacional, tras el acuerdo con los gobernadores.

Para componer su gabinete, Duhalde no logró convencer a ningún gobernador, con la excepción de Carlos Ruckauf, quien dejó la provincia de Buenos Aires en manos de su vicegobernador, Felipe Solá, para asumir la (mucho menos visible) Cancillería. Lo intentó con el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, el de Santa Fe, Carlos Reutemann y el

⁶⁵ Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561), sancionada el 6 de enero. Sobre sus alcances e implicancias, ver el capítulo 2.

propio Kirchner, pero los tres tenían expectativas de ser candidatos presidenciales, por lo que rehusaron el desgaste de una gestión de gobierno en plena crisis. Contó sí con dos radicales (Jorge Vanosi y Horacio Jaunarena), y mayoría de bonaerenses cercanos al presidente, con la habitual excepción del Ministro del Interior, y la más sorpresiva del Jefe de Gabinete, el senador chaqueño Jorge Capitanich, de entonces 37 años. El representante de la UIA, José de Mendiguren, ocupó el flamante Ministerio de Industria.

La oposición a Duhalde: competidores políticos y resistencia social

El hecho de que Duhalde haya logrado articular un apoyo político a su gestión, aunque ciertamente tambaleante, no debe ocultar que su presidencia fue básicamente muy impopular, y con fuertes críticos desde el arco político. En síntesis, si bien articuló un consenso “por arriba” (un consenso “suficiente”, ni total, ni entusiasta), no alcanzó apoyos significativos “por abajo”, más bien todo lo contrario. En términos generales operó una fuerte impugnación a lo que entonces se llamaba “la clase política”, o bien a “la política” o “los políticos” en general. Surgieron entonces unos liderazgos personalistas desprendidos de los partidos y fuertemente mediáticos, además de otros liderazgos igualmente personalistas que lo criticaban dentro del Partido Justicialista.

La oposición política

Desde la izquierda, el diputado nacional Luis Zamora, que venía con ímpetu tras unas buenas elecciones en octubre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires (su partido creado ese mismo año, Autodeterminación y Libertad, obtuvo el 10,13% de los votos), sintonizaba bien con el espíritu autonomista de las asambleas porteñas, pero no dejaba de ser una expresión minoritaria del electorado nacional.

Los ex radicales Elisa Carrió, por un lado, y Ricardo López Murphy, por otro, contaban con mayor proyección. Tras haber abandonado al radicalismo y su apoyo al gobierno aliancista durante el 2001, la diputada nacional por el Chaco lideraba un espacio parlamentario de centro izquierda que devino flamante partido durante el 2002, el ARI⁶⁶, fuertemente crítico del

⁶⁶ El bloque se llamó *Argentinos por una República de Iguales*, y luego, manteniendo las siglas, el partido se denominó *Afirmación para una República Igualitaria*.

establishment económico y sobre todo político. Ricardo López Murphy, tras su fallido paso por el Ministerio de Economía en marzo de 2001, abandonó la UCR a comienzos de 2002 para conformar un partido de centro-derecha liberal llamado Recrear.

Estos dos últimos, junto con los peronistas Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, terminarían siendo los cinco principales candidatos presidenciales en 2003. Hacia 2002, todos ellos coincidían en criticar a Duhalde. Es de notar que Kirchner, quien terminaría siendo su candidato, se mantuvo básicamente como un opositor al gobierno de Duhalde (al menos hasta julio de 2002), y en ocasiones en términos muy duros. Tanto él como gobernador, como su esposa la entonces senadora por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, se mostraron críticos de las medidas del presidente⁶⁷. Saá había logrado sembrar algunas esperanzas “populistas” con su fugaz pero un tanto espectacular paso por la primera magistratura (tuvo el apoyo del líder de la CGT “rebelde”, Hugo Moyano), sumado a su propio coto político desde su gestión provincial, pero que se mostró insuficiente. El mayor adversario parecía ser, y probó serlo, el propio Menem⁶⁸, el principal “enemigo político” de Duhalde.

La oposición judicial

Otro actor que jugó un papel destacado y en gran medida opositor fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que complicó y alteró la estrategia del gobierno con respecto al “corralón”. Como ya adelantamos en el capítulo anterior, aunque las primeras medidas de la Corte fueron respaldando la ley de Emergencia Económica y las restricciones bancarias (el 28 de diciembre y el 10 de enero dictaminaron que los ahorristas que habían conseguido un amparo para recuperar sus depósitos los devolvieran a los bancos), el 1 de febrero, tras un “cacerolazo” del 26 de enero contra la propia Corte, cambiaron su parecer y declararon la inconstitucionalidad del corralito en el “caso Smith”, un ahorrista argentino, con 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Eduardo Amadeo, funcionario cercano a Duhalde, cuenta que desde el gobierno mantuvieron un canal de comunicación con la CSJN, conscientes de que dependían de sus fallos favorables para la implementación de la pesificación, pero que resultó insuficiente (Amadeo, 2003). El

⁶⁷ Profundizaremos *supra*, ver apartado “La transición negociada: el acuerdo con Néstor Kirchner”.

⁶⁸ Recordemos que los resultados electorales finalmente fueron: Menem en primer lugar con un 24,45%, seguido por Kirchner con un 22,24%, López Murphy, 16,37%, Saá, 14,11%, Carrió, 14,05%, y más lejos quedaron la UCR con un 2,34% y luego partidos de izquierda. Pero a la vista de una segura derrota ante el ballotage, Menem desistió de la competencia, resultando electo Néstor Kirchner.

propio Duhalde no escatimó sutilezas para referirse a su rol: “Sabía que la Corte Suprema, que era la de la mayoría automática armada por Menem, iba a hacer todo lo posible para que naufragara el gobierno, como de hecho lo intentó abiertamente” (Duhalde, 2007: 150). La estrategia del gobierno consistió entonces en presionar a sus miembros con el juicio político, que sin embargo se “empantanó” en el Congreso. Finalmente, sobre todo desde la superación de “la crisis de abril”, dieron marcha atrás y lograron cierto acuerdo tácito. Por otro lado, Cobe señala que la ofensiva de la Corte acercó posiciones entre el gobierno y los bancos, quienes veían en la CSJN a un actor sobre el cual no podía influir y que hacía peligrar sus posiciones económicas (Cobe, 2009).

La oposición social: una potencia desarticulada

Las asambleas barriales, si bien constituyeron una resonante novedad, nunca se erigieron en una posibilidad de política nacional, ni en verdad municipal aun en el distrito en que adquirieron mayor volumen, la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al sindicalismo, se encontraba debilitado, lo cual era lógico en un contexto de alta desocupación y gran pauperización laboral, pero además estaba dividido en tres grandes sectores: el de la GGT oficial, liderada por Rodolfo Daer, más cercana al gobierno, la CGT “rebelde” o “disidente”, liderada por Hugo Moyano, moderadamente crítica del gobierno, y la CTA, con la conducción de Víctor De Gennaro, abiertamente opositora. Este último sector, el más izquierdista, y vinculado mayormente al empleo público, era el que además articuló mayor relación con los movimientos de trabajadores desocupados, o “piqueteros”, el movimiento que se constituyó en el actor que más presionó sobre el gobierno, por lo cual constituye el centro de este apartado.

La CTA había articulado un significativo polo opositor, baste recordar que hacia fines de 2000 había lanzado el Movimiento de Consulta Popular, luego llamado Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), que en los días previos a las jornadas del 19 y 20 de diciembre alcanzaría tres millones de firmas⁶⁹. Pero ese momento terminó expresando el máximo de su influencia y no el paso a un mayor desarrollo. No tuvo un papel destacado en las jornadas de diciembre y tampoco logró influir de manera particular sobre el gobierno de Duhalde. Aun aceptando que haya existido en la lucha social creciente de 2001 “el embrión de un polo político opositor y de un proyecto contrahegemónico” (Pucciarelli, 2014: 203), no se terminó

⁶⁹ El Frente Nacional contra la Pobreza nació impulsado por la CTA con el Movimiento por la Consulta Popular en diciembre de 2000, se denominó FRENAPO en julio de 2001 y alcanzó 3.100.000 de firmas entre el 14 y el 17 de diciembre de ese año.

de desplegar más que un movimiento de resistencia. No había bases sociales suficientes para “un proyecto contrahegemónico” (ni políticas, ni mucho menos económicas), e incluso el propio movimiento piquetero se encontraba dividido en al menos dos grandes sectores⁷⁰.

El movimiento piquetero

En síntesis, y siguiendo la periodización de Marcelo Gómez, la movilización del movimiento de desocupados, tras su surgimiento en 1997, tiene una etapa de *consolidación y proliferación* entre 1998 y junio de 2002, luego una de *institucionalización relativa* en 2002-2003, y finalmente otra de *integración política* en 2004-2006 (Gómez, 2007).

El denominado “movimiento piquetero” comienza en el interior del país, con los cortes de ruta en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén y en Tartagal y General Mosconi en Salta, debido a la privatización de YPF (como tal recién concluido en 1999, hasta entonces se trató de la venta de un porcentaje de las acciones). Eran expresiones de trabajadores desocupados con el apoyo de sus familias y de la comunidad toda que se vio afectada en su proceso de reproducción material y simbólico. Hacia fines de la década, y con un fuerte crecimiento durante el gobierno de la Alianza, crecen las organizaciones de desocupados en el Conurbano bonaerense.

Los ajustes de la Alianza alcanzaron los planes sociales, tras lo cual se radicalizaron los movimientos. En el año 2000, grupos de desocupados de Florencia Varela y Moreno marcharon junto a los mismos intendentes solicitando al Ministerio de Trabajo Nacional el mantenimiento de los planes. Entre octubre y noviembre se dan los primeros cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, con el apoyo de la CGT disidente, nacionalizando el conflicto. En mayo de 2001, los desocupados de La Matanza (de FVT y CCC) vuelven a cortar la ruta 3 por 17 días. En julio en La Matanza se da un Congreso de las organizaciones de desocupados con notable concurrencia (con dos mil representantes de movimientos piqueteros de todo el país) y en el cual coordinan un plan de lucha nacional, y cuyo principal vocero, Luis D’Elía plantea “la

⁷⁰ Existió una división simplificada entre los piqueteros “blandos” y los “duros”, y un tercer grupo denominado “autonomista” (más cercano a los “duros”). Sus diferencias no eran tanto de “táctica” o de “método” sino esencialmente políticas. Los primeros incluyen a la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía (quien integraba la CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete, y ligada al Partido Comunista Revolucionario. Los segundos incluyen al Polo Obrero (ligado al Partido Obrero) y al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) con el liderazgo de Raúl Castells, y muchos otros (como el Movimiento Teresa Rodríguez y Barrios de Pie), mientras que en el tercer grupo se incluyen varios de los denominados Movimientos de Trabajadores Desocupados (en el cual se destacó el MTD Solano), y que formaron en 2002 la Coordinadora Aníbal Verón.

resistencia civil contra el ajuste”. Pero allí también se vislumbró la dificultad de unificar a las distintas corrientes sindicales con el movimiento piquetero y más aún de constituir alianzas políticas partidarias.

“La gente aplaudió cada una de las críticas a los partidos y abucheó el anuncio de que un grupo de diputados nacionales, encabezado por Mario Cafiero (PJ), adhería a la asamblea y preparaba un proyecto de ley para derogar el ajuste. Hugo Moyano llevó la peor parte. Lo silbaron cuando advirtieron su presencia y le impidieron desarrollar su discurso a favor del plan de lucha” (Pucciarelli, 2014: 206).

En agosto de 2001 se cortaron 145 rutas de manera parcial. Sin embargo, a pesar del crescendo de la intensidad y organización de la protesta social conforme se agudiza la crisis, las organizaciones piqueteras no participarían de manera orgánica en las jornadas del 19 y 20 de diciembre.

La asunción de Duhalde generó cierta expectativa, y tras ser recibidos por el presidente, que prometió transformar el millón de puestos de trabajo que había anunciado Rodríguez Saá en planes sociales, se integraron a la Mesa de Diálogo. Pero los primeros cuatro meses de gobierno fueron de claro retroceso, e incluso se redujeron los planes existentes. Recién en abril se anunciaron los nuevos planes que comenzaron a cobrarse en la segunda mitad de mayo, y se fueron ampliando en lo sucesivo. En la segunda mitad de 2002, con la masividad de los planes y los aumentos de salario, se redujeron significativamente los niveles de conflictividad, aunque antes, el 26 de junio, se produjo la brutal represión en el Puente Pueyrredón (que veremos más adelante).

La crisis de abril: el consenso “por arriba”

Los primeros meses del mandato de Duhalde estuvieron atravesados por la tensión de dar un cauce a la política monetaria que evitara la hiperinflación, reactivar la economía, conseguir fondos para brindar alivio a la extrema pobreza, contener la protesta social para evitar un desborde social pero sin sumar más muertos a los causados en diciembre, alcanzar alguna normalización del sistema financiero, y negociar las condiciones para un acuerdo con el FMI.

El mencionado fallo de la CSJN del 1 de febrero complicó el plan económico del gobierno a la vez que a los bancos, lo cual implicó un acercamiento de hecho entre ambos. Desde el propio

Duhalde se notó un giro discursivo en su confrontación con el sector financiero hacia los miembros del Supremo Tribunal. Dicho fallo puede entenderse como apelación un tanto demagógica en el contexto de fuerte impugnación popular hacia el Tribunal⁷¹, y como una presión hacia el gobierno, el cual sin embargo dobló la apuesta y comenzó a propiciar el juicio político a sus integrantes.

En marzo la situación general no sólo no mejoraba, sino que el proceso de salida de la crisis empeoraba casi todos los indicadores. En abril la situación llegó a un máximo nivel de tensión. La inflación aumentaba (sobre todo aumento de combustibles y alimentos) con lo cual el nivel de vida caía, y con él crecían las presiones de los sindicatos; el acuerdo con el FMI no avanzaba; los planes sociales y las retenciones apenas habían sido anunciadas a comienzos de abril, y éstas últimas fueron muy resistida por el sector agropecuario; seguía sin resolverse el “corralito” y órdenes judiciales comenzaron a obligar a los bancos a devolver depósitos, forzando al Banco Central a sostenerlos para evitar quiebras, generando así un “goteo” en las reservas; por último, si bien la industria tenía incentivos para crecer, todavía era muy pronto para que mostrara resultados.

Como mencionamos en el capítulo anterior, el equipo económico de Remes Lenicov impulsó entonces un canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo en dólares por bonos públicos (Plan Bonex II) y un proyecto de decreto que pusiera fin al drenaje de las reservas por medio de fallos judiciales. El ministro también instó a que el Poder Legislativo modificara la ley de Quiebras y derogara la de Subversión Económica, lo cual era demandado por los bancos y el FMI. Pero el Congreso no modificó las leyes y el Senado rechazó en abril el proyecto del Plan Bonex II, que ya contaba con oposición pública de los políticos y habilitaría una nueva impugnación de la Corte. En ese contexto de falta de apoyo, Duhalde tampoco firmó el decreto para frenar el goteo, y el 23 de abril Remes renunció a su cargo (junto con los ministros de Jefatura de Gabinete y Producción).

Los apoyos de la coalición de facto que sostenía al gobierno, los gobernadores y legisladores peronistas y radicales, no querían el plan que respondía a los dictados del FMI, pero inmediatamente después demostraron que tampoco estaban dispuestos a encarar una alternativa que implicara romper con el FMI. Ésta propuesta era acercada al presidente por economistas heterodoxos del peronismo (Daniel Carbonetto y Carlos Leyba) y sostenida desde el ámbito académico por el grupo denominado Plan Fénix.

⁷¹ Días antes del fallo Smith, hubo un “escrache” a miembros de la Corte.

El mismo martes 23 comenzó la negociación con los gobernadores que concluiría con la firma de los “14 puntos” del día siguiente. Lo crítico de la situación permitió que se brindase un apoyo indispensable para retomar el camino. Fue entonces, ante la posibilidad cierta de un naufragio del gobierno, y el vacío de poder que eso implicaba, que el Congreso cambió su posición y aprobó la ley que frenaría la sangría del corralito. Se planteó anclar momentáneamente el dólar que obtuvo, si no el apoyo, al menos la tolerancia del FMI y el viernes 26 el Congreso aprobó la denominada “ley tapón” (ley 25.587), mientras Roberto Lavagna llegaba de Bruselas, donde ocupaba un cargo diplomático, para aceptar el vacante Ministerio de Economía.

El acuerdo de los “14 puntos” fue firmado por todos los gobernadores menos los de San Luis, Santa Cruz y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (el frepasista Aníbal Ibarra). Con el compromiso de mantener la relación con el FMI, se pautaban ajustes fiscales, la modificación de la ley de Quiebras, la derogación de la ley de Subversión Económica, y la implementación de los planes sociales. El acuerdo fue criticado por la CGT “disidente” de Moyano, se convocó a una gran marcha piquetera, y Carrió pidió elecciones. Sin embargo, aunque aumentó el rechazo de los sectores opositores, fortaleció el rumbo del gobierno consiguiendo el apoyo mayoritario del poder político, que hasta entonces se mostraba ambivalente. Un análisis periodístico contemporáneo muestra la situación política interna al acuerdo:

La cuestión estaba clara. “Un gobierno de transición no puede tomar decisiones irremediables que cambien el rumbo del país”, advertía ayer a *Página/12* uno de los colaboradores de José Manuel de la Sota. Se refería a los rumores de “cambio de rumbo” que circularon desde el martes y que fueron alentados desde un sector del Gobierno. En ese sentido, la propuesta de [el gobernador de Salta, Juan Carlos] Romero –un frecuente visitante de los Estados Unidos, donde tiene buenos contactos– era un claro intento por desactivar cualquier giro proteccionista. De la Sota y Reutemann se sumaron a esa movida, pero no fue necesaria demasiada presión: un gobernador confirmó a este diario que Duhalde nunca pensó en alejarse de la línea ortodoxa. (*Página/12*, 25/04/02)⁷²

⁷² Martín Pique “Los gobernadores, firmes junto al FMI, apoyan, pero no se juegan” en *Página/12*, 25/04/02.

La “Masacre de Avellaneda” y el comienzo de la transición

La “Masacre de Avellaneda” del 26 de junio: los hechos en contexto

Si, por un lado, la salida de “la crisis de abril” le dio el apoyo político que Duhalde necesitaba para superar ese momento, por otro lado, la reacción popular y de los movimientos sociales de desocupados en particular se acrecentó. Hacia junio, el clima era de gran tensión. Si bien comenzaba a vislumbrarse la salida económica y se habían lanzado los nuevos planes sociales, la realidad de la mayoría de la población, y sobre todo de los sectores populares, estaba lejos de ofrecer una mejoría. Se evidenció entonces que el gobierno decidió endurecer su postura frente al movimiento piquetero, e intentar aislarlo⁷³. Durante la primera semana de junio, el gobierno contemplaba la fusión de la Secretaría de Seguridad Interior con el Ministerio de Defensa, y el 18 de junio decidió poner un operativo con mayor presencia policial en las calles. Luego de una movilización del 20 de junio, el Jefe de Gabinete Alfredo Atanasof aseguró que “existe la decisión de utilizar todos los mecanismos para hacer cumplir la ley y evitar que la capital quede aislada” (*Página/12*, 25/06/2002).

Para el 26 de junio se llamó a una movilización masiva y nacional, con una agenda de reclamos amplia: regularización de planes sociales para desocupados, implementación de tarifas populares en los servicios, planes para la construcción de viviendas, entrega de alimentos a comedores desocupados, libertad de diversos militantes sociales y políticos detenidos, y manifestación en contra de la política económica emprendida por el Gobierno (Artese, 2013). El gobierno planteó que si se cortaban al mismo tiempo todos los accesos a la capital, se consideraría “una acción bélica” (*Clarín* 19/06/2002). También hubo trascendidos que anticipaban la previsión de la represión (Bonasso, Miguel “La masacre anunciada”, *Página/12*, 27/06/2002).

Participaron del corte del 26 de junio el Movimiento Teresa Rodríguez, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Territorial de Liberación, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Trabajadores Combativos. No participaron, en desacuerdo con la medida, la Federación de Tierra y Vivienda, de Luis D’ Elía

⁷³ “En junio se realiza un corte de la ruta 3 por parte de los grupos de desocupados y al mismo tiempo por la UOCRA. El gobierno acepta negociar con el sindicato pero no con los piqueteros. Los medios de comunicación y el gobierno plantean la diferencia entre aquellos que supuestamente «quieren trabajar» y los que “«siempre reclaman». (...) Se desarrolla un profundo aislamiento político del corte de los 282 desocupados a partir de la negociación con la UOCRA, que levanta el corte el día 5, y cuyos dirigentes se pliegan a la campaña del gobierno” (Pérez Álvarez, 2010: 281-282).

y la Corriente Clasista y Combativa, que mantenían diálogo con el gobierno de Eduardo Duhalde.

Para el operativo de seguridad se desplegaron la policía bonaerense, la policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Además de los usuales bastones, escudos y pistolas lanza-gases, usaron pistolas y escopetas con balas de plomo. El saldo de la jornada fue de casi 200 heridos, 33 con heridas de bala de plomo, 170 detenidos y dos muertos, los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de zona sur, Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 21 (Artese, 2013). En un primer momento, desde el gobierno hablaron de una excepcional violencia por parte de grupos de manifestantes, responsabilizando a grupos piqueteros de los incidentes. Luego de conocidos los hechos, el propio Duhalde habló de una “cacería atroz” por parte de las fuerzas de seguridad⁷⁴.

El 26 de junio como bisagra: de la protesta a la institucionalización

La feroz represión, y particularmente el asesinato de los dos jóvenes militantes, marcó un punto de inflexión en el gobierno y en el movimiento piquetero, y para el investigador Gonzalo Pérez Álvarez, incluso en la historia del país y de la organización de las clases obreras, marcando el inicio de un descenso de las movilizaciones a nivel nacional y la incidencia política de los movimientos (Pérez Álvarez, 2010). Según su investigación, esto se debió a un cambio en la estrategia del gobierno, que pasó de la represión a la negociación. El punto de inflexión habría sido la Masacre de Avellaneda y el repudio social a la represión, el llamado a elecciones, la masificación del Plan Jefes y Jefas de Hogar, la baja del desempleo, las mejoras salariales y presupuestales y otros hechos que restaron el apoyo de una parte de la sociedad a los grupos más contestatarios (tales como el acostumbramiento a los cortes de ruta, denuncias de cobro de peajes por atravesar piquetes, de coacción a colectiveros para llevar gratis a los manifestantes a los puntos de reunión, contracortes de camioneros afectados, protestas de comerciantes y denuncias de desabastecimiento) (Pérez Álvarez, 2010).

Coincidimos con esta lectura, pero también habría que explicar la propia intensificación de la represión del 26 de junio. Mientras que en un solo día, el 20 de diciembre de 2001, se produjeron más de 30 fallecimientos, el gobierno de Duhalde casi llegó a los seis meses de

⁷⁴ En enero de 2006, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua por los asesinatos de los militantes, y otros policías fueron condenados por encubrimiento. No hubo culpables políticos.

gobierno sin ningún muerto⁷⁵. Evidentemente, la jornada del 20 de diciembre fue excepcional. Las fuerzas de seguridad no estaban preparadas, y actuaron de manera desarticulada, sin un seguimiento de control, en medio de una verdadera revuelta con una multiplicidad de focos en todo el país. Tras semejante antecedente, no resulta difícil entender que Duhalde haya procurado que la contención, y en todo caso represión, de la protesta no se descontrolase. También es cierto que las propias movilizaciones piqueteras cuentan con una organización y responsabilidad propias que las distingue del estallido “anárquico” del 20 de diciembre.

Una lectura plantea la represión del 26 de junio como un intento de golpe de fracciones del capital asociadas a los intereses del gobierno norteamericano y sus socios locales (Merino, 2007)⁷⁶. Si bien no podemos precisar por qué la represión ocurrió entonces, ciertamente los hechos no fueron una mera casualidad, sino el resultado de un *crescendo* en las protestas sociales y de un momento en que el gobierno (al menos una parte que resultó decisiva) tomó la decisión de reprimir con más fuerza. Momento, además, en que comienzan a sentirse signos de recuperación económica y a masificarse los planes sociales, lo cual habilita pensar que el gobierno, sintiéndose más fortalecido, intentó aislar a los sectores piqueteros más opositores, caracterizándolos de “violentos”, de aquellos más propensos a negociar (recuérdese que este sector no participó de la marcha).

Lo concreto fue que las masivas reacciones de condena a la masacre de Avellaneda hirieron al gobierno y descartaron la profundización represiva, y por el contrario se masificaron planes sociales. De esta manera, tras los hechos el movimiento piquetero no se expandió tanto como que se institucionalizó, y ciertamente no se unificó, sino que más bien se acrecentó su división. En los términos de una reconocida estudiosa del fenómeno:

⁷⁵ No, al menos, imputado al gobierno de manera oficial. “El 6 de febrero en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, el conductor de un Ford Falcon sin patente quiso superar un piquete en la ruta 205 y mató de un tiro a Javier Barrionuevo (31 años), integrante del MTD de esa localidad. El conductor era Jorge Bogado, ex policía y colaborador del intendente (en ese entonces duhaldista) Alejandro Granados, del vecino partido de Ezeiza” (Artese, 2013: 134, nota 80).

⁷⁶ “La jugada que terminará con la masacre del 26 de junio encierra dos temas cruciales que son determinantes para que el hecho suceda: el rechazo de la banca extranjera al plan de salida del corralito presentado por Lavagna, expresando principalmente los intereses de la Banca pública y privada nacional nucleada en ABAPRA, y el rechazo por parte del núcleo Mercosur del gobierno a disciplinarse al esquema de seguridad del proyecto estratégico americano-yanky políticamente articulado por la derecha ultraconservadora republicana estadounidense.

”Estos dos hechos afectan directamente los intereses de la línea americana-yanky (como a otros jugadores), que tenía una pata dentro del gobierno con Ruckauf, Amadeo, Jaunarena, etc., y gran influencia en algunos gobernadores. Estos intereses, que venían jugando a través del FMI y del departamento de Estado para imponer su proyecto estratégico ALCA, deciden jugar con todo al golpe y empiezan a operar en tal sentido, sumando a los intereses económicos-sociales que denominamos línea angloamericana (el trío dinámico en la Argentina de esos tiempos personificado por el Citigroup, el HSBC y el Bank Boston)” (Merino, 2007: 73-74).

“En el 2002, el gobierno de Duhalde aparecía como un actor débil frente al movimiento piquetero, especialmente después de la represión en el Puente Pueyrredón. Esta debilidad trajo grandes ventajas para las organizaciones piqueteras, que obtuvieron la satisfacción de muchos de sus reclamos. Fue un año de mucha centralidad del movimiento piquetero, pero al mismo tiempo colaboró con la fragmentación del espacio, ya que cada organización lograba satisfacer sus demandas por separado. No había muchas instancias de coordinación porque no había una necesidad. Por eso, no es solo la estrategia del gobierno, que buscó dividir a los movimientos sociales sino también una coyuntura que colaboró en su fragmentación” (M. Svampa en Natanson, 2004: 111-112).

El rol de los planes sociales

La aplicación masiva de los planes sociales resultó clave para sobrellevar la situación social y la política. Fue un alivio concreto (aunque magro) para sus asignatarios y descomprimió la tensión política. Sin embargo, si bien la idea existía desde un principio en el gobierno, el anuncio recién se hizo a comienzo de abril, junto con las retenciones (particularmente a exportaciones de materias primas agrarias). Esa simultaneidad fue intencional, y de hecho Duhalde presentó la última como medio de sostener a la primera.

En un comienzo, durante el menemismo, los planes fueron descentralizados en los municipios quienes monopolizaron la organización de las contraprestaciones. Con el gobierno de la Alianza, se habilitó a que organizaciones de la sociedad civil pudieran gestionarlos directamente, y a partir del año 2000, la distribución de planes en el Gran Buenos Aires “pasó a estar determinada por el nivel de movilización social de la organizaciones” (Delamata, 2004: 24, nota 10).

Con los Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados instrumentados por el gobierno de Duhalde, los municipios volvieron a estar en el centro de la política asistencial, dado que los planes se implementaban a través de ellos⁷⁷. De los dos millones de planes que alcanzó el gobierno de Duhalde, el 90% fue administrado por los municipios, y sólo el 10% restante por las organizaciones de desocupados (Delamata, 2004). Además, según otro investigador del tema, la modalidad de los planes alteró la estructuración de la acción colectiva ya que:

⁷⁷ “No obstante, deben contar con la participación del Consejo Consultivo Municipal, un consejo multisectorial designado por cada municipio en el cual se encuentran representadas las organizaciones de trabajadores desocupados. El Consejo se replica a nivel nacional y cuenta con representantes de dos de las organizaciones, FTV y CCC, ONGs, representantes de Iglesias, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos, las dos CGT (oficialista y disidente) y sectores empresarios” (Delamata, 2004: 24, nota 11).

“si bien no anula la figura del proyecto y de la contraprestación, consagra la accesibilidad por persona y no por proyecto ni por organización. Con ello elimina o modifica todos los elementos, incluida la caducidad temporal del beneficio (tres a seis meses), que habían brindado oportunidades de estructuración de los movimientos y que habían marcado el sendero por el que transitaba la acción colectiva” (Gómez, 2007: 128).

La estrategia del gobierno, entonces, consistía en “recuperar terreno a las maltrechas redes de distribución tradicionales, generalmente bajo control de los poderes políticos municipales y de las redes clientelares de punteros barriales” (Gómez, 2007: 128). Si bien no amenazaron de manera significativa a las organizaciones existentes, los planes sociales sí inhibieron el surgimiento de nuevos agrupamientos en barrios o pueblos donde todavía no existían. Allí, “a través de Plan, las estructuras estatales y políticas tradicionales vuelven a marcar presencia y se recuperan como punto de referencia como acceso a los recursos y la ayuda para las poblaciones pobres” (Gómez, 2007: 129).

La “Masacre de Avellaneda” como inicio de la transición

La “masacre de Avellaneda” tuvo, entonces, un efecto paradójico. Si bien por un lado significó un duro golpe al gobierno, reforzando un rechazo de sectores populares y progresistas del que Duhalde jamás se recuperó, por otro lado, no significó un recrudecimiento de la protesta social, sino incluso una ligera disminución. Los planes estaban comenzando a masificarse (para julio y agosto ya había 2 millones) y la recuperación económica se empezaba a sentir lentamente. Pero sobre todo, al adelantar las elecciones, se corrió el foco de atención; disminuyeron las expectativas sobre el gobierno y la figura de Duhalde, dando paso a las especulaciones sobre su sucesor.

Con respecto al movimiento piquetero, a partir de febrero de 2003, en plena campaña electoral, se percibe que la aceptación social de los cortes de ruta se reduce (Gómez, 2007). El presidente Kirchner continuaría luego con la “estrategia de «institucionalización» de los movimientos” e incluso avanzaría en “la «integración política» de parte importante de los movimientos como apoyos políticos” a su gobierno (Gómez, 2007: 130).

La transición negociada: el acuerdo con Néstor Kirchner

El peronista rebelde

Fuera de la región patagónica, para el ciudadano medio, el nombre y rostro de Néstor Kirchner eran desconocidos en 2002. Recién comenzó a ser una figura pública de relieve como el gobernador peronista crítico del gobierno de Duhalde. Efectivamente, junto con su esposa Cristina Fernández de Kirchner, entonces Senadora Nacional por Santa Cruz, se mostraron opositores desde un primer momento. Pero antes de seguir su camino de opositor a aliado, repasemos brevemente quién era Néstor Carlos Kirchner.

Gobernador de Santa Cruz desde 1991 (y antes intendente de la capital provincial), mantuvo una gestión ordenada y próspera (y con dejos autoritarios, como señalan sus adversarios políticos) en la provincia con menor población del país y con regalías petroleras. Mantuvo su apoyo al menemismo hasta su reelección, pero comenzó a aumentar su crítica avanzando en la década. En 1998 dio su apoyo a la candidatura presidencial de Duhalde desde un agrupamiento peronista progresista que no terminó de gestarse, el denominado Grupo Calafate (pues en esa ciudad de Santa Cruz se realizó la segunda reunión del grupo). Allí se conoció Kirchner con Alberto Fernández quien desde entonces trabajó junto a él, fue su asesor de campaña y luego Jefe de Gabinete.

Durante el gobierno de la Alianza, Kirchner fue un duro opositor, y tras la debacle del 2001, comenzó a hacer campaña, aunque dado su virtual desconocimiento para la inmensa mayoría de la población, su plan inicial era proyectarse para el 2007. A continuación hacemos un repaso de sus posturas críticas al gobierno de Duhalde, con un seguimiento de los principales medios gráficos durante la primera mitad del 2002.

Desde el Senado, su esposa y socia política, Cristina Fernández, se abstuvo de votar la ley que daba por terminada la Convertibilidad, en los debates del 6 de enero de 2002. Y ya el 11 de enero *La Nación* titulaba una nota con el textual de Kirchner: “el gobierno no acierta el camino”. El 14 de febrero, Kirchner protestaba contra la retención a la exportación de petróleo y contra el ajuste a las provincias. El 16 de marzo Duhalde se reunió con todos los gobernadores del PJ menos con Kirchner, quien el 24 de ese mes afirmaba en una entrevista que la gestión del presidente "más que una alianza con la gente es una alianza entre las corporaciones". En el siguiente extracto, además, se vislumbra la importancia que Kirchner daba a alcanzar un apoyo “por abajo”, y no sólo “por arriba”, para usar nuestros términos.

"Los grupos corporativos, empresariales, sindicales, partidos políticos, que en el pasado podían representar el 80 por ciento de la sociedad, hoy no representan más del 30 por ciento, porque el ciudadano común ya no actúa más corporativamente", explicó. Acotó que "esta es una nueva realidad que la dirigencia no entiende. Yo he tratado de explicarle esto a Duhalde, pero optó por esta alianza corporativa. Y es evidente que este es un gobierno de legalidad legislativa, constitucional, pero más que una alianza con la gente es una alianza entre las corporaciones", concluyó (LN 16/03/02).

Efectivamente, aquí se muestra la intuición de Kirchner que luego llevaría adelante. Sostenerse en el poder menos con apoyos "corporativos" que con la "imagen pública", e incluso con actitudes "anti-corporativas". Así es que Ricardo Sidicaro plantea la figura de "un gobierno de líder sin partido", en el cual "Kirchner se propuso construir poder consiguiendo los apoyos de distintos sectores de la sociedad fragmentada" (Sidicaro, 2010: 258). Y un estudio sobre la "construcción de poder" de Kirchner en el período 2003-2005 remarca su estrategia del "going public", aunque también complementada con su estrategia de poder político-territorial (Curi, 2010)⁷⁸.

Kirchner no firmó el documento de los 14 puntos con los cuales se descomprimió la crisis de abril y tampoco el documento de Santa Rosa, del 27 de mayo, que reafirmaba el apoyo al gobierno nacional en los mismos términos, y que el documento mencionaba explícitamente. El 3 de junio, Kirchner realizaba pronunciamientos muy críticos para con el gobierno, se negó a firmar el acuerdo para reducir el déficit en su provincia e insistía en su postura de adelantar la fecha de las elecciones.

El adelanto de las elecciones

El 20 de junio el Congreso aprobó la ley de internas obligatorias para los partidos que presentaran más de una lista, aunque sin voto obligatorio para los ciudadanos y el 21 el gobierno anunció elecciones internas para marzo. En ese entonces, Duhalde comenzó a alentar abiertamente la candidatura de Carlos Reutemann, el gobernador de Santa Fe. Frente a este

⁷⁸ "[La] multiplicidad de audiencias disponibles en la política argentina [y el] escenario de profunda dispersión política y partidaria (...) explican por qué el presidente decidió desarrollar sus estrategias de construcción de poder en dos grandes direcciones. Por un lado, durante los primeros meses (...) Kirchner salió rápidamente a conquistar a la opinión pública (estrategia que aquí llamaremos *going public*) de manera de saldar por una vía alternativa su debilidad en las arenas partidaria y parlamentaria. (...) Pasados los primeros meses (...), Kirchner entendió que debía traducir aquel capital político en poder institucional. Para ello (...) tuvo que recurrir a su segunda estrategia de construcción de poder: la política territorial. En este contexto, tejió coaliciones bilaterales con distintos oficialismos provinciales (de caudal electoral estable a lo largo de los años), a partir de la distribución de cuantiosos recursos federales" (Curi, 2010: 21-22).

escenario, desde el entorno del patagónico anunciaron el 23 de junio que evaluaban presentarse por fuera del PJ, y Kirchner criticó la política económica del gobierno de Duhalde afirmando que era “el presidente que generó el ajuste más feroz de la Argentina” (*Página/12*, 23/06/02).

Pero luego de la represión en Avellaneda (el 26 de junio), las cosas virarían su rumbo. En principio, Kirchner se mostró crítico, aunque no lapidario: "Estamos indudablemente viviendo una situación de alta conflictividad social en la que el gobierno nacional no debería reemplazar su falta de autoridad con autoritarismo" (*La Nación*, 28/06/02). A una semana de los asesinatos, el 2 de julio, Duhalde anunció el adelanto de las elecciones para fines de marzo y de la asunción para el 25 de mayo. Todavía mantuvo las internas, que adelantó para el 24 de noviembre pero que finalmente no se realizaron, y descartó la renovación de todos los mandatos. "Yo deseo que los argentinos podamos elegir todas las autoridades, pero ésa es una atribución que le corresponde al Congreso Nacional y a los gobiernos provinciales", afirmó en su mensaje por Cadena Nacional. En el mismo sentido se pronunciaron los 14 gobernadores peronistas al día siguiente, pero sin avanzar en las reformas necesarias para ello.

Quienes, en cambio, sí se mostraron firmes en expresar su voluntad a favor de la caducidad de mandatos fueron Kirchner, la diputada Carrió y el Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, quienes dieron una conferencia conjunta (y en la que sobrevolaba la posibilidad de un acuerdo político, conformando un espacio “progresista”). En esa oportunidad, Kirchner explicó: “Para mantener mi postulación dentro del justicialismo debe garantizarse un proceso interno cristalino, que se eviten los clientelismos y una garantía de que no seremos el fruto de la pelea entre los aparatos de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde, que sólo buscan el poder por el poder mismo" (*La Nación*, 12/07/02).

Hacia el acuerdo

La renuencia de Reutemann a aceptar la candidatura presidencial, primero, y la baja medición de Manuel De la Sota en las encuestas luego, empujaron a Duhalde hacia Kirchner. Un “mal menor” frente a la victoria del propio Menem, de Rodríguez Saá, o bien de un no peronista, sea López Murphy o Carrió. También pensó en Felipe Solá como candidato propio, pero tampoco medía bien en las encuestas de intención de voto (Míguez, 2013: 32).

El acuerdo fue sinuoso y nada fácil dado el fuerte perfil opositor de Kirchner, pero las circunstancias lo favorecieron. Y en verdad, fue ese perfil opositor el que le permitió una proyección de crecimiento en sectores medios progresistas, aunque insuficiente, y que

complementó con el apoyo del aparato político-territorial bonaerense duhaldista. También, la mejora económica del segundo semestre (se hablaba en los medios del “veranito económico”), provocó cierta mejora en la consideración del gobierno en sectores medios y medios altos no progresistas, aunque más asociada a la gestión e imagen de Lavagna que a la de Duhalde. Al punto que desde el entorno presidencial algunos sectores alentaron a Duhalde para que fuera candidato, quien sin embargo se mantuvo firme en su rechazo.

El 26 de julio Kirchner lanzó su candidatura de manera oficial, pero todavía creía difícil lograr vencer dentro del aparato del PJ. Hacia el 17 de agosto, “aunque aparecía en la intención de voto muy por debajo de Carrió, Rodríguez Saá, Menem y Zamora, estaba por encima de Solá y De la Sota” (Miguez, 2013: 33). Durante septiembre, Duhalde intentó una vez más convencer a Reutemann inútilmente, y por entonces parecería que la opción de Kirchner decantó definitivamente. Entre fines de octubre y principios de noviembre, Duhalde intentó impulsar la fórmula Kirchner-De la Sota, y luego propuso como vice a su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, pero Kirchner no transigía.

Hacia mediados de noviembre, Kirchner obtuvo el apoyo del gobernador Solá y el 18 se reunió con Duhalde en la quinta presidencial de Olivos, junto con otros gobernadores, donde se acordó un documento de 12 puntos, que contemplaba pedidos del FMI, así como el cronograma electoral con elecciones adelantadas para el 27 de abril (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). El 28 de noviembre se ratificó el cronograma electoral, sin internas obligatorias ni ley de lemas, pero habilitando que se presenten varios candidatos del Partido Justicialista en listas separadas (lo harían Menem, Saá y Kirchner).

El 14 de diciembre, Duhalde asistió a un acto en Santa Cruz, y dijo que Kirchner era “un gran candidato” pero recién oficializó su apoyo el 7 de enero de 2003 tras un encuentro en Olivos (Miguez, 2013). El 25 de febrero Kirchner anunció que Daniel Scioli sería su candidato a vicepresidente, decisión que apuró para evitar que Duhalde le impusiera a Roberto Lavagna en ese puesto, y a los pocos días acordó con el economista su continuidad en el Ministerio, y su figura tomó parte en la campaña electoral (Burgo, 2011). En los últimos dos meses de campaña (marzo y abril de 2003), tras el acuerdo con el FMI, la confirmación de la recuperación económica, con la estabilidad cambiara y por consiguiente la inflacionaria, la dupla Kirchner-Lavagna insinuaba cierta modificación política con una señal de continuidad económica.

Con el sugestivo título de “Kirchner al gobierno, ¿Duhalde al poder?”, una columna de opinión de *La Nación* del 12 de enero de 2003 analizaba el acuerdo entre los dirigentes desde la perspectiva estratégica del presidente. Duhalde, según el editorialista, buscaba: derrotar a

Carlos Menem; quedarse con el liderazgo del PJ en el orden nacional; mantener su poder territorial en el distrito bonaerense; que se le reconozca haber conducido exitosamente la transición; y que “Kirchner encarne la continuidad del modelo productivista que Duhalde dice haber inspirado”, entre otros puntos (La Nación, 12/01/03)⁷⁹.

En contra de esta visión, el nuevo presidente mostró de inmediato una iniciativa política que lo diferenciaba de su sucesor, aunque recién a fines de 2003 comenzaron muestras públicas de una tensión que terminaría en la ruptura y el enfrentamiento con las elecciones legislativas de octubre de 2005. El enfrentamiento no era económico, sino político e ideológico, principalmente por la cuestión piquetera y su represión, y secundariamente por la cuestión de los Derechos Humanos que Kirchner impulsó⁸⁰.

Un balance del gobierno de Duhalde y una hipótesis sobre el gobierno de Kirchner

Las tres claves de Duhalde

En su discurso de asunción del 2 de enero, Duhalde se centró en tres claves como objetivos de su gobierno:

“Esta gestión que hoy mismo comienza su tarea se propone lograr pocos objetivos básicos: primero, reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina; segundo, garantizar la paz en Argentina; tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y social” (Discurso de asunción presidencial de Eduardo Duhalde, 2 de enero de 2002).

Cada uno de los tres puntos puede reelaborarse de distintas maneras, pero en términos amplios apuntaban a los ejes centrales del momento y a encauzar una salida de la crisis. El primero era el más inmediato y constitutivo de un gobierno que comenzaba en un contexto sumamente crítico desde todo punto de vista: obtener el reconocimiento institucional y político mínimo para poder gobernar (lo que no alcanzó su antecesor, Rodríguez Saá), y en lo posible cierta aceptación social. El segundo tenía un aspecto más específico como objetivo para su propio

⁷⁹ Laborada, Fernando “Kirchner al gobierno, ¿Duhalde al poder?”, *La Nación*, Columna de Opinión, 12/01/03.

⁸⁰ Entre las primeras discrepancias públicas, ver, por ejemplo, “Duhalde aconseja cambiar la política con los piqueteros” (La Nación, 29/11/03) y “Kirchner se enojó con Duhalde por los piqueteros” (La Nación, 30/11/03). A lo largo del 2004 e incluso buena parte del 2005 hubo idas y venidas en una ruptura que se preanunciaba pero se dilataba. Por ejemplo, “Kirchner y Duhalde buscan una tregua” (La Nación, 26/04/04) y “Kirchner planea divorciarse de Duhalde” (La Nación, 13/06/04). Hasta último momento, se negoció presentar una lista consensuada para las elecciones legislativas de octubre (sobre todo en la estratégica provincia de Buenos Aires), pero finalmente se enfrentaron, concretándose la ruptura. Ver, por ejemplo, “Se trabó el acuerdo Kirchner-Duhalde” (La Nación, 30/06/05).

gobierno: reducir el nivel de conflictividad social, al menos en sus expresiones más violentas (como claramente lo fueron las jornadas de los saqueos y protestas que se cobraron decenas de muertos). El tercero era el más estratégico. Nótese que no habla de lograr una recuperación económica, sino directamente de efectuar un cambio de modelo económico. No se plantea una recomposición, sino una nueva fundación económica. Sostenemos que este fue el objetivo central de su gobierno y que fue alcanzado exitosamente (en sus propios términos). Los otros dos objetivos eran condiciones de posibilidad del tercero, y en verdad los alcanzó solo muy parcialmente, pero en la medida necesaria y suficiente para sostener el tercero.

Efectivamente, el cambio de “modelo” económico fue el principal éxito de su gobierno, y en verdad, su misión y función. El “modelo” anterior estaba claramente agotado, pero aun así existían dificultades en la transición.

Por un lado se trataba de enfrentar la protesta social, que adquiriría distintas formas. Si bien ninguna estaba organizada para socavar de manera violenta el *statu quo*⁸¹, sí se daban múltiples saqueos y atentados a la propiedad, además de las masivas movilizaciones con cortes de calles, rutas y accesos interurbanos, lo que habilitó que se hablase desde el gobierno de “evitar la anarquía”, además de “pacificar el país”. En este campo, se mantuvo una situación conflictiva y tensa pero sin desbordes importantes hasta el fatídico 26 de junio, cuando se aplicó una represión premeditadamente mucho más dura que las anteriores, y que concluyó con dos jóvenes asesinados por la policía. Este episodio le costó al gobierno el adelanto de las elecciones y de la sucesión de gobierno, pero por otro lado, desde entonces se detuvo el crescendo de las movilizaciones y no hubo nuevos episodios de esa envergadura. En suma, hacia el final de su mandato se logró una relativa pacificación, básicamente gracias a los planes sociales que en buena medida institucionalizaron al movimiento piquetero, y también debido a una paulatina recuperación económica.

Con respecto al primer punto, logró la autoridad institucional, alcanzando su objetivo principal de gobierno y aunque no llegó a completar su mandato, el propio Duhalde pudo fijar los términos de su retiro y hasta negociar la transición. En términos de autoridad política, alcanzó un acuerdo desde las cúpulas políticas y económicas para transitar la salida económica, pero no logró una legitimidad social, más que muy parcialmente. Es decir, como ya dijimos, logró una salida “por arriba” pero no “por abajo”.

⁸¹ Como sí ocurrió durante la violencia política de la década de 1970.

La salida de Kirchner

En el siguiente extracto del 3 de junio de 2002, Kirchner expresa que la salida de la crisis requiere de legitimidad.

"Hay un marco de debilidad muy grande, esto impide la resolución de la crisis como corresponde", dijo Kirchner ayer. Agregó que, "además, la Argentina requiere representatividad y legitimidad de origen, porque si no esta crisis se va a resolver casi caprichosamente y en forma muy perjudicial para los argentinos". Reiteró también su idea de renovar todos los cargos políticos en las próximas elecciones y argumentó "que la crisis de representatividad que tiene la clase dirigente argentina requiere que se renueve, para garantizar la gobernabilidad" (LN 3/06/02).

Ciertamente, en su gobierno Kirchner lograría una amplia legitimidad, pero lo haría sobre la base de una salida económica que difícilmente podría haber obtenido legitimidad. Por ello planteamos que se trató de una "división de tareas" en la salida de la crisis: Duhalde llevó adelante la "salida por arriba", realizando el "trabajo sucio" de una salida económica impopular (incluyendo la represión a la protesta social) y pagando sus costos políticos; mientras que Kirchner retomó ese sendero ya en un momento más favorable económicamente, y llevó adelante una "salida por abajo", innovando y sorprendiendo con una ruptura ideológica de tipo izquierdista.

Como ya mencionamos al comienzo del capítulo, si bien articuló un *apoyo desde abajo*, la salida fue impulsada "desde arriba", en los términos de Bonnet, quien diferencia al proceso argentino de otros fenómenos políticos latinoamericanos contemporáneos de revisión neoliberal. Así, por ejemplo, lo contrasta con el caso de Bolivia, donde Evo Morales y el partido MAS fueron actores protagónicos en el derrocamiento del "neoliberal" gobierno de Sánchez de Losada (Bonnet, 2015: 44-45). En menor medida, podríamos agregar los casos de Brasil y Uruguay, que también implicaron la llegada al gobierno nacional por vez primera de fuerzas políticas izquierdistas que fueron desde el inicio opositoras de los períodos neoliberales (el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio)⁸².

⁸² Hasta cierto punto, la relación entre los gobiernos y las bases siguieron cursos inversos. Mientras que en los países vecinos las corrientes oficialistas más izquierdistas se decepcionaron por cierta moderación (en algunos casos abandonando la coalición), en el caso argentino el liderazgo del presidente sorprendió "por izquierda" a sectores sociales opositores que comenzaron a brindar su apoyo paulatinamente, y no pocos lo harían recién durante el gobierno de Cristina Fernández. De hecho, en un inicio, Kirchner quiso sumar el apoyo orgánico de la CTA, pero no lo logró (Miguez, 2013), captando sólo el apoyo de algunos de sus sectores y de otros referentes cercanos, hasta que recién en 2010 la CTA se separó en una vertiente oficialista y otra opositora.

Capítulo IV

Conclusiones. La crisis como la separación de una continuidad

Recapitulando la salida de la crisis

La salida económica

La crisis expresó un nuevo agotamiento cíclico de la competitividad industrial que caracteriza a la formación económica nacional, en un momento de baja afluencia de renta, pero particularmente agravado por una dinámica global de valorización de capitales financieros internacionales y locales basada en el endeudamiento (principalmente estatal), que se sostenía sobre una “doble ficción”, interna y externa (como forma de prorrogar una crisis de sobreproducción mundial) que fue reproducida de forma particularmente acrecentada, antes de estallar finalmente con el “corralito” (para detener la corrida bancaria que ya había comenzado) y el default (Iñigo Carrera, 2005; 2011).

La crisis, entonces, consistió en el típico agotamiento propio del límite de productividad nacional, cuando la compensación tradicional, la renta agraria, no bastaba para sostener el ciclo económico. Además, se había agotado la posibilidad de profundizar en las otras tres grandes compensaciones de la Convertibilidad: las privatizaciones, el crédito internacional y la baja del salario real. De hecho, la apelación desmesurada a dichos recursos agravó la crisis, financiera y fiscal, por un lado, y de recesión interna y laboral, por el otro. De conjunto, crearon una grave crisis social general que devino estallido popular.

Además, la convertibilidad como forma económico-monetaria, ya vaciada de su contenido [mediación estatal de renta (Iñigo Carrera, 2011)], y sin su sustento (entrada de divisas), seguía sin embargo incentivando la fuga de divisas, a la vez que impedía un *ajuste de tipo inflacionario* (Bonnet, 2015; Piva, 2015).

La salida de la crisis finalmente significó, en resumidas cuentas:

- Suspender pagos de deuda (de manera unilateral con el default y negociando con el FMI).

- Devaluar la moneda (terminando con la Convertibilidad), mejorando la balanza comercial, e impulsando la industrialización.
- Bajar el salario real y otros costos de producción (los servicios públicos, perjudicando a las empresas privatizadas), manteniéndolos fijos mientras el resto de los precios subía.
- Reducir el gasto estatal y crear nueva deuda (emisión de bonos).
- Desposeer parcialmente a los ahorristas, licuar deudas privadas (de empresas) y compensar a bancos (creando nueva deuda estatal).
- Brindar planes sociales masivos.

Es decir, *redistribuir activos y pasivos, suspender y atrasar pagos estatales, reducir salarios y costos de producción, y modificar precios relativos*. Pero a esto hay que *agregar un segundo momento de suba de los precios y cantidades de exportación de commodities*, que permitió subvencionar la actividad industrial en general, subir los salarios reales, potenciar la demanda con obras y empleo público.

El gobierno de Duhalde, entonces, asumió la salida con el ajuste necesario: la baja del salario real y la redistribución de pérdidas con la pesificación, además de la inevitable interrupción de los pagos de deuda externa. Una vez recuperada la acumulación, ya durante el gobierno de Kirchner, comenzarían las negociaciones para poder pagar, ya no todo, pero sí una parte significativa de la deuda.

Junto con la producción agraria, petrolera y minera, eventualmente aumentó la producción industrial significativamente, pero en lo esencial no de una manera cualitativamente distinta a la de los años 90, sino con una diferencia cuantitativa (CIFRA, 2011). Es decir, consolidando una fuerte concentración (y extranjerización) de la industria de capitales medios (es decir de los que alcanzan la tasa media de ganancia, a los cuales se suele llamar “la gran industria”). Es cierto que además se dio una gran expansión de PyMEs, que aumentaron su número con respecto a la década de 1990, pero con su característica baja productividad y salarios reducidos (y en muchos casos no registrados), y que en buena medida se sostuvieron por el intervencionismo estatal (con los subsidios a la energía y una política de promoción industrial en Tierra del Fuego, entre otros) posibilitado a su vez por la alta afluencia de renta. Además, los salarios, tras un crecimiento muy fuerte pero muy desigual hasta 2007, entraron entonces en una puja inflacionaria que lentamente los iría erosionando (CIFRA, 2011).

La salida política

El gobierno de la Alianza extremó el sostenimiento de la Convertibilidad mediante el endeudamiento y el ajuste fiscal y salarial (el “ajuste deflacionario”) hasta tal punto que, por un lado, diluyó toda la legitimidad que había conseguido en las urnas, y por otro lado, se mostró incapaz de conducir el rumbo opuesto: salir de la Convertibilidad y entrar en el default.

La forma política que adquirieron dichas transformaciones fue la de un gobierno de transición dispuesto a pagar los costos políticos, con el apoyo de la mayoría de la corporación política. Como vimos, mantuvo una salida ortodoxa, a fuerza del apoyo de la corporación política, a pesar y en contra de las protestas populares. El resultado fue lo suficientemente exitoso en términos de recomposición de la acumulación y normalización de la dominación que “el duhaldismo” llegó a negociar su continuidad política en la sucesión de gobierno, pero apenas iniciada la nueva gestión comenzó por diluirse, formándose una nueva expresión política (“el kirchnerismo”) a la que eventualmente se enfrentó (como explícitamente ocurrió en las elecciones legislativas de 2005).

La corporación política mayoritariamente lo acompañó, el grueso de la burguesía también, mientras que la clase obrera lo resistió sin éxito, una parte (principalmente los movimientos de desocupados) luchando principalmente por su supervivencia, y otra (los trabajadores registrados vinculados a la CGT) resignada y cuidando su poca seguridad. Este rechazo y resistencia no alcanzaron para torcer el rumbo económico, pero obligó al gobierno a asumir un rol represivo (como parte del “trabajo sucio”) que lo debilitó políticamente y lo forzó a adelantar las elecciones.

El “el embrión de un polo político opositor y de un proyecto contrahegemónico” (Pucciarelli, 2014: 203) a partir del auge de movilización de los movimientos sociales en la segunda mitad de 2001 no prosperó no tanto por limitaciones políticas, sino por la ausencia de un sustrato real de alianzas de clases. Los sectores relevantes de la burguesía se veían involucrados en senderos de acumulación vinculados al mercado mundial y a una sobreexplotación laboral; y la clase obrera se encontraba debilitada y dividida como para liderar un proyecto propio. En términos rasos, las subjetividades ideológicas no respondían a una objetividad económica a la que pudieran expresar políticamente.

El gobierno de Kirchner, en continuidad con la salida económica de la crisis efectuada por su antecesor, comenzó como un relevamiento de continuidad del mismo sector de la burguesía pero bajo un nuevo liderazgo político que estableció vínculos con la clase obrera y con los sectores medios “progresistas” (de la clase obrera calificada urbana y de la pequeña burguesía).

Con esa innovación político-ideológica combinada con una fuerte recuperación económica primero, y luego un crecimiento que el contexto mundial subió y sostuvo por encima de lo esperado, alcanzó amplios márgenes de aceptación y legitimidad. Lo que denominamos una salida política “por abajo” impulsada “desde arriba” (y sobre la base de la anterior salida económica regresiva articulada políticamente “por arriba”)⁸³.

La caracterización de la crisis y su salida

¿Crisis orgánica o crisis de hegemonía? ¿Bloque histórico o bloque de poder?

En su caracterización de la crisis de la Convertibilidad, Ana Castellani y Alfredo Pucciarelli plantean cuatro etapas. La primera corresponde a la instalación de la crisis de acumulación como *crisis fiscal*, desde la recesión del último trimestre de 1998 hasta el “blindaje” financiero acordado con el FMI en diciembre de 2000; la segunda etapa corresponde al primer trimestre de 2001, y significó el paso de la crisis fiscal a la *crisis financiera*; la tercera etapa corresponde al segundo semestre del 2001, hasta la implementación del “corralito”, y es de agudización de la crisis social, política e institucional, es decir, *crisis de hegemonía*. El “corralito” dio paso a la confluencia de reclamos de sectores medios a los populares, y significa la cuarta etapa, en la cual la crisis de hegemonía deviene *crisis orgánica* hacia fines de año (Castellani y Pucciarelli, 2014: 15).

Si bien consideramos válida esta periodicidad de estadios críticos crecientes, no acordamos con la caracterización de la crisis como “orgánica”, y tampoco del todo en la de “crisis de hegemonía”.

Entendemos que las crisis orgánicas son para Gramsci largos y complejos procesos de transición entre *bloques históricos*, es decir, modos de producción con una dirección estatal acorde. Así, por ejemplo, la larga transición que consolida un nuevo *bloque histórico* de hegemonía burguesa entre 1789 y 1870 en Francia. Una crisis orgánica, entonces, implica una crisis profunda en las bases mismas del modo de producción, que afectaría ya ni siquiera a

⁸³ Lo más novedoso vino luego, cuando a partir del enfrentamiento con los propietarios rurales por una suba de retenciones (2008), se originó un polo opositor que devino enfrentamiento populista que se sostuvo a través del fracaso puntual en ese enfrentamiento (con el rechazo del Senado de las retenciones móviles que originaron el conflicto), y persistió con la baja económica en el contexto de la crisis mundial (2009), su recuperación posterior (2010-2012) y hasta su posterior declinación (2013-2015), cuando finalmente, aun perdiendo las elecciones, lo hizo manteniendo casi la mitad de los votos en el ballotage de noviembre de 2015.

fracciones de clase, sino a una clase en general. En este sentido, en nuestro país, sólo *cabría* plantear una crisis orgánica en el lento período de inserción a la división mundial del trabajo en el siglo XIX con las divisiones y enfrentamientos internos desde la Independencia hasta alcanzar su superación y la constitución de un bloque histórico con la consolidación de la dominación política nacional entre 1862 y 1880 de una burguesía agraria y comercial vinculada al capital mundial. Desde entonces no creemos que haya habido crisis orgánicas, sino transformaciones y reconversiones que en algunos casos podrían denominarse, siguiendo la propuesta conceptual, como crisis de hegemonía.

Ahora bien, creemos útil distinguir dos alcances de la “hegemonía” y por lo tanto de sus “crisis”. Uno más amplio que implica modificaciones en el *bloque de poder*, es decir, el equilibrio interno de clases y fracciones de clases dominantes que más influyen en el poder del Estado (Poulantzas, 1990), y otro más estrictamente político sobre la dominación legítima y el consenso alcanzado por dicho *bloque de poder* sobre la clase obrera y el conjunto de la población. Así, entendemos que hubo una *crisis hegemónica “amplia”* en Argentina hacia 1930, que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial, con el avance de la burguesía industrial y el retroceso relativo de la clase terrateniente, y que alcanzó una expresión de *hegemonía política* con el peronismo y la integración de la clase obrera. A partir de 1955 la *hegemonía política* entra en crisis con una dominación política sumamente inestable, pero en lo esencial se mantiene la *hegemonía amplia*, con transformaciones (pero no rupturas) a lo largo del tiempo dentro del *bloque de poder* (básicamente con la inserción de nuevos capitales extranjeros). En 1975/1976 también puede postularse una crisis de *hegemonía amplia* con transformaciones en la estructura y orientación industrial y un reequilibrio entre el capital y el trabajo (con sus múltiples características económicas y políticas). En 2001 se trataría de una profunda crisis de *hegemonía política* pero que logró recomponerse manteniendo la misma *hegemonía amplia*, es decir, el mismo *bloque en el poder*, con un reequilibrio interno, es decir, un cambio en la fracción que pasa a ser hegemónica dentro de dicho bloque (Wainer, 2013).

Entendemos, entonces, a la crisis de 2001 fundamentalmente como una crisis de acumulación capitalista dentro del espacio nacional, con una profunda crisis de dominación política, que llegó a un nivel crítico que habilita denominarla como crisis de *hegemonía política* (y no de orgánica); pero sobre todo, que en su salida *no articuló un nuevo bloque de poder*, sino que en un primer momento (la salida económica), *reestructuró la hegemonía interna dentro del mismo bloque*, y en un segundo momento (la salida política), articuló una *nueva hegemonía política* (el kirchnerismo) con el mismo bloque de poder, pero con una mayor integración económica de la clase obrera y una innovación ideológica.

Cambios (en la continuidad) y continuidades (en el cambio)

La caracterización de la crisis y de su salida implica, en definitiva, precisar qué terminó con la crisis y qué continuó tras ella, o bien, que cambió, cómo cambió, y qué no cambió. Desde nuestro punto de vista, los términos del apartado anterior (hegemonía, bloque en el poder, etc.) llevan el debate a rigideces que dificultan apreciar tanto las continuidades dentro de las transformaciones como las transformaciones dentro de las continuidades. Si bien es posible estilizar períodos con ciertas características generales, dichos momentos presentan una continua transformación en la cual existen cambios y matices dentro de cada período, así como el paso de un período a otro no implica un salto disruptivo, sino una imputación analítica más o menos arbitraria en lo que en verdad es una continuidad que acumula transformaciones. Además, dichas separaciones suelen priorizar una consistencia política que daría forma a esos bloques (Bonnet, 2015), cuando un análisis más detenido mostraría cómo las expresiones político-gubernamentales se adaptan a las transformaciones económicas⁸⁴.

A lo largo del trabajo hemos intentado precisar algunas de las continuidades profundas en la salida de la crisis, así como las modificaciones en algunas de las formas de desarrollo de dichas continuidades. Así, por ejemplo, existió continuidad con respecto al período de la Convertibilidad (Bonnet, 2015; Piva, 2015) en cuestiones estructurales, tales como el tipo de industrialización vinculada a la exportación, aun cuando existieron otras diferencias importantes, como el alza de los precios y demanda internacional de los commodities, y un comportamiento del Estado⁸⁵. En segundo lugar, hay una continuidad más profunda con las características más generales de la formación económica argentina, es decir, industria con baja productividad internacional, un mercado interno limitado, y una alta renta (Iñigo Carrera, 2004). En términos de Iñigo Carrera, *se modificaron algunas formas de reproducción de la misma especificidad de la acumulación de capital*: de la sobrevaluación a la subvaluación con retenciones (y luego nuevamente sobrevaluación) para la apropiación de renta; del endeudamiento a la cancelación de deuda; del desempleo estructural a la informalidad estructural del empleo para mantener la media de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo.

⁸⁴ Así, la industrialización en sustitución de importaciones de la década de 1930 no respondió a un plan político, ni comenzó con un gobierno que representara a la burguesía industrial; las inversiones extranjeras directas comenzaron al final del gobierno nacionalista de Juan Perón; Arturo Frondizi llevó adelante una política petrolera opuesta a lo que había sostenido antes de asumir; y el brutal ajuste contra la clase obrera no comenzó en 1976 con la dictadura sino en 1975 con el *Rodrigazo* del gobierno de Isabel Perón, por mencionar algunos ejemplos.

⁸⁵ Habría que profundizar en el análisis y comparación del ciclo kirchnerista, lo cual excede nuestro propósito. Para un buen análisis en este sentido, sobre todo de “la forma Estado”, ver Bonnet y Piva (2013). Un análisis reciente que abarca el conjunto de los doce años de gobiernos kirchneristas, Kulfas (2016).

El rol del Estado en la salida de la crisis

“Ante la profundidad de la crisis económica, las lógicas sectoriales se orientan a obtener beneficios o, en el peor de los casos, reducir los costos para cada sector. Esa disputa tiene como eje al Estado: como en el pasado, se intenta trasladar (en general con éxito) los costos de la crisis al Estado. La manera en que se van resolviendo esas tensiones y la forma en que se producen los reajustes dan cuenta no sólo de un cambio en la distribución relativa del poder estructural de los sectores empresarios, sino también de la debilidad de las capacidades estatales para intervenir en la resolución de los conflictos. Como resultado de esa incapacidad, es el Estado –y no los capitalistas– quien acaba asumiendo los mayores costos de la crisis” (Beltrán, 2014: 339).

Lo que Gastón Beltrán señala como resultado de una “incapacidad” estatal, en nuestro caso lo interpretamos como la exacta función del Estado en tales circunstancias, o al menos, una de sus funciones. Efectivamente, el Estado media en los reajustes, pero no es su debilidad lo que explica tales resultados, sino su forma específica para expresar políticamente las fuerzas de las clases sociales y de las facciones de clase. Y precisamente, falta un actor clave que el autor no menciona en el pasaje y que son los trabajadores, como contrapartida de “los capitalistas”. El Estado no es un sector de la población, sino la institución social que media entre las relaciones de clase, pero no desde una instancia exterior, sino que expresa políticamente esa relación capitalista de explotación y su función es reproducirla. A veces en contra de intereses puntuales de capitalistas, pero con el objetivo de perpetuar y sostener al capital social en su conjunto.

Efectivamente, en la salida de la crisis el Estado asumió esta expresión de *capital social o global* (Iñigo Carrera, 2004; Grinberg y Starosta, 2014), al ubicarse por encima de las expresiones fraccionarias del capital. Si bien indudablemente se posicionó más cercana a unas fracciones que a otras (la industrial concentrada en detrimento de la financiera, por ejemplo), y concretamente a unas expresiones corporativas de estas (la UIA), no es cierto que el gobierno de Duhalde haya sido meramente el representante de estos sectores. Más bien articuló una salida entre las distintas fracciones del capital, que por su propia especificidad beneficiaba a unos sectores más que a otros, pero se cuidó de sostener la reproducción de todo el circuito

capitalista⁸⁶, y también de contener a las propias masas de la clase obrera desocupada con los planes sociales.

Los tiempos de la crisis

Una dimensión clave en el proceso de salida de una crisis es el tiempo; su dilación, su postergación, su reformulación en otros términos. Si bien Duhalde afirmó que se propuso “gestionar el cambio del modelo” y no simplemente “administrar una crisis”, hizo las dos cosas. El default, la negociación y, posteriormente, la reestructuración de la deuda son procesos de transformación de una situación económica que no la anula, sino que la posterga y la reformula⁸⁷. Esto es particularmente claro con los ciclos de crédito y endeudamiento, pero también ocurrió respecto a la pesificación, con la negociación de las distintas condiciones de compensaciones a los bancos y devolución a los ahorristas. Se trata de cuestiones que se van modificando con el tiempo (en esencia, por la evolución de los precios y del valor de la moneda). Pero en definitiva, el propio proceso de superación de las crisis capitalistas, tal como lo mencionáramos en el primer capítulo, consiste en postergar sus plazos o en ampliar sus bases de reproducción, y no en solucionar el fundamento de la crisis, que es intrínseco a su funcionamiento.

La crisis como forma ideológica

La última cuestión que quisiéramos advertir es el sentido político general, o si se quiere, social, que se le asigna a “las crisis”. Es decir, “la crisis” en términos de imputación de responsabilidad, como punto de comparación, como punto de inflexión y como recuerdo casi extorsivo. La crisis adquiere entonces una función político-ideológica. Marca un hito de máxima regresión e incertidumbre que a futuro funciona como comparación extorsiva. Se ha mencionado el “efecto de chantaje” de la hiperinflación como un atemorizante para aceptar

⁸⁶ Tanto Duhalde como Remes Lenicov, aunque criticaron a los bancos, aclaraban que eran necesarios para la recuperación económica, y todo su gobierno se cuidó de que no “caiga” ningún banco otorgando todos los descuentos que exigían.

⁸⁷ El ejemplo por antonomasia es el reciente pago en 2016 a un sector de los holdouts de la reestructuración iniciada en 2004, sobre el default de diciembre de 2001, con el antecedente del megacanje de junio del mismo año, para no ir aún más atrás.

reformas estructurales y el mantenimiento de la Convertibilidad [Ortiz y Schorr (2006), entre muchos otros].

Aunque el kirchnerismo operó en general una auto-comparación con el neoliberalismo de la década de 1990, y también con un bloque más extenso a partir de la dictadura de 1976, la crisis del 2001 era su *súmmum* y su condensación, su resultado apocalíptico con el cual en definitiva se comparaba (el “infierno” del cual se estaba “saliendo”, según afirmaba recurrentemente el propio Kirchner). Así, se recordaba “diciembre de 2001”, o incluso “mayo de 2003” (cuando asumió el gobierno Néstor Kirchner), como una comparación política a la que se apeló hasta los últimos años del ciclo kirchnerista.

Pero lo cierto es que ningún período puede separarse de los momentos de crisis, como si fuera su mero reverso. La acumulación de capital implica ciclos, que son usualmente repartidos por distintas expresiones políticas. La crisis como forma ideológica, entonces, sirve para reforzar la separación entre economía y política⁸⁸. Es decir, que divide imputaciones políticas a distintos sectores que expresan formas de *distintos momentos de un mismo proceso económico*.

La crisis genera un mayor quiebre entre distintos momentos económicos y políticos. Genera la ilusión de un nuevo comienzo cuando siempre se trata de una continuidad. La crisis en sí funciona profundizando las contradicciones del ciclo, empeorando las condiciones económicas, y de esta manera, la posterior salida de la crisis resulta más necesaria y urgente. Pero además, ese *proceso de salida*, que por un tiempo suele significar una mayor regresión social y económica (como fue el caso a comienzos de 2002), es *vivido y recordado, en general, como parte de la crisis*, y es luego separada política e ideológicamente del momento de *recuperación* posterior.

Entendemos a la crisis, entonces, ya no sólo como *forma económica* necesaria de la reproducción capitalista, sino también como *forma política* necesaria de esa misma reproducción. Si en términos económicos, la crisis implica reiniciar un ciclo de acumulación, en términos políticos implica reiniciar un ciclo de legitimación. Su operación consiste en una *división ideológica de dos momentos que en verdad son inseparables: el ajuste y la recuperación (en términos económicos), la coacción y el consenso (en términos políticos)*.

Una enseñanza básica pero esencial que nos lega Marx, en la mejor tradición dialéctica, es la importancia de captar la totalidad en sus expresiones parciales, y la de entender las oposiciones

⁸⁸ Separación que, como vimos en el primer capítulo, es fetichista pero en el sentido profundo de responder a la propia separación histórica del capitalismo entre las relaciones indirectas de los productores y las relaciones directas que son la forma social (o política) de mediar dichas relaciones indirectas privadas.

como contradicciones de un proceso dinámico, donde cada momento se afirma en la negación de su contrario.

“A primera vista, neoliberalismo, de un lado, y desarrollo y liberación nacional, del otro, parecen ser dos opuestos irreconciliables. Pero analizados críticamente, el primero no es sino la expresión política e ideológica en que se realiza plenamente aquello que ha tenido al segundo por forma concreta necesaria de engendrarse. En su unidad, producen y reproducen a un proceso nacional de acumulación (...). Pero aun en su unidad, el tránsito de un momento al otro engendra una contradicción a la que no le cabe otra resolución que la crisis” (Iñigo Carrera 1998: 30).

Así como, siguiendo a Iñigo Carrera, “neoliberalismo” y “desarrollo” son expresiones opuestas de distintos momentos de un mismo proceso de acumulación que, más allá de sus modificaciones, mantiene la misma especificidad; así también el momento de “crisis” y el de “recomposición” o “normalidad” presentan una necesaria continuidad en la cual, lejos de excluirse, se sostienen mutuamente. La crisis es el punto de intersección que justifica el paso de uno a otro “modelo”, marcando entre ellos una frontera que borra su continuidad. Continuidad por poseer características en común, pero también por ser cada momento la *consecuencia necesariamente opuesta del anterior*, particularmente luego de su etapa crítica de profundización (que puede desembocar en una crisis “total”, con un estallido social y recambios políticos, como la de 2001, o puede contenerse como una crisis económica más acotada).

La crisis expresa el agotamiento de la acumulación pero a la vez crea las condiciones para continuar su reproducción pasando de una a otra forma de realizarse. Lo hace económicamente, generando una redistribución regresiva para la clase obrera que será la base de un nuevo ciclo de crecimiento; y lo hace política e ideológicamente, al servir como momento que se “separa” de su posterior recomposición, y sirve así como punto de ruptura y comparación frente al cual se iniciará un nuevo ciclo político que se desentiende de su base inicial y genera la ilusión de un “modelo” puramente progresivo.

Bibliografía y Fuentes

Bibliografía

Adamovsky, Ezequiel (2012) *Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003*, Sudamericana, Buenos Aires.

Aglietta, Michel (1986) *Regulación y crisis del capitalismo. La experiencia de los Estados Unidos*, Siglo XXI, México.

Almeyra, Guillermo (2004) *La protesta social en la Argentina (1990-2004)*, Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires.

Altamira, César (2006) *Los marxismos del nuevo siglo*, Biblos, Buenos Aires.

Althusser, Louis (2004) *La revolución teórica de Marx*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Aricó, José María *Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo. Curso de El Colegio de México*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2011.

Artese, Matías (2013) *Cortes de ruta y represión. La justificación ideológica de la violencia política entre 1996 y 2002*, UBA Sociales Publicaciones, Eudeba, Buenos Aires.

Attali, Jacques “El orden por el ruido. El concepto de crisis en teoría económica” en AAVV, *El concepto de crisis*, Megalópolis, 1979, Buenos Aires.

Auyero, Javier (2002) *La protesta. Retrato de la beligerancia popular en la Argentina democrática*, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.

Basualdo, Eduardo (2001) *El sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera (1976-2001)*, Universidad Nacional de Quilmes, FLACSO e IDEP, Buenos Aires.

Beltrán, Gastón (2014) “El empresariado argentino frente a la crisis. Alianzas, conflictos y alternativas de salida en la etapa final de la convertibilidad” en Pucciarelli, Alfredo y Ana Castellani (coord.) *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Bembi, Mariela y Pablo Nemiña (2007) *Neoliberalismo y desendeudamiento. La relación Argentina – FMI*, Capital Intelectual, Buenos Aires.

Bonefeld, Werner y John Holloway (ed.) *Post-Fordism and Social Form. A marxist debate on the Post-Fordist State*, Macmillan, London, 1993.

Bonnet, Alberto (2008) *La hegemonía menemista: el neoconservadurismo en la Argentina*, Prometeo, Buenos Aires.

----- (2011) “Las relaciones entre estado y mercado. ¿Un juego de suma cero?” en Bonnet (comp.) *El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente*, Peña Lillo Ediciones Continente, Buenos Aires.

----- (2007) “Estado y capital. Debates sobre la derivación y la reformulación del Estado” en Mabel Thwaites Rey (comp.) *Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates*, Prometo, Buenos Aires, 2007.

----- (2015) *La insurrección como restauración. El kirchnerismo*, Prometeo, Buenos Aires.

----- (2011) “Las relaciones entre estado y mercado. ¿Un juego de suma cero?” en Bonnet, Alberto (comp.) *El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente*, Peña Lillo Ediciones Continente, Buenos Aires.

----- (2015b) “El kirchnerismo: un breve balance” en Revista Herramienta n° 56, Buenos Aires, otoño de 2015.

----- (2002) “La crisis de la convertibilidad en la Argentina” en Memoria. Revista mensual de política y cultura, Buenos Aires.

Bonnet, Alberto y Adrián Piva (2013) “Un análisis de los cambios en la forma del estado en la posconvertibilidad” en Juan Grigera (comp.) *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Boyer, Robert (1989) *La teoría de la regulación: un análisis crítico*. Humanitas, Buenos Aires.

Caligaris, Gastón (2015) “Concentración y centralización del capital agrario en la región pampeana. El caso de los grandes pools de siembra” en *Mundo Agrario*, 16(31). Recuperado a partir de <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n31a02>

Cantamutto, Francisco y Andrés Wainer (2013) *Economía política de la convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen*, Capital Intelectual, Buenos Aires.

Castellani, Ana y Martín Schorr (2004) “Argentina: Convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico”, en Cuadernos del CENDES, N° 57, Caracas.

Cavarozzi, Marcelo (2006) *Autoritarismo y democracia (1955-2006)*, Ariel, Buenos Aires.

Clarke, Simon (1993) “Overaccumulation, Class Struggle and the Regulation Approach” en Bonefeld y Holloway (ed.) *Post-Fordism and Social Form. A marxist debate on the Post-Fordist State*, Macmillan, London.

----- (1988) *Keynesianism, Monetarism, and the Crisis of the State*, Edward Elgar Publishing Company Limited, Inglaterra. Disponible en: <http://homepages.warwick.ac.uk/~syrbe/pubs/kmcs.pdf>

CIFRA (2011) “El nuevo patrón de crecimiento. Argentina 2002-2010” *Informe de Coyuntura n°7*, mayo 2011, Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. Coordinador Eduardo Basualdo. Disponible en: <http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=36>

Cobe, Lorena (2009) *La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación*, Capital Intelectual, Buenos Aires.

Cohen, Gerald (1986) *La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa*, Siglo XXI, Madrid.

Costa, A., A. Kicillof y C. Nahón (2004). “Las consecuencias económicas del Sr. Lavagna. Dilemas de un país devaluado” en *Realidad Económica*, n° 214, Buenos Aires.

Curi, Carlos Alberto (2010) *Néstor Kirchner. La construcción de poder. 2003-2005*, Mesa Editorial, Buenos Aires.

Dagatti, Mariano (2013) “La refundación kirchnerista. Capitalismo, democracia y nación en el discurso de Néstor Kirchner” en *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Delamata, Gabriela (2004) *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*, Libros del Rojas, Eudeba, Buenos Aires.

Eskenazi, Matías (2009) “El espectro de la dolarización. Discutiendo las interpretaciones sobre la disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertibilidad” en Bonnet, Alberto y Adrián Piva *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires.

Farinetti, Marina (1999) “¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas de reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, en *Revista Trabajo y Sociedad*, julio-septiembre 1999.

Gaudibert, Pierre (1979) “Crisis y dialéctica” en AAVV, *El concepto de crisis*, Megalópolis, Buenos Aires.

Gómez, Marcelo (2007) “Origen y desarrollo de los patrones de acción y organización colectiva desafiante de los movimientos de desocupados en la Argentina” en Villanueva, Ernesto y Astor Massetti (comp.) *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina hoy*, Prometo Libros, Buenos Aires.

Gramsci, Antonio (2003) *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Grigera, Juan y Matías Eskenazi (2013) “Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad” en Juan Grigera (comp.) *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Grinberg, Nicolás y Guido Starosta (2014) “From global capital accumulation to varieties of centre-leftism in South America” en Susan Spronk y Jeff Webber (co-ordinadores) *Crisis and Contradiction: Marxist Perspectives on Latin American in the Global Economy*, Brill Academic Publishers, London.

Holloway, John (1993) “Capital is Class Struggle (And Bears are not Cuddly)” en Bonefeld y Holloway (ed.) *Post-Fordism and Social Form. A marxist debate on the Post-Fordist State*, Macmillan, London.

Iñigo Carrera, Juan (2005) “Argentina: acumulación de capital, formas políticas y la determinación de la clase obrera como sujeto histórico”, CICP, reedición electrónica de Iñigo Carrera “Argentina: acumulación de capital, formas políticas y la determinación de la clase obrera como sujeto revolucionario”, en *Razón y Revolución*, nro. 14, primavera de 2005.

----- (2011) “De la crisis al apogeo de la representación: subjetividad política y acumulación de capital en Argentina” en Dossier de Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), n°79, diciembre de 2011.

----- (2004) “La crisis de la representación política como forma concreta de reproducirse la base específica de la acumulación de capital en Argentina”, Centro para la Investigación como Crítica Práctica (CICP), agosto de 2003. Una versión abreviada de este artículo fue publicada en Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, Rio de Janeiro, Número 15, dezembro 2004, páginas 88-110.

----- (1998) *La acumulación de capital en la Argentina*, Centro para la Investigación como Crítica Práctica, Buenos Aires.

----- (2004) *El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia*, 3° edición, Ediciones Cooperativas, 2004.

----- (2008) *Terratenientes, retenciones, tipo de cambio, regulaciones específicas: Los cursos de apropiación de la renta de la tierra agraria. 1882-2007*, Centro para la Investigación como Crítica Práctica, Buenos Aires.

----- (2014) *Manifestaciones de la acumulación de capital en la Argentina desde 1960*. Presentación PPT. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Kosellek, Reinhart (2007) “Crisis” Apéndice de *Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués*, Madrid, Trotta.

Kulfas, Matías (2016) *Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina. 2003-2015*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Levy Yeyati, Eduardo y Diego Valenzuela (2007) *La resurrección. Historia de la poscrisis argentina*, Sudamericana, Buenos Aires.

Marx, Karl (2008) *El capital. Crítica de la Economía Política*, Vol. 1, Siglo XXI, Buenos Aires.

----- (2013) *El capital. Crítica de la Economía Política*, Vol. 6, Siglo XXI, Buenos Aires.

----- (1972) *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, Anteo, Buenos Aires.

Merino, Gabriel Esteban (2007) “La masacre de Kosteki y Santillán: Acerca del mecanismo de golpe de estado. Proyectos estratégicos en disputa” [en línea]. Trabajo final de grado.

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.514/te.514.pdf>

----- (2012) “El «Grupo Productivo» y las condiciones económicas del pasaje a la lucha política por modelos de capitalismo”, presentación en las VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en:

<http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/actas/Merino2.pdf>

Miotti, Luis y Carlos Quenan (2004) “Análisis de las grandes crisis estructurales: el caso de la Argentina” en Boyer, Robert y Julio C. Neffa *La economía argentina y su crisis (1976-2001): visiones institucionalistas y regulacionistas*, Miño y Dávila, Buenos Aires.

Natanson, José *et al* (2004) *El presidente inesperado. El gobierno de Kirchner según los intelectuales argentinos*, Homo Sapiens, Buenos Aires.

O'Donnell, Guillermo (1982) *El Estado Burocrático Autoritario*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires.

Pérez Álvarez, Gonzalo (2010) *Cambios en la estructura económica social y conflictos sociales en el noroeste del Chubut 1990-2005*, tesis doctoral, Memoria Académica, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas.

Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.369/te.369.pdf>

Piva, Adrián (2012) *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*, Biblos, Buenos Aires.

----- (2015) *Economía y política en la Argentina kirchnerista*, Batalla de Ideas, Buenos Aires.

Portantiero, Juan Carlos (1977) “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)” en *Revista Mexicana de Sociología*, Vol 39 n°2 (abril-junio 1977), pp. 531-565.

Poulantzas, Nicos (1990) *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Pucciarelli, Alfredo (2014) “Crisis sobre crisis. La Ley de Déficit Cero. Golpe de mercado, retorno a la ultraortodoxia, crisis política y comienzo de la resistencia popular” en Pucciarelli y Castellani (coord.) *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Pucciarelli, Alfredo y Ana Castellani (2014) “Los años de la Alianza: transformación de la crisis de acumulación en crisis orgánica”, Introducción de Pucciarelli y Castellani (coord.) *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Rocca, Facundo y Javier Wainman (2012) “Kirchnerismo y Hegemonía, una primera aproximación” en *I Jornadas de Estudio de América Latina y el Caribe*, Buenos Aires.

Salvia, Sebastián (2014) “Empresarios, convertibilidad y crisis. ¿Entre la dolarización y la devaluación?” en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, núm. 50, septiembre 2014, pp. 177-193, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Sarlo, Beatriz (2011) *La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010*, Sudamericana, Buenos Aires.

Schorr, Martín y Andrés Wainer (2005) “Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del «modelo de los noventa» al del «dólar alto»” en *Realidad Económica*, nº 211, IADE, Buenos Aires.

Shaikh, Anwar (2006) *Valor, acumulación y crisis. Ensayos de Economía Política*, Ediciones RyR, Buenos Aires.

Sidicaro, Ricardo (2010) “Después de Los tres peronismos”, Epílogo a la reedición de *Los tres peronismos. Estado y poder económico*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Varesi, Gastón Ángel (2013) “Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la Argentina posconvertibilidad” en Grigera (comp.) *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Wainer, Andrés (2013) “Cambios en el bloque en el poder a partir del abandono de la convertibilidad. ¿Una nueva hegemonía?” en *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Williams, Raymond (1980) “Base y superestructura” capítulo 1 de *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península.

Fuentes

Artículos periodísticos firmados

Bonasso, Miguel “La masacre anunciada”, *Página/12*, 27/06/2002.

Cufre, David y Alfredo Zaiat “Trabajamos para sacar a la economía del riesgo de hiper”. Entrevista a Roberto Lavagna, *Página/12*, 5/5/02.

Laborada, Fernando “Kirchner al gobierno, ¿Duhalde al poder?”, *La Nación*, Columna de Opinión, 12/01/03.

Moreno, Sergio “Él quiere ser candidato del PJ”. Entrevista a Néstor Kirchner. *Página/12*, 23/06/2002.

Pique, Martín “Los gobernadores, firmes junto al FMI, apoyan, pero no se juegan”, *Página/12*, 25/04/2002.

Serra, Laura “Carrió, Kirchner e Ibarra, unidos por la caducidad de mandatos”, *La Nación*, 12/07/02.

Fuentes estadísticas y Jurídicas

Centro de Estudios Legales y Sociales (2003) *Plan Jefes y Jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derechos?*, mayo de 2003, Buenos Aires.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2014) *Sistema integrado de información agropecuaria*.

Ministerio de Economía (2003) *La economía argentina durante 2002 y evolución reciente*, Informe 44, Buenos Aires. Disponible en:

<http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/informe44/introduccion.pdf>

Fuentes filmográficas

La crisis causó 2 nuevas muertes. Documental de 2006 dirigido por Patricio Escobar y Damián Finvarb.

Memorias políticas

Amadeo, Eduardo (2003) *La salida del abismo. Memoria política de la negociación entre Duhalde y el FMI*, Planeta, Buenos Aires.

Duhalde, Eduardo (2007) *Memorias del incendio. Los primeros 120 días de mi presidencia*, Sudamericana, Buenos Aires.

Notas sin firma en diarios nacionales

Clarín, artículos varios.

La Nación, artículos varios.

Página/12, artículos varios.

Fuentes periodísticas de investigación

Bondarovsky, Nicolás (2014) “Economía: la extraordinaria ganancia de los bancos”, *Agencia Paco Urondo*, 24 de mayo de 2014.

Burgo, Ezequiel (2011) *7 ministros. La economía argentina: historias debajo de la alfombra*, Planeta, Buenos Aires.

Chorny, Rubén (2014) “Bancos: los grandes ganadores de la década”, *Mercado*, 4 de agosto de 2015.

Míguez, Daniel (2013) *Diez años. Una década de gobierno kirchnerista*, Planeta, Buenos Aires.